

61ª REUNION — Continuación de la 29ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) —
SEPTIEMBRE 3 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Palmiro B. Bogliano,
Miguel P. Del Pero y Guillermo A. Belgrano Rawson

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CAMARA, José
ALFONSIN, Raúl E.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRENI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CALVO, Carlos Alberto
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHEBLE, Francisco E.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DIAZ O'KELLY, Felipe F.

DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NUÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
GARAY, Fernán J.
GARCIA, Horacio
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LESCANO, Edmundo A.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTINEZ, Ramón S.
MARTINEZ RAYMONDA, Rafael J.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco

NOUGUÉS, Isaias J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNANDEZ, Angel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREZ GALLART, Alcides B.
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor S.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
ROBERTO, Mario
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SANDLER, Héctor R.
SANTA MARIA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCALITER, Juan
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCIA, Alberto
SOLARI, Juan Antonio
TACHELLA, Eliberto S. J.
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
VINALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

<p>AUSENTES, EN COMISION:</p> <p>BO, Angel FREGA, José LEÓN, Luis Agustín PEREIRA, Antonio SOLANA, Jorge D.</p> <p>AUSENTES, CON LICENCIA:</p> <p>CASTELLAR, Miguel A. CUERDO, Ramón</p>	<p>AUSENTES, CON AVISO:</p> <p>BALBOA, Hernán A. CANTONI, Angel S. rafin CORNEJO LINARES, Juan Carlos FIGUEROA, Jaime Hernán GARCIA LEYENJA, F. Rodolfo GÓMEZ MACHADO, Héctor LILJESTROM, Eduardo R. MASSOLO, Eduardo A. MERCADO, José Ignacio MOSSET ITURRASPE, Mario</p>	<p>PALACIOS, Alfredo L. PENA Y LILLO, Silvestre REQUENA, Raúl María SALADO, Francisco A. SOLARI, Eduardo A. TARULLI, Pascual</p> <p>AUSENTES, SIN AVISO:</p> <p>ARANA, Tomás P. DÍAZ, Diógenes C. GALEANO, Roberto A. PÉREZ, Raúl</p>
--	---	--

SUMARIO

1.—Manifestaciones.

2.—Legislación represiva. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la materia.

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de septiembre de 1964, a la hora 15 y 30:

1

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Bogliano). — Señores diputados: la sesión debía continuar a las 15, y en este momento son las 15 y 30. Están anotados para hacer uso de la palabra los siguientes señores diputados: Reñé, Schaposnik, Cheble, Achiary, Caro, Rouzaut, Iglesias, Ortiz Hernández, Sandler, Sarrulle, Nougues, Lejarraga, Llavver, Amura, Contini, Godoy, Costantino y Pedrini. Por lo tanto, la Presidencia ruega a los señores representantes de los bloques que hagan saber a sus oradores sobre la conveniencia de que estén presentes en el recinto para recomenzar la sesión de inmediato.

Sr. Alfonsín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Bogliano). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Solicito, señor presidente, que se continúe llamando hasta las 16, para recomenzar la sesión en esa oportunidad.

Sr. Presidente (Bogliano). — Tiene la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Sarrulle. — Desearía saber si la Cámara había pasado a cuarto intermedio, señor presidente.

Sr. Presidente (Bogliano). — Así es, señor diputado.

Sr. Catalán. — ¿Cuántos diputados hay en la casa?

Sr. Presidente (Bogliano). — En la casa hay 63 señores diputados.

Sr. Pedrini. — Solicito que se invite a los señores diputados a concurrir al recinto.

Sr. Sarrulle. — Sugiero que se adopte el temperamento indicado por el señor diputado Alfonsín.

Sr. Presidente (Bogliano). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bogliano). — Se continuará llamando.

—Se continúa llamando.

—A la hora 16:

2

LEGISLACION REPRESIVA

Sr. Presidente (Bogliano). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general del orden del día 88, con los dictámenes producidos por las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales sobre derogación de decretos y decretos leyes que contengan sanciones penales sin validez constitucional (1).

Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Señor presidente: este debate parece prematuramente agotado en los aspectos técnicos porque han sido hechas ya todas las citas que sería posible hacer en torno de las leyes represivas, con la enumeración de los decretos leyes y aspectos vinculados con la doctrina. Pero, más que todo, este debate está prematuramente agotado en lo que respecta a la receptividad de la Honorable Cámara. Podría decir que él no responde a la expectativa y a los requerimientos que se habían hecho acerca del tratamiento de la derogación de las leyes represivas.

Es un hecho digno de destacar, porque la Cámara y el país parecen no estar en condiciones de comprender qué es lo que está pasando con respecto a estas normas cuya derogación fue reclamada durante tanto tiempo en las plataformas electorales de los partidos y de viva voz en este cuerpo, y ahora observamos indiferencia. Comprendo que la oportunidad de considerar la derogación adquiera características emocionales

(1) Véase Diario de Sesiones del 2 de septiembre de 1964, página 3053.

distintas. Habrá quienes todavía siguen discutiendo, en el terreno de las abstracciones, si la libertad es la mejor forma de vida. Yo diré que hemos sido víctimas durante mucho tiempo no sólo de las leyes represivas, sino de la persecución entronizada en el gobierno y del diario vivir en el miedo.

Quienes hemos salido de nuestras casas sin la esperanza del regreso, no en virtud de alguna ley determinada, sino porque todo el gobierno era un aparato represivo, sabemos lo que significa afirmar la libertad, como lo hacemos en este momento, al derogar estas leyes que eran instrumento de la represión.

Es en esta oportunidad que deben decirse algunas cosas, señor presidente. Yo, personalmente, no comparto tanto la necesidad de borrar el pasado, porque nuestro pueblo olvida demasiado fácilmente los ejemplos que hemos recibido. Y digo esto no para incubar la venganza, sino para aprovechar la experiencia que esos hechos han traído y poder afirmar así definitivamente las instituciones democráticas.

Nosotros, hoy o mañana, hemos de derogar las leyes represivas porque violentan la conciencia, la manera de vivir y de sentir del pueblo argentino.

Pero las leyes represivas no son producto de la generación espontánea sino la obra de gobiernos que adularon al pueblo, que hablaron de democracia y de libertad, que llegaron a las posiciones públicas por el sufragio popular, pero que vulneraron todos los principios republicanos y debieron mantenerse en el poder mediante el ejercicio irreflexivo de la fuerza, de la violencia, de la persecución, de la cárcel, del desempleo —problema que no se soluciona con la derogación de las leyes represivas— y del hambre.

No habrá legislación que pueda sancionar como corresponda al que introdujo el miedo y la corrupción como forma organizada de gobierno, pero la República habrá ganado mucho si fuera verdadero el sentimiento que anida en todos los bloques de esta Cámara al derogar estas leyes represivas, nacidas de gobiernos que no abdicaron de su estructura dominante y se desarrollan en una forma que si hubiese tiempo valdría la pena analizar, porque sería la radiografía de toda una época.

Sr. Pedrini. — ¿Se refiere al gobierno de Aramburu el señor diputado?

Sr. Schaposnik. — Me refiero a los gobiernos de 1943 en adelante.

Sr. Caro. — ¿Y los gobiernos anteriores?

Sr. Schaposnik. — También me refiero a ellos. Si los señores diputados pretenden embarcarme en una ubicación cronológica les diría que comprendo a todos los gobiernos que han practicado el fraude, la violencia y la dictadura. De manera que no vengo aquí a hacer un capítulo de agravios personales, sino a deducir

consecuencias de esta legislación que ha sido dictada por algún gobierno.

Estaba diciendo que quienes llegaron al gobierno, como antítesis de la persecución física y mental, se apoyaron en esta legislación, no derogaron ninguna ley, y no solamente eso, ampliaron el campo penal en esta materia. Ayer sobrecogía el ánimo escuchar durante casi todo el período de que disponía el señor diputado Bravo, hacer la enumeración de las leyes represivas dictadas durante varios gobiernos, no obstante que algunas habían sido derogadas para ser sustituidas por otras.

Es una maraña de leyes que ensombrecía y ensombrece aún hoy las conciencias argentinas, las que hoy nos proponemos derogar en conjunto. Hay cierta solemnidad en el acto que cumplimos. Es como si nos descargáramos de un lastre que nos encorbaba y que nos hacía sentir verdaderamente prisioneros dentro de nuestras fronteras.

Casi todos nosotros, en los últimos años, hemos pagado con cárcel nuestras ansias de libertad. Todos hemos sentido la persecución en los lugares de trabajo; todos —¿por qué no confesarlo?— hemos sentido el miedo, pero lo hemos sobrellevado, como sólo esta ciudadanía pudo hacerlo, con una valentía civil que constituye un verdadero orgullo. Y todos nosotros nos recogemos un poco en este instante para pensar en nuestros hijos, a quienes deseamos no les suceda lo que a nosotros nos pasó en toda una vida. Hemos arruinado prácticamente la existencia de una generación luchando en defensa de la libertad, que no es una lucha negativa, pero que evidentemente ha malgastado las fuerzas impidiéndole crear algo positivo durante todo este lapso. El fraude, la dictadura, la corrupción, han contribuido a anular las fuerzas de una generación para crear algo nuevo. Las generaciones venideras, nuestros hijos, tendrán derecho a preguntarnos alguna vez qué hemos hecho para dejarles algo mejor.

Ojalá pase el tiempo, y todo esto sea olvidado y nuestros hijos puedan construir lo que nosotros no logramos. Pero lo que no debemos olvidar en toda nuestra existencia, es el sentido de defensa de la libertad, porque eso sería el error fatal que permitiría el regreso de cualquier dictadura.

La cultura y la universidad, el pensamiento y la acción, fueron postergados durante mucho tiempo, no por obra de una ley determinada, que pudiéramos derogar hoy, sino por acción y presencia del miedo y de la persecución generalizada. Hubo persecuciones a obreros y a profesores; quema de bibliotecas y de locales de partidos políticos; destrucción de iglesias y atentados personales. Todos estos hechos pueden ser figuras del Código Penal cuando son aislados y no afectan a la conformación institucional del país, cuando no interesan la estructura general de un gobierno. Pero cuando todo el apa-

rato gobernante se vuelca contra la población indefensa, que no tiene más poder de resistencia que su coraje, ese gobierno, como la historia lo enseña, no tendrá castigo. Pero tenemos el derecho a sostener que podemos y debemos calificar esa traición a las instituciones, a esos enemigos de la democracia, que no merecen convivir en un pueblo culto y democrático, amante de la libertad, que supo acoger con credulidad las promesas y las esperanzas que fueron formuladas en períodos preelectorales.

Esta sanción de hoy tiene un sentido. Debe traer a todas las conciencias argentinas, a esta Nación que parece jactarse de la falta de recuerdos, una enseñanza que perdure más allá del episodio de la discusión en este recinto. La trascendencia del acto que vamos a ejecutar hoy, importa tanto la restauración de la libertad perdida como una sanción imborrable a quienes dictaron este tipo de legislación, a quienes colocaron al país en esta encrucijada que tantos reclamos ha provocado para poder salir de ella.

Cuando las normas penales han sido usadas para perseguir la militancia política y gremial, conviene determinar en qué circunstancias y quiénes han sancionado esas leyes o decretos que hoy vamos a derogar y, sobre todo, cuáles eran los males que aquejaban a la justicia argentina que impidieron que prosperaran todos los recursos en defensa de los derechos constitucionales vulnerados en cada caso. La justicia se encogió de hombros ante la persecución y la arbitrariedad. Los abogados nos tuvimos que encoger de hombros cuando venían a reclamar nuestra defensa y éramos impotentes para poder solucionar un problema de angustia de una familia frente a los desaparecidos de su casa.

Los socialistas democráticos hemos de defender la libertad y hemos de combatir siempre a quienes son sus enemigos, con todas las armas que estén a nuestro alcance. Y los enemigos de la libertad son tanto los militantes de agrupaciones totalitarias como los ladrones de los dineros públicos que desprestigian la democracia y favorecen la implantación de los gobiernos providenciales.

Yo destacaré la importancia de la sanción que vamos a dar hoy, remarcando a grandes trazos las aberraciones jurídicas dispuestas por gobiernos que pretendieron marcar una época en la historia argentina y, sobre todo, para señalar como hecho auspicioso que debe servir de ejemplo a todos, que son los propios partidos políticos que implantaron esta legislación represiva, algunos de cuyos autores se sientan en estas bancas, los que se encuentran más apremiados por la derogación.

Sabiendo todo esto, debe servir como experiencia el hecho de que toda esa legislación se vuelve contra quienes la sancionan. Quien pretende restringir la libertad de los demás termina enajenando la suya propia y clama por recuperarla después de manos de otro gobierno,

porque la condición de aliado le impidió defender las instituciones en su momento. En ese entonces hubiéramos querido contar como aliados en las mismas trincheras a quienes defienden en este momento con tanto énfasis la derogación de las leyes represivas. Pero lo que está mal es pretender señalar como período en el cual se sancionaron estas leyes el comprendido entre marzo de 1962 a octubre de 1963. Esta legislación tiene el mismo común denominador que la que arranca en el año 1958 o en 1943.

El Ejecutivo que se hace cargo del gobierno en 1958 gobierna bajo el signo del estado de sitio como cosa permanente. No debemos olvidar que la ciudadanía vivía la angustia de la persecución, que sólo salía de ese estado 24 horas antes del comicio; ni una hora más disponían los partidos políticos para desenvolverse sin estado de sitio; solamente se levantaba por 24 horas para que se pudiera votar.

Quiénes habían predicado el derecho de huelga como un derecho natural e inalienable del pueblo, indestructible y legítimo en la época del peronismo y de la Revolución Libertadora, son los encargados de someter a los obreros de Mendoza para impedirles manifestarse en cuanto a la defensa del petróleo argentino.

Ese es el signo inicial y determinante de un gobierno que se maneja con todas las leyes represivas que heredó, que no derogó y que perfecciona día a día, que le agrega cada vez más hasta confundir a los jueces y a los abogados que no saben de la posibilidad de la defensa. Esa legislación tiene un destinatario casi permanente: las fuerzas políticas que pactaron con quien estaba en ese momento en el gobierno.

Voy a citar algunos ejemplos, porque no quiero en este momento repetir toda esa legislación que ya ha sido citada por el señor diputado Bravo. Hay decretos que son sintomáticos, como el 15.169, de 1960, firmado por los doctores Frondizi y Vítolo, por el que se prohibía en todo el territorio de la República la actividad del Partido Justicialista, «porque su conducta, preconizando la subversión y el caos, el total acatamiento a las órdenes dictadas desde el exterior, no es sino un nuevo elemento demostrativo...», etcétera. Recordemos que quien firma ese decreto es el mismo que firmó el pacto con la fuerza política a quien después proscribió y que lo llevó al poder.

Remarco estos hechos porque no habrá defensa posible de la democracia si no hay sanción, aunque sea moral, a la deslealtad política y al fraude ideológico, porque el signo de la traición será el que marque con caracteres indelebles el futuro del país.

Hay dos decretos más de fecha 16 de marzo de 1960, los que llevan los números 2.628 y 2.629. Por el primero se establece que «atendiendo a la reiteración de graves atentados terroristas contra la vida y el patrimonio de los habitantes del país, pónese en ejecución el estado de conmoción interior, el famoso plan Conintes, declarado con

fecha 14 de noviembre de 1960». El segundo declaró sometidas a la justicia militar a las personas incurso en delitos previstos en el Código Penal y en las leyes 15.276 y 13.985. Nosotros que estamos hablando de las leyes especiales, que han sacado de la jurisdicción de los jueces locales a los ciudadanos, para llevarlos a la jurisdicción de los jueces federales, en el año 1960 se destinaba a la justicia militar a los obreros en virtud de la aplicación del plan Conintes. Y en un ejemplar del Boletín Oficial, que ha de ser historia, aparece el decreto 5.249/59, en relación a otro anterior, por el cual se militarizaba al personal de YPF después de la declaración de su huelga, y se establecía para los obreros petroleros que «la fajina se aplicará, según criterio del jefe militar de movilización, aprovechando en lo posible la función específica del sancionado y que las facultades disciplinarias se ejercitarán conforme a lo prescrito en la reglamentación de las leyes de la justicia militar». Ese decreto fue firmado por el autor de *Política y petróleo* y, además, por el autor de una recopilación sobre la reforma universitaria.

La discrepancia de los despachos se marca en los artículos de la reforma del Código Penal. No voy a cometer la imprudencia de repetir en este momento citas de autores que ya han sido mencionadas en la reunión anterior. Por otra parte, los penalistas más destacados del momento han concurrido al seno de la comisión, y tenemos sobre nuestras bancas el compendio de sus opiniones en torno a la reforma.

Alguno de esos autores sirve de basamento a quienes sostienen que no deben dictarse leyes que reformen en forma aislada el Código Penal. Yo valoro la opinión de ese tratadista, aunque hay también un poco de amor propio en la cuestión, pues desde el año 1960 se encuentra en la Comisión de Legislación Penal un proyecto de código penal del cual es autor dicho tratadista, habiéndose inferido una y otra vez su consideración. Mientras tanto, durante ese período que arranca desde antes de 1960, se siguió dictando leyes aisladas. Toda una legislación represiva se dicta antes y después de 1960.

Este aspecto de la cuestión —no nos engañemos— es de carácter político. Salvo lo referente a la legislación sobre cheques, que vamos a sancionar en este momento, casi todo el resto de la sanción tiene características que se refieren a aspectos políticos, sobre todo en la parte predominante de los despachos.

Sostengo que tendremos muchos derechos en la democracia, pero desde el punto de vista político no tenemos derecho a ser ingenuos y dejar desguarnecida la democracia para que grupos totalitarios puedan reeditar aventuras que deben quedar para siempre atrás en nuestra historia. Sostengo que la democracia debe defenderse. Los artículos que sancionaremos hoy o que proponemos luego al terminar la discusión en general, tal vez no constituyan todo lo que pretendemos para defender la democracia, pero han

de señalar el principio de que la democracia no está inerme para defenderse cuando sea necesario.

Hay un hombre de experiencia política y de experiencia en la doctrina penal, que concurrió al seno de la Comisión de Legislación Penal; un hombre a quien durante más de un cuarto de siglo el exilio le ha enseñado que la democracia no debe descuidarse. Jiménez de Asúa ha venido a decirnos en el seno de la Comisión de Legislación Penal que toda disposición penal tiene un aspecto político y que la simultaneidad en la derogación de la legislación represiva y la sanción de reformas al Código Penal depende, en esencia, de un problema de política legislativa; y que, si bien el artículo 210 del Código Penal castiga la asociación de delinquentes, conviene tal vez políticamente remarcar la asociación que tiene por finalidad la violencia contra las personas o las cosas.

Sr. Caro. — No dice eso, señor diputado.

Sr. Presidente (Bogliano). — Ruego al señor diputado Caro que solicite la correspondiente interrupción al orador, y que tenga la bondad de dirigirse a la Presidencia.

Sr. Caro. — Si me permite el señor diputado Schaposnik, con autorización de la Presidencia...

Ruego al señor diputado que lea la cita literal de la opinión del profesor Jiménez de Asúa, porque me parece que la está glosando y, de esa manera, deformando su sentido.

Sr. Schaposnik. — Le hago notar al señor presidente de la Comisión de Legislación Penal, que la opinión que he recordado se encuentra sintetizada en dos párrafos de la exposición que hizo el profesor Jiménez de Asúa en la comisión. En uno de ellos dice claramente, cuando se refiere a las disposiciones penales en general, que esa materia puede constituir un problema de política legislativa; y en otro párrafo, cuando hace referencia al proyecto de reformas al Código Penal, propone la supresión de la parte relacionada con la lucha de clases, en lo cual estamos perfectamente de acuerdo, porque después de todo el profesor Jiménez de Asúa abraza la misma doctrina política que nosotros. Y con respecto al resto del artículo, señaló que se trataba de una cuestión política que tal vez conviniera remarcar más si es que se entendía que no estaba claramente contemplada en el Código Penal.

Sr. Caro. — Pero lea las propias palabras del doctor Jiménez de Asúa, señor diputado.

Sr. Schaposnik. — Yo no tengo tiempo, señor presidente de la Comisión de Legislación Penal, de buscar ahora la versión taquigráfica de esa exposición. Si el señor diputado quiere contestar mis palabras, puede hacerlo oportunamente. Yo he leído la versión taquigráfica...

Sr. Caro. — Pero es que el profesor Jiménez de Asúa...

Sr. Presidente (Bogliano). — El señor diputado Schaposnik no admite interrupciones.

Sr. Schaposnik.—No es que no admita las interrupciones, señor presidente, aunque tal vez no convengan para el desarrollo del debate. Pero advierto al señor diputado Caro que lo que he expuesto constituye el pensamiento del doctor Jiménez de Asúa de acuerdo con lo que yo he leído. A pesar de que el señor diputado entienda otra cosa, yo no estoy haciendo ningún fraude con respecto a la opinión del señor Jiménez de Asúa. Se trata de mi interpretación de lo que él afirmó. No tengo tiempo, como dije, de buscar ahora la versión taquigráfica de ese discurso. En todo caso, si al señor diputado le parece conveniente, puedo buscarlos después, con más tiempo.

Sr. Caro.—Muy bien, señor diputado.

Sr. Schaposnik.—En la época del auge del nazismo —enquistado aún hoy en nuestro país— nuestro partido sostuvo la necesidad de la sanción de una ley contra el totalitarismo, llamada ley de defensa de la democracia. El proyecto respectivo estaba suscrito, entre otros, por los doctores Silvio Ruggieri y Carlos Sánchez Viámonte. Es que cuando la democracia y la República se encuentran en peligro, los partidos y el Congreso deben reaccionar en la medida del agravio recibido.

Se ha dicho reiteradamente, en la Cámara y fuera de ella, que no es necesario sancionar reformas aisladas al Código Penal, porque de una u otra manera las formas delictivas a que me refiero están contempladas ya en ese cuerpo legal. Yo sostengo —y mi partido también— que no existe claridad legal ni disposición expresa alguna con referencia a figuras que han surgido como expresión del totalitarismo en las últimas décadas, y que por ello no pudieron ser contempladas en la época de la sanción del Código Penal.

Hace poco tiempo he debido presentar un proyecto, que firmé juntamente con distinguidos diputados de otros sectores, por el cual se reeditaba un decreto prohibitivo del funcionamiento de entidades caracterizadas por su condición totalitaria.

Un juez de la República, en el momento de sancionar con la prisión preventiva un crimen alevoso cometido en base al adoctrinamiento del odio, reclamó al país, y en especial a este Parlamento, la sanción de leyes que terminarían de una vez por todas con esas asociaciones. La Policía Federal, reclamada para que actuara en forma preventiva para evitar los desmanes de esas entidades, manifestó que carecía de una legislación adecuada para actuar preventivamente y que sólo debía intervenir en el caso de que se produjera algún hecho que estuviera caracterizado dentro de las normas del Código Penal.

Ese crimen pudo haber sido evitado si la democracia hubiera estado prevenida. El mismo juez, al analizar las características del hecho,

dijo que posiblemente algunos de los componentes no serían individualmente capaces de llevar a cabo esos crímenes, pero el hecho de actuar en conjunto los reviste de una peligrosidad innegable que pueden llevarlos a cualquier extremo.

Señalamos en esa misma oportunidad los atentados cometidos en medios universitarios, que motivaron la reacción del decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que fue a pedir medidas al Poder Ejecutivo de la Nación.

Tengo aquí sobre mi banca listas de atentados terroristas cometidos en los últimos tiempos, fundados en la discriminación racial y, más típicamente, diría que fundados en el odio creado por la prédica del antisemitismo; estos atentados han seguido un promedio de más de uno por día, en varios meses de estadística.

Un atentado de esta índole puede llegar al crimen, y en ese caso es punible; puede causar destrozos, y es penado por los destrozos; pero el motivo de la agresión es otro. No es la muerte en sí misma lo que procuraba, ni es tampoco el destrozo por sí mismo. Ese no es el sentido de la agresión, y precisamente es este sentido específico lo que falta tipificar en el Código Penal. La sanción es urgente.

Esto no es de nuestro país solamente; esto no tiene únicamente caracteres locales. Yo diría que más que de nuestro país, esto es la expresión —y es importante destacarlo— de un elemento de distorsión que viene desde afuera.

Casi todas las naciones del mundo se encuentran empeñadas en lograr una legislación adecuada en estos aspectos. Yo voy a citar una parte de la resolución de las Naciones Unidas de fines de 1963, resolución cuya transcripción en el Diario de Sesiones ha sido pedida. Señalo que dicha sanción se debió al voto decisivo de la delegación argentina en el organismo mundial, la que propuso la enmienda que fuera en definitiva aprobada. En esa declaración se sostiene que urge castigar la incitación al odio racial.

De las delegaciones de los países latinoamericanos se abstuvieron de votar las del Brasil, Panamá y Cuba. La declaración fue votada por unanimidad; pero el Brasil y Panamá se abstuvieron por considerar que la declaración era muy débil. Cuba se habrá abstenido por otros motivos; posiblemente porque la doctrina política de su gobierno tiene también su basamento en el antisemitismo que se desarrolla en gran parte de los países ocupados por el comunismo. El artículo 9º de esa declaración, aprobada por la asamblea de las Naciones Unidas, condena severamente la propaganda racista. No voy a leer el texto íntegro, porque reitero que su transcripción en el Diario de Sesiones ya se ha pedido. Pero hay una parte que interesa ahora señalar. Dice la declaración que los Estados deben tomar medidas para enjuiciar y, llegado el caso, declarar ilegales las organiza-

ciones que promuevan la discriminación racial o que usen de la violencia con propósitos de discriminación basados en raza, color u origen étnico. Las disertaciones que precedieron a su sanción son magníficas, pero no voy a dar cuenta de ellas y sólo quiero referirme a lo manifestado por el delegado del Uruguay en esa oportunidad. El Uruguay, país de firme y sostenida tradición democrática, sostuvo que no existía la menor duda de que las organizaciones racistas debían ser enjuiciadas y declaradas ilegales, y también que cada país debe darse cuenta de las amenazas que ellas representan para la sociedad.

Para el representante uruguayo la discriminación racial debe ser objeto de una lucha encarnizada; y la adopción de medidas legislativas, el primero de los medios a emplear para dicho fin. Cabe señalar que desde el año 1940 el Uruguay había penado con trabajos forzados a los integrantes de las organizaciones racistas.

Es necesario evocar esta declaración de las Naciones Unidas en este momento en que vamos a dar una sanción de castigo a quienes inducen al odio racial en el país. Todos los días debería repetirse esta lección de las Naciones Unidas, no solamente en las escuelas sino en el propio Congreso de la Nación, para que este problema no se margine, para que no se presente a diario con manifestaciones que inducen a la convicción de la existencia de una cuestión racial en el país.

Un eminente hombre de derecho americano, autor del decálogo que el Colegio de Abogados de La Plata entrega como símbolo a los recién diplomados, y que proyectó para el Uruguay una ley que fuera recogida por todos los sectores políticos, el doctor Eduardo Couture, enuncia en el artículo 1º de su proyecto que el que suscitare públicamente, en forma oral o escrita, el odio y el desprecio hacia las personas de determinadas razas, color, religión o nacionalidad por su condición de tales, será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión. Hay aquí un concepto fundamental que es necesario señalar, en reafirmación del principio sostenido por las Naciones Unidas.

Años después, en agosto de 1962, fue presentada otra iniciativa a la Cámara de Diputados del Uruguay, algunos de cuyos aspectos son mucho más claros que los que contiene el proyecto presentado a esta Cámara y que está en consideración. Ese proyecto, cuyos autores, Héctor Paysse Reyes y Alberico Passadore, modifican con éxito la primitiva proposición de Eduardo Couture, dice en su artículo 1º que el que públicamente, en forma oral, escrita o gráfica, provocare o suscitare desprecio u odio a otra persona o personas, o a agrupaciones, colectividades o instituciones, por razones de raza, nacionalidad, color o religión, será castigado de oficio con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. El

artículo 2º, que es el que falta en el proyecto, dice que si el delito se cometiera por organizaciones o personas jurídicas o respondiera a concierto entre varias personas, la responsabilidad penal recaerá sobre cada uno de los dirigentes y/o coautores y tal circunstancia deberá reputarse como agravante a efectos de la graduación de la pena. Es decir que en este caso se tipifica el acto individual y también el acto cometido por las entidades, es decir, se actúa preventivamente en el caso de que las sociedades pretendan crear el odio racial.

Una norma penal debe responder a la necesidad jurídico-política del momento en que se sanciona. Posiblemente dentro de un tiempo esta norma pueda estar de más. Pero en este momento se nota su ausencia. No vamos a volver a repetir la polémica entre la intangibilidad de la codificación y las ventajas de la sanción de leyes aisladas frente a la inamovilidad de la codificación. Los tiempos han ido enseñando mucho, y los métodos han cambiado en este sentido. Por razones ajenas a nuestras posibilidades de control, en algunos casos originadas en el exterior, a veces recrudecen las formas de persecución racial y religiosa, en ocasiones porque encuentran campo propicio en mentes proclives al totalitarismo.

En este momento podemos decir que existe en la Argentina un movimiento organizado bajo distintos nombres, que persigue como objetivo crear la conciencia del antisemitismo. En ese movimiento han participado entidades que tienen el común denominador de ser totalitarias y que gustan satisfacer sus ansias de acción con lemas simples e irracionales, creando el fantasma del semitismo, al que con otros rótulos denominan judaísmo o sionismo. Fomentan el mito de su patriotismo y llegan, finalmente, al crimen justificado en ese falso patriotismo. Los atentados terminan por ser penados cuando asumen la forma de atentados físicos; pero muchas veces escapan a la acción penal.

Todas las naciones civilizadas poseen una legislación represiva para este tipo de delitos. Así sucede en todos los países donde existen estas agrupaciones que tienden a la acción y a la violencia, y que nada tienen que ver con la expresión de las ideas, que todos queremos proteger. Se trata, en algunos casos de entidades militarizadas, que pretenden amparar sus tropelías bajo un fundamento político.

Es necesario que el Estado actúe en forma distinta cuando se trata de destrozos o crímenes que no son de orden común. Esto es lo que vamos a exigir después de sancionar esta ley, para que el Estado castigue y persiga estos tipos de organizaciones que nada tienen que ver con la tradición argentina de libertad. Yo sé que la norma penal no será suficiente, porque esto depende en gran parte de la cultura del pueblo, pero iremos tomando las medidas en todos los campos. Mientras tanto, la norma penal es considerada imprescindible, no solamente

aquí sino en el mundo entero, y con esto nosotros no hacemos más que reafirmar un principio que hemos mantenido siempre con respecto a la defensa de la libertad y de las creencias.

La Cámara de Diputados de Córdoba ha dado a este respecto una sanción ejemplar. El Poder Ejecutivo de Santa Fe también ha tomado medidas adecuadas. Numerosos organismos culturales y políticos han emitido su opinión, y casi todos los partidos políticos han hecho oír su palabra de recriminación. Frente al panorama de la sanción de leyes aisladas, como las que se han dictado en el país, yo sostengo la necesidad de que en este momento se sancione una ley que incrimine a las entidades de tipo totalitario que pretenden crear este problema en el país.

En esta exposición, que llega casi a su fin por la hora, no es posible abarcar todos los aspectos comprendidos en la reforma del Código Penal, pero quiero referirme, aunque sea a vuelo de pájaro, a algunos de los principales contenidos en el proyecto. Quiero poner especial énfasis en las disposiciones contenidas en el proyecto del Poder Ejecutivo y adoptadas por algunos de los despachos, en lo que atañe al enjuiciamiento de los funcionarios públicos por enriquecimiento ilegítimo.

Siempre hemos auspiciado medidas de esta naturaleza y hemos sido autores de proyectos con disposiciones por las que se penaba el enriquecimiento ilícito. En consecuencia, hemos de apoyar cuantas medidas se auspicien en este sentido, pero debo señalar que las formas de la delincuencia han progresado tanto que las fórmulas para combatir el enriquecimiento ilícito están un poco caducas.

Sería una perogrullada decir que la única forma de evitar la delincuencia en el orden del enriquecimiento ilícito de los funcionarios, sería la de llevar buenos funcionarios al gobierno para no lamentarse después. Pero ésta es la realidad que tenemos en este momento. Se trata de aplicar sanciones que, aunque sean morales, tendrían su eficacia, pero las sanciones deben ser tanto para los funcionarios que se enriquecen directamente como para los que lo hacen indirectamente o que contribuyen a enriquecer a otros, o que de alguna manera favorecen que se cree el clima propicio para la corrupción organizada.

En muchos casos tal vez sea ineficaz la norma penal, aunque estoy seguro que en alguna medida los alcanzará. Citaré algunos ejemplos de cómo actúan los factores de corrupción en la administración pública, que no están contemplados en los proyectos. Existen los casos de las fábricas de automotores, cuyas franquicias y negociados dependen casi exclusivamente de la complacencia del gobierno, dándose el caso de funcionarios públicos que terminan en sus cargos como tales y luego aparecen en el directorio de las empresas favorecidas por tales privile-

gios. De paso, quiero señalar que se observa un poco de falta de sensibilidad en el gobierno para responder a los pedidos de informes, cuando se trata de aspectos tan delicados como los relacionados con los privilegios acordados a ciertas fábricas, cuantiosos en el orden monetario y dudosos ante la opinión pública. Ahí está el pago para el funcionario, aunque no aparezca como enriquecimiento directo e inmediato en su cuenta bancaria, y con el agravante de que posiblemente antes de abandonar la función pública desempeñaba tal vez simultáneamente funciones en la empresa.

Otro caso de corrupción que hemos tenido oportunidad de comprobar es el de las empresas que entregan acciones fundadoras de valor 100 pesos nominales, que no acrecientan patrimonio pero que dan, prácticamente, la llave de la empresa. Está el caso de empresas argentinas, en las cuales figuran funcionarios que luego terminan asociándose a empresas extranjeras que se radican en el país. Esas son formas de delincuencia que no están contempladas en los proyectos, respecto de las cuales hay que buscar la norma legal que facilite la sanción.

El negociado del trigo candeal, mediante el conocimiento previo de los nuevos precios a fijarse; el de la desvalorización de la moneda mediante la compra de dólares cuando se sabía que al día siguiente se iba a producir la desvalorización, y sacando para ello dinero público de los bancos, son formas de enriquecimiento.

Recuerdo que el ex ministro Blanco indicaba como causa de la baja del valor del dólar el hecho de que se habían impedido las maniobras especulativas que venían produciéndose en forma organizada.

Si queremos reconstruir al país tenemos que recurrir a los hábitos del trabajo constructivo, lo que no será posible mientras no se quite de las mentes, sobre todo de las mentes juveniles, que con el trabajo no se gana nada y que hay impunidad para quienes delinquen desde el gobierno o amparados o alrededor de él.

El primer paso para restablecer la paz y la confianza en la República se está dando al sancionar la ley que debatimos. No debemos olvidar que de aquí en adelante todo depende de los individuos, de los partidos políticos y del gobierno, pues si ellos olvidan su misión en el juego de la democracia posibilitarán la vuelta de la represión. No son sino los gobiernos de fuerza los que suceden al desorden, porque es el desorden que posibilita la existencia de esos gobiernos. Esa es la alternativa que vive el país.

De aquí en adelante no se podrá jugar a la democracia de los labios para afuera, y se debe posibilitar la estabilidad política e institucional por la democracia y en la libertad.

Tratamos de asegurar que nadie saque ventajas del juego limpio de la democracia. Las fuerzas de la libertad seguirán combatiendo.

contra toda forma de opresión, pues la libertad es eterna y no sabemos vivir en otra forma.

Este es el dilema. La ley es formal, pero la cuestión de fondo es crear la mentalidad propicia para restablecer la verdad en el país y terminar con los negociados, con los engaños y con el ansia del poder por el poder mismo, para ejercitar la represión y maniobrar en un ambiente amoral que domine y envuelva a la colectividad e impida el desarrollo de la mentalidad humana.

Cuando logremos todo esto habremos superado la legislación. Entonces sí podremos decir que no es necesaria la reforma del Código Penal y que la democracia vence por el ejercicio de la libertad sin necesidad de defenderse por la fuerza dispuesta mediante sanciones penales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Reñé. — Si el señor presidente me permite...

Una gestión impostergable, que se prolongó en su trámite más de lo previsto, me hizo llegar con algún retardo al recinto, por lo que pido disculpas al cuerpo, a la Presidencia y al distinguido colega que debió suplirme en el turno.

En razón de que soy miembro informante, si reglamentariamente procede, pediría a la Presidencia se me autorice a hacer uso de la palabra en este momento.

Sr. Presidente (Bogliano). — Efectivamente, el señor diputado es miembro informante.

Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se le concederá el uso de la palabra al señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bogliano). — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — Agradezco la gentileza de los colegas y del señor presidente.

Antes de entrar en tema, quisiera precisar una corrección en el texto de nuestro despacho, de un error que seguramente se ha deslizado en el proceso de transcripción. En la parte primera del despacho, en el artículo 5º, donde dice «Corte Suprema de Justicia de la Nación», debe decir «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital».

Señor presidente: fácil me sería, si tuviera ánimo polémico, ampararme en la inmunidad que significa el hecho de que mi partido nunca haya debido compartir las responsabilidades del gobierno, y entrar en este debate con tono de ángel apocalíptico para hacer atribución de responsabilidades, olvidando méritos. Porque en esta semidemocracia más o menos turbulenta en que vive la Argentina, yo preguntaría cuál de los gobiernos que hasta ahora han estado en ejercicio podría arrojar la primera piedra con relación a algunas violaciones de mayor o menor entidad de los requisitos de la democracia.

Pero si bien es cierto que nunca se ha podido completar la democracia en la Argentina, es de reconocer, en mérito a quienes han ejercido el

gobierno, que hay una constante aspiración a la realización de esa democracia, que ya no es aquella que definía Lincoln en Gettysburg como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es una fórmula política superada por los hechos. Hoy estaría más de acuerdo con la expresión de Zorrilla de San Martín, cuando dice: «La democracia no es una forma o accidente, un fenómeno, sino algo así como una sustancia, una forma sustancial, o, mejor dicho, un espíritu que, unido al cuerpo social, lo anima y especifica. La democracia no es otra cosa que el respeto absoluto a la persona humana, con todos sus atributos esenciales: destino propio inalienable, libertad para realizarlo, dignidad, igualdad de especie, igualdad ante la justicia y ante la ley. Los que confunden, por ejemplo, y no son pocos, la democracia con una de las formas de gobierno no perciben con claridad su naturaleza.»

Y en apoyo de esto, y más desde un ángulo de ciencia política, Bidart Campos la define como «la forma del Estado que, orientada al bien común, respeta los derechos de la persona humana, de las personas morales e institucionales, y realiza la convivencia pacífica de todos en la libertad, dentro del ordenamiento de derecho divino y de derecho natural».

He aquí conceptos de la democracia, en un sentido moderno, que, sin olvidar las implicancias y los enfoques políticos de la sociedad organizada, llevan y extienden su sentido hasta aquello que acostumbramos definir como un estilo de vida. Estilo de vida que resulta complejo y que no es fácil de satisfacer.

La democracia no es solamente el voto popular; no la constituimos los diputados hablando en este recinto. La democracia tiene requisitos que satisfacer, y como requisito de fondo fundamental está su lucha y su afán de realización de la dignidad humana y, en segundo lugar, su afán de promover la libertad del hombre. Ahí están los objetivos, las notas de fondo de la democracia: la dignidad y la libertad del hombre.

Pero junto con esto enmarcan a su vez la realización de esta concepción democrática ciertas formalidades necesarias, porque son la garantía de aquella realización de fondo, ellas son: la participación del pueblo en la elección de las autoridades, la participación del pueblo en el poder y el control popular de las autoridades. Ahí tenemos caracterizadas las bases esenciales de la democracia, que no se ganan de una vez. La democracia es un estado huidizo y difícil de captar y cristalizar. La democracia es una realización paulatina que se va ganando todos los días. La democracia es un proceso largo, y este proceso está jalonado por traiciones, engaños, violaciones y ataques.

Y estamos en la médula del problema. Llegamos a esta pregunta: ¿tiene la democracia derecho a defenderse de quienes la atacan? ¿Puede

usar aquel derecho de defensa que Cicerón en el discurso *Pro Milone* caracterizaba como *non scripta sed nata lex*, es decir, como una ley no escrita, como una ley natural? Yo afirmo que sí. Creo en una democracia combatiente, que se realiza todos los días y que cada vez va ganando nuevas realidades. Creo en una democracia que lucha y que se defiende, porque la bienaventuranza evangélica no es para los pacifistas medrosos, que de puro terror ponen en el tajo la cabeza de los adversarios o la suya propia; la bienaventuranza del Evangelio es para los artífices de la paz, y la paz es obra de la justicia, así como la justicia es tranquilidad en el orden.

Es necesario un orden que respete y asegure los derechos de todos. Por eso los demócratas cristianos nos sentimos autorizados a decir con Emmanuel Mounier que existe un desorden establecido, un desorden que está instrumentado en favor de los privilegiados y que procura las ventajas de algunos y las desventajas de los más. Por eso en esta democracia combatiente entendemos que el primer jalón, el primer escalón, es un orden justo, que asegure la convivencia sobre bases de justicia general.

Estoy entrando, señor presidente, en lo que entiendo es la primera línea de defensa de la democracia, que consiste en crear las circunstancias condicionantes para que no hagan falta las tiranías, en crear un régimen y un sistema que aseguren al hombre justicia; un régimen y un sistema de flexibilidad suficiente como para transformarse según las necesidades de cada momento, que se vaya adaptando, que no se juegue por instituciones subsidiarias o secundarias; que se juegue por la dignidad y la libertad del hombre.

Esa es la manera primera de defender la democracia: demostrar que es eficaz. Pero hay también otra manera positiva de defenderla. Es la educación de la voluntad, que no se hace en la escuela; por lo menos no se hace solamente en la escuela. Se hace en la convivencia y con el ejemplo de cada día. Y aquí está nuestra responsabilidad. Presumimos de dirigentes del pueblo; presumimos de orientar al pueblo. Cuando el pueblo pueda señalarnos por la calle como los más auténticos, los más veraces, los más austeros y los más justos, no harán falta medidas de represión, porque a la democracia la estaremos defendiendo nosotros cada día en la educación del pueblo. Y coincido en esto con aquel famoso discurso de Pío XII sobre la democracia, cuando decía que una de sus finalidades es «poner al ciudadano en condición de tener más opinión personal propia y de manifestarla y hacerla valer de manera conveniente al bien común».

Pero aún creo que la democracia también tiene derecho a la defensa represiva. Así como el hombre tiene derecho a defenderse, a rechazar la ofensa injusta, también la democracia puede hacerlo; le asiste un derecho. Pero la existencia

del derecho no concluye con el problema. Un derecho se usa a través de medios y en oportunidades, y estoy convencido de que hay medios lícitos y medios ilícitos.

No creo que la democracia pueda defenderse con medios que atenten contra la esencia de la misma, porque en esas circunstancias dejaría de ser democracia y estaríamos, entonces, en el planteo de escoger entre dos o más regímenes de fuerza, lo que ya nos llevaría fuera del encuadre en que estamos.

La esencia de la democracia reside también en la defensa del derecho natural. Lo que atenta contra el derecho natural, tampoco puede ser utilizado como medio de defensa de la democracia. Tampoco puede utilizar medios que atenten contra la estructura institucional del Estado. El Estado se da su estructura, sus instituciones democráticamente consentidas y, en consecuencia, ese mismo Estado no puede volverse contra sí mismo, utilizando medios que soslayan o que allanen esas mismas instituciones que ha creado.

Por ello creo, entonces, que existe el derecho de defensa, pero existe dentro de ciertos límites, y éstos están dados por lo que es el derecho natural, la esencia de la democracia y las instituciones del Estado.

Por supuesto, entre las instituciones del Estado, la primera es la Constitución, que es la carta, el acuerdo con que los ciudadanos constituyen y organizan ese Estado.

Y bien, señor presidente; ¿cómo juegan, entonces, estos decretos leyes penales en la estructura de nuestro Estado? ¿Están enmarcados dentro de ella, o por el contrario se oponen? Es ésta una vieja cuestión que arranca desde la gobernación de Mitre y que ocasiona el primer fallo de la Corte en la materia, cuando dice que «el Gobernador de Buenos Aires y General en Jefe del Ejército fue autoridad competente para conocer y decidir en esta clase de asuntos, por ser quien ejerció provisoriamente todos los poderes nacionales después de la batalla de Pavón con el derecho de la Revolución triunfante y asentida por los pueblos, y en virtud de los graves deberes que la victoria le imponía.» Firman este fallo Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y José Benjamín Gorostiaga, firmas ilustres que dan origen a una jurisprudencia que veremos que sufre distintos avatares, pero que comienza consagrando la licitud de los decretos leyes de los gobiernos defacto.

Pero ahora no nos interesa el problema de los decretos leyes dictados durante los gobiernos defacto, genéricamente; nos interesan los decretos leyes en materia penal, que presentan características especiales, y sobre los cuales dice Soler en su obra *Derecho penal argentino*, tomo I, página 126, edición de 1951: «Al sentarse tal principio, sin embargo, entiéndese la palabra ley en su sentido lato, no comprendiendo solamente el Código Penal de la Nación, sino toda

otra ley del Congreso, que contenga sanciones penales —Código de Justicia Militar, leyes especiales incorporadas o no al Código Penal—. Tampoco se excluyen las leyes dictadas por las provincias en materia de prevención, policía, de acuerdo con las facultades reservadas en el artículo 104 de la Constitución Nacional y dentro de la esfera de atribuciones determinadas por las Constituciones respectivas.»

Esta es una cita que el profesor Soler hace de una conferencia del profesor Núñez. Sigue Soler: «Nuestro sistema constitucional no admite en lo penal la legislación delegada ni los decretos leyes.»

«Finalmente, los reglamentos autónomos dictados con frecuencia en materia de policía y que contienen penas llamadas de policía, sin sanción legislativa concreta, son de muy dudosa constitucionalidad, pues dado el respeto de nuestra Carta Fundamental por las libertades públicas, y el principio del artículo 18 de la Constitución Nacional, es indudable que tanto el Congreso como las provincias, procederían conforme a ella dictando leyes para la represión de contravenciones.»

«Observemos cómo el criterio de Soler en la materia lo lleva hasta exigir que sean los poderes legislativos provinciales exclusivamente quienes dicten las normas que se dirigen a la represión de contravenciones.

Y en la edición de 1963 agrega: «Nuestro sistema constitucional no admite en lo penal la legislación delegada ni los decretos leyes...» «En este tema, lo que no puede admitirse es que, vigente la Constitución se quiera buscar en ella fundamento para que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas comunes en materia penal, o acuerde a decretos de situaciones defacto una validez normal no obstante contener aquellos ciertas normas autolimitantes.»

De la misma manera se expide Eusebio Gómez citado por Jiménez de Asúa: «En un país como el nuestro, en que rige por imperio dogmático el principio *nullum crimen sine lege*, reconocido con las características de derecho primario en el artículo 18 de la Constitución Nacional es insostenible la concepción del decreto ley en materia represiva, sin que pueda justificarla ni siquiera la existencia de un gobierno de hecho...» Únicamente la ley, que es la expresión de la voluntad del Estado, puede estatuir acerca de los delitos y de las penas. La Constitución Argentina lo proclama en términos amplios.»

Podría seguir citando la opiniones de Ricardo Núñez y de Jiménez de Asúa, pero no quiero abusar de la paciencia de la Cámara e insistir en temas que seguramente los señores legisladores han estudiado ya exhaustivamente. Quiero sí remarcar que la Corte Suprema de la Nación ha tenido una jurisprudencia tradicional que se traduce en el fallo registrado en la página 20 del tomo 42, de «La Ley», cuando dice: «Una de las garantías más precisas de la

libertad consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional es el de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. No se necesita mayor esfuerzo para ver que esta garantía resultaría anulada totalmente si un gobierno defacto, sin representación popular, tuviera la facultad de establecer delitos y penas por decreto o agravar las penas establecidas, derogando, ampliando o modificando el Código Penal vigente, dictado por el Congreso Nacional, en uso de atribuciones expresas dadas por la Constitución. (Artículo 67, inciso 11.)»

Menciono ese fallo porque en él se produce una disidencia, reiteración de otras anteriores, del ministro Tomás Casares, quien dice que la Constitución no establece para la sanción de las leyes penales distintos requisitos que para las demás. «En tanto en cuanto un gobierno de hecho tiene facultades legislativas, la formalidad de la ley anterior en la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional está cumplida con una norma emitida por él, como lo está por una ley del Congreso.»

Hay aquí, señor presidente, una doble valoración. Por un lado la Corte expresa, indudablemente, que no tienen valor ni vigencia los decretos leyes en materia penal, por cuanto el texto constitucional establece el requisito de ley formal del Congreso. En cambio, el ministro Casares, en esta disidencia, que se hace después jurisprudencia de la Corte, piensa que si el poder defacto tiene facultades para dictar normas con valor de ley en otras materias, también las tiene en ésta, ya que la Constitución no ha establecido diferencias, por lo menos formales, entre una y otra categoría de materias.

Sin embargo, encuentro acertado el criterio originario de la Corte. Hace unos días el profesor Roberto Pérez Demaría, tan acertado y ceñido siempre en su criterio jurídico, me hacía notar, en una conversación privada, que no debe distinguirse en esta materia entre ley material y ley formal, ya que en la disciplina penal la ley material no existe si no reúne los requisitos formales que exige la Constitución, y ello porque la legislación penal tiene un carácter especial: es exclusivamente restrictiva. Y es, además, especial, porque en ella está en juego un bien demasiado importante, cual es la seguridad personal de cada uno de los habitantes de la Nación.

Esto, por su parte, se combina con la razón originaria de los decretos leyes. En efecto, ¿qué es lo que justifica el dictado de decretos leyes por un gobierno defacto? Es el estado de necesidad de la organización gubernativa, que debe seguir adelante y proveer lo necesario y conducente al bienestar general. Sin embargo, no se puede hablar de necesidades vagas del Estado. No puede haber estado de necesidad contra la seguridad personal; no puede hablarse

de estado de necesidad para ampliar una legislación restrictiva que, extendida y desdibujada, va a atentar contra la libertad y seguridad de cada uno de los habitantes del país.

La jurisprudencia de que hablaba sigue sosteniéndose por algún tiempo en ciertos tribunales, como la Cámara Federal de la Capital Federal, que —como se puede ver en el tomo LI, página 230, de «La Ley»— mantuvo el criterio de que el gobierno defacto no podía dictar penas por incumplimiento de leyes de impuestos. Señaló que el decreto ley en cuestión no podía siquiera ser refrendado por el Congreso, en razón de la no retroactividad de la ley penal, ya que si el procesado no fue defraudador cuando se pretendió instituir el delito, no podía serlo tampoco por ley posterior.

Pero a esta altura del proceso —año 1947— la Corte ha cambiado de criterio y revoca la sentencia, sosteniendo que si «el gobierno defacto pudo establecer el impuesto de que trata el juicio, con arreglo a la reiterada jurisprudencia de la Corte y siendo el gravamen así inobjetable y prevista la sanción también aplicada por ley anterior al hecho de la causa», concluye que «la multa impuesta no vulnera la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional».

Pero en el derivar de esta jurisprudencia encontramos nuevos cambios, que no he de detallar, pero que resultan interesantes porque implican el retorno a la jurisprudencia tradicional y originaria de la Corte, y que, además, tienen particular importancia porque, a su vez, significan el desconocimiento de decretos leyes penales dictados por un gobierno defacto estando aún en el poder ese mismo gobierno defacto.

Así, puedo citar un fallo de la Cámara Federal de Córdoba, del 29 de agosto de 1963, que declara inconstitucional el decreto ley 4.214/63; otro de la Cámara 4ª en lo Criminal y Correccional de Córdoba, del 23 de septiembre de 1963, que declara inconstitucional el decreto ley 4.778/63; otro de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, del 15 de febrero de 1963, que declara inconstitucional el decreto ley 7.165/62; la sentencia de primera instancia del doctor Juan Carjuzáa, del 28 de septiembre de 1962, revocada después, y que declara inconstitucional el decreto ley número 7.165/62.

Vale decir que en el andar de la jurisprudencia en esta materia nos encontramos con que la Corte y los tribunales de justicia en un primer momento se pronunciaron en contra de la posibilidad de dictar decretos leyes en materia penal. Más tarde derivan hacia la aceptación de estos instrumentos; pero vuelven después a la sana doctrina, y hoy la jurisprudencia mayoritaria se afirma en la doctrina de los primeros momentos, desconociendo la posibilidad de dictar decretos leyes en materia penal, en razón de que en dicho ámbito se requiere la sanción de una ley, con todas las formalidades que

la Constitución prescribe para ese procedimiento legislativo.

Voy a hacer un breve comentario de nuestro despacho, por lo menos destacando algunas de las notas fundamentales que nos han llevado a producir un dictamen especial.

El primer problema que se nos planteó a los miembros de la comisión, acerca del destino final de estos decretos leyes, residió en que en su base estaba la inconstitucionalidad que hacía a esos instrumentos inválidos ab initio. Frente a eso, lógicamente, tuvimos la tentación, como lo han hecho otros miembros de la comisión, de declarar lisa y llanamente la invalidez de tales decretos leyes. Pero hay también razones de prudencia política, de política jurídica.

Sr. Presidente (Bogliano). — Si el señor diputado me permite...

La Presidencia considera de interés conocer si el señor diputado hace uso de la palabra como autor de una observación al despacho o como representante de bloque, ya que en virtud de lo establecido en los artículos 131 y 134 del reglamento, el término para la exposición es distinto en ambos supuestos. Si el señor diputado habla como representante de bloque, dispone de una hora; en el otro caso, sólo tiene media hora.

Sr. Reñé. — Hablo en nombre de mi bloque, aun cuando adelanto que no voy a utilizar totalmente el término de una hora.

Decía, señores diputados, que frente a ese problema de política jurídica se nos planteó de inmediato la cuestión de si este Poder Legislativo tiene facultades para una declaración de inconstitucionalidad o si, por el contrario, sólo pueden derogarse las distintas disposiciones que quieren dejarse sin efecto. Los criterios expuestos en la comisión fueron encontrados, y estimamos que también serán encontrados los criterios de los hombres del derecho y de la justicia. Por ello, por razones de seguridad y de estabilidad, porque no queremos que exista el más ligero riesgo de que los jueces puedan declarar que, al disponer nosotros la inconstitucionalidad de los decretos leyes en materia penal, nos hemos excedido y, en consecuencia, los consideren vigentes, hemos optado por la derogación, porque entendemos que es necesario dar certidumbre jurídica. Nadie puede discutir la facultad del Congreso de derogar cualquier disposición legislativa. De ahí que en nuestro despacho figure la palabra derogación. Todo esto lo hemos complementado, porque nos animaba la misma inquietud que a otros señores diputados que hablaron de declaración de inconstitucionalidad, porque nos animaba la inquietud de los hombres que han sido procesados y condenados en virtud de una legislación represiva ilegal, y porque teníamos que salvar esta situación; lo hemos complementado, decía, con una amnistía amplia y general. De modo, entonces, que a los efectos prácticos pro-

dujera la misma consecuencia que si hubiéramos declarado inconstitucionales los decretos leyes en materia penal.

Otro punto de disidencia con respecto al despacho de la mayoría reside en la inclusión de la ley 13.234, llamada de organización del Estado en tiempos de guerra. Hemos contemplado su inclusión, pese a ser una ley y a no tener vicios formales, porque conspira contra la estructura natural del Estado. No podemos pensar en una ley que organiza al Estado para tiempos de guerra y que se aplica en tiempos de paz, cuando aún la guerra no se ve ni se sueña ni se espera, y porque esta ley ha sido utilizada con sentido de represalia, porque ha servido para perseguir a los hombres que no pensaban como los gobiernos de turno, porque ha servido para movilizar gremios y, en definitiva, porque ha llevado intranquilidad y zozobra al ciudadano común que, sin delinquir, era tratado como un delincuente.

Así mismo, y como nota original, proponemos la modificación del decreto 4.865/63. No proponemos su derogación lisa y llana, como la bancada del socialismo argentino, aun cuando su criterio nos parece respetable, porque entendemos que el Estado y la comunidad argentinos tienen derecho a regular la entrada, permanencia y salida de los extranjeros del territorio de la Nación, tienen derecho a decir quiénes pueden formar parte de su comunidad, quiénes pueden ser los hombres que al amparo del llamado constitucional vengan a vivir a la Argentina. Esta discriminación es del resorte del Estado, pero no puede hacerla de una manera arbitraria. De ahí que, como reforma, incluyamos un recurso judicial, en virtud del cual se da al extranjero la posibilidad de ser juzgado —actualmente se sustancia un procedimiento por el Ministerio del Interior, sin más recursos—, para lo cual tendrá un recurso jurisdiccional breve, pero que le asegure la neutralidad de un poder no político para su permanencia en el país.

Tampoco aceptamos el artículo 213 bis, incluido en el despacho de la mayoría, porque entendemos que padece de ciertos defectos jurídicos y de técnica legislativa, ya que en materia penal, por cierto de interpretación restrictiva, las figuras que en ella se delinearán deben estar recortadas con nitidez, deben estar perfiladas con precisión, para que no pueda de ninguna manera quedar un delito más o menos en el aire, como amenaza para cualquier habitante del país, de una sanción punitiva más o menos antojadiza.

Entiendo que ese artículo que se propone padece de tales defectos y, en consecuencia, preferimos, en bien de la seguridad de los habitantes del país, no incluirlo en esta reforma, sin querer decir con esto que no tenemos inquietudes respecto de alguno de sus incisos, que pueda parecer justificado.

Señor presidente: termino con esto mi informe. Creo que es fundamental destacar que en esta emergencia todos los sectores políticos están de acuerdo en la derogación de la legislación represiva, por ser contraria a la esencia de la democracia, violatoria del derecho natural y conculcatoria de las instituciones del Estado. Podría terminar diciendo que así como la Asamblea del año XIII dispuso que se quemaran los instrumentos de tortura en la plaza pública, en el ágora que debe ser este Congreso queremos quemar los vestigios de cualquier totalitarismo al derogar la legislación represiva.

Pero hay algo más, señor presidente; este acuerdo de todos los sectores políticos representados en la Cámara, implica para nosotros un compromiso ante el pueblo y ante la historia; implica el compromiso de la defensa de la democracia por métodos afirmativos. Esta derogación de la legislación represiva significa que cada uno de nosotros asume ante el pueblo y ante la historia el compromiso de defender la democracia, el compromiso de ser eficaces, de ofrecer resultados, de despertar la fe en las instituciones y de demostrar que en la Argentina no habrá tiranías porque no son necesarias. Paralelamente, contraemos la obligación de practicar una auténtica demagogia, en el mejor sentido de la palabra, sentido que ha sido desnaturalizado por la carga peyorativa introducida a través del tiempo, pero que etimológicamente significa el arte de conducir al pueblo, que es nuestra función.

Conducir al pueblo, educar al pueblo; he ahí nuestro compromiso de hoy al derogar, en nombre de la democracia, la legislación represiva: ser eficaces ejecutores de las aspiraciones populares y maestros, maestros en ciencia y en virtud. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Bogliano). — Tiene la palabra el señor diputado Cheble.

Sr. Cheble. — Señor presidente: me corresponde la responsabilidad de fijar la posición de nuestro bloque en este candente tema de la derogación de lo que se ha dado en llamar la legislación represiva.

Es indiscutible —y en esto coincidimos todos los legisladores— que esta serie de decretos leyes y decretos que se han dictado en distintas épocas, son violatorios de disposiciones expresas de la Constitución Nacional. Violan los artículos 18, 67 inciso 11, y 104 y concordantes de la Constitución de la República.

Estos decretos y decretos leyes, que modifican el Código Penal argentino y que fijan sanciones o penas, no pueden seguir en vigencia un minuto más. Así, corresponde a la gran sensibilidad que ha demostrado esta Cámara todas las veces que ha tenido oportunidad de dar solución a los múltiples problemas que afligían al pueblo de la República, el establecerlo.

Esta Cámara ha dado prueba de sensibilidad cuando votó la ley de reforma a la carta orgá-

nica del Banco Central y prorrogó algunos impuestos a los efectos de que el Poder Ejecutivo pudiera poner en marcha la economía del país y la explotación de sus riquezas potenciales. También lo ha hecho al sancionar la ley de abastecimiento, que, aunque no sea perfecta, en la clasificación general es una ley que puede considerársela como muy buena y de cuya aplicación depende el 90 por ciento del éxito.

La Cámara ha dado también prueba de sensibilidad al considerar la ley de beneficios para jubilados y pensionados o cuando le tocó definir problemas de orden social. En consecuencia, no puede en este momento permanecer indiferente y debe proceder de inmediato a la derogación de toda la legislación represiva, que es vergonzosa para la vida republicana del país.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Guillermo A. Belgrano Rawson.

Sr. Cheble. — Pero así como confieso con orgullo de argentino la sensibilidad de esta Cámara, también me lleva a expresar mi hidalguía el reconocimiento del Poder Ejecutivo nacional, que en esta emergencia demostró su sensibilidad al enviarnos el proyecto de ley que está a consideración de la Honorable Cámara.

No voy a entrar en el análisis de cada uno de los artículos que contiene el proyecto. Lo han hecho en extenso y en profundidad muchos de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Pero sí quiero tomar este proyecto como punto de partida, ya que ha servido a las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, juntamente con otros proyectos presentados por otros señores diputados, para formular los dictámenes: uno en mayoría y seis en minoría.

El dictamen de la mayoría contempla en su artículo 1º la derogación de los decretos leyes 4.161/56, sobre prohibición de la propaganda peronista; 2.713/63, que restableció la vigencia del anterior, que había sido derogado en 1958; el decreto 4.214/63, sobre represión de la propaganda comunista, y el 5.540/63, reglamentario del anterior; el decreto ley 788/63, de seguridad del Estado, y el 4.778/63, que impone a los condenados la obligación de contribuir al mantenimiento de los institutos y servicios penales con el 10 por ciento de sus rentas, y agrava las penas para los delitos cometidos en banda o el homicidio cometido por causa de raza o religión, e introduce otras modificaciones similares en disposiciones del Código Penal relativas a la comisión de delitos comunes; el decreto 32.490/56, sobre supresión de expresiones del régimen peronista en testimonios o certificados de documentos; el decreto 7.165/62, sobre supresión de propaganda peronista; el decreto 8.161/62, sobre represión del comunismo; el decreto 1.296/63, sobre prohibición de propaganda peronista; el decreto 1.607/63 y el 3.134/63, sobre la seguridad de la Nación; el 4.200/63, sobre opción de salir del

país durante la vigencia del estado de sitio; el 4.215/63, sobre prohibición de propaganda peronista; el 5.175/63, sobre trámite del hábeas corpus durante el estado de sitio; el 5.541/63, sobre prohibición de propaganda comunista.

El mismo dictamen agrega en su artículo 1º que se derogan los decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales y los artículos 157 y 257 del Código Penal —ley 11.179—.

En el artículo 2º se establece que se declaran vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a, b y e, 15 y 17, segunda parte de la ley 13.985.

El dictamen de la mayoría de la comisión es seguido por casi todos los otros dictámenes en minoría, con algunas modificaciones. La Federación de Partidos de Centro y UDELPA establecen tan sólo una diferencia en cuanto a la técnica de ordenamiento legislativo de la ley, pues primero proponen las modificaciones al Código Penal y luego proponen la derogación de todos los decretos leyes y decretos, que se ha dado en llamar legislación represiva.

Pero hay dos dictámenes que no hacen al aspecto formal y a la técnica legislativa, que son los que firman los señores diputados Rouzaut y Muñiz. Los dos se refieren a un sentido conceptual y no hablan de derogación de decretos leyes y decretos. El señor diputado Rouzaut dice, en el artículo 1º de su dictamen: «decláranse sin validez los decretos leyes y decretos...», mientras que en su artículo 2º establece: «Declárase que han estado en vigencia las disposiciones jurídicas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63; y se derogan los artículos 157 y 259 del Código Penal y 8º, 9º, 11, 12 letras a, b y e, 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985.»

El señor diputado Muñiz, que en el sentido conceptual casi coincide con el señor diputado Rouzaut, habla de declarar nulos y, consecuentemente, inexistentes, afectados por vicio...

Sr. Muñiz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Cheble. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — En lo fundamental, señor diputado Cheble, coincide con el doctor Rouzaut. La diferencia está en la forma de expresión.

Sr. Cheble. — Justamente a ese punto me estaba por referir cuando el señor diputado me solicitó la interrupción.

Decía que el señor diputado propone en su proyecto que se declaren nulos y, consecuentemente, inexistentes, afectados por vicio de inconstitucionalidad, los decretos y decretos leyes represivos. Con todo el respeto que me merecen los colegas, me voy a permitir discrepar en cuanto al aspecto conceptual de estos vocablos,

y en especial con el artículo 29 propuesto por el señor diputado Rouzaut.

Es necesario distinguir expresamente qué se entiende por validez y qué se entiende por vigencia. Comparto el criterio de los señores diputados Rouzaut y Muñiz en cuanto a que los decretos leyes dictados en violación expresa de la Constitución Nacional no tienen validez desde el punto de vista legal, porque la validez guarda íntima relación con la ley, que está directamente vinculada con la Constitución Nacional. Muy distinto es el concepto de vigencia de esas disposiciones, aunque estén en contra de la Constitución.

Hago esta distinción porque considero que estos decretos leyes, esta legislación represiva dictada en abierta contradicción con la Constitución Nacional, han producido efectos jurídicos. No se puede negar que hubo ciudadanos que han estado detenidos y privados de su libertad por causa de estos decretos y decretos leyes represivos; y hasta me atrevo a afirmar que todavía siguen en las cárceles públicas ciudadanos argentinos detenidos como consecuencia de estas disposiciones arbitrarias e inconstitucionales.

Es decir que, si bien coincidimos en cuanto a la invalidez de los decretos leyes, no ocurre lo mismo con relación a su vigencia. Considero que los decretos leyes que hoy la Cámara se propone derogar han estado vigentes, porque han producido efectos jurídicos.

Este bloque se va a pronunciar afirmativamente por la derogación o abrogación total de la legislación represiva en el país, pero va a votar en contra de toda modificación del Código Penal argentino que sea fruto de un estudio ligero. Consideramos al Código Penal argentino como a uno de los más perfectos del mundo. Este código, que ha sido sancionado en 1921, puede necesitar una actualización, teniendo en cuenta los nuevos métodos que utiliza la delincuencia en el mundo; pero las figuras tipo, la tipificación de los distintos delitos, están contempladas casi en su totalidad. Falta adecuar esas nuevas formas a esas figuras tipo, estableciendo agravantes o atenuantes. Queremos dejar precisamente establecido que una reforma del Código Penal argentino requiere un estudio en profundidad.

Hay trabajos, que se han mencionado en esta Cámara; hay proyectos, como el del doctor Sebastián Soler, que ha sido citado y que fue debatido por una comisión bicameral en la que intervinieron, además, eminentes tratadistas del derecho penal argentino. Todo ese esfuerzo realizado por el Parlamento y por los técnicos del derecho penal no puede ser arrojado por la borda, para venir a introducir modificaciones en una improvisación ligera, aunque se quiera argumentar la necesidad de la defensa del Estado nacional.

No pretendemos con esta posición, tampoco, dar un aval a todos aquellos que atentan contra la democracia y que contribuyen con su proceder a que quienes desde afuera conspiran contra la soberanía argentina puedan encontrar los medios para hacerlo. Las reformas que introduce el dictamen de la mayoría en cuanto al Código Penal argentino creo que en su contenido fundamental deben ser compartidas por todos los señores legisladores. Se habla en ellas del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Aquí se ha dicho bien que debe condenarse a todos los delincuentes públicos, para devolver la fe y la moral al pueblo del país; pero así como se condena a los delincuentes públicos argentinos, nosotros, como hombres políticos, tenemos la obligación de proteger a todos aquellos que están entregando su esfuerzo al servicio de la democracia, que no pueden ser calificados con esa denominación. Para ello hemos presentado un proyecto que se refiere, justamente, a la declaración de bienes de los funcionarios y empleados públicos, en el cual establecemos la inversión de la prueba. Pero también hemos presentado en esta Cámara —y eso debe ser previo— una iniciativa estableciendo el derecho de réplica para cuidar el honor de todos los ciudadanos del país. No hay derecho a que personas irresponsables injurien y calumnien a hombres públicos y que éstos no tengan, al menos, la posibilidad de defender su honor y su dignidad.

Compartimos también la reforma al artículo 302 del Código Penal, porque el cheque, instrumento que juega en las relaciones comerciales del país y que funciona casi como moneda, debe tener seriedad, y ello habremos de lograrlo, lógicamente, mediante la reforma del artículo 302 del Código Penal.

Comparto también desde el punto de vista conceptual la reforma que se quiere introducir en cuanto a la discriminación o luchas raciales, ideológicas y religiosas. Pero este tipo de luchas no deben ser consideradas únicamente como fines. La sanción debe recaer también sobre todos aquellos que utilizan el planteo racial o religioso como medio para conseguir fines inconfesables, porque si los medios son indignos también tienen que serlo los fines.

Al respecto quiero hacer aquí una denuncia pública. Hay en este momento autoridades en provincias argentinas ocupando sillones de gobernadores que han establecido planteos de tipo racial, que han servido como medio para conseguir un fin inconfesable. Esto también debe ser sancionado por la legislación argentina.

Yo comparto todo esto que sostiene el dictamen de mayoría, pero discrepo en cuanto a la forma y oportunidad de hacerlo. Creo que la reforma sería del Código Penal de la República debe hacerse con estudios en profundidad, consultando a los técnicos del derecho penal argen-

tino, a las universidades, que son quienes, en última instancia, tienen que dar su opinión.

Por eso es que, concretamente, nuestro bloque va a votar por la derogación de todas las leyes represivas, porque consideramos que en dichas leyes está instaurado algo mucho más grave que lo que aquí se ha dicho. Acá se habló de dictadura de hecho y se recalcó a cada momento que es necesario terminar con las dictaduras para salvar a la democracia. Pero hay otra dictadura mucho más grave que la dictadura de hecho y es esta dictadura de la ley. Hay una serie de decretos leyes represivos, muchos de ellos desconocidos por los ciudadanos argentinos, que emergen en un momento determinado en la vida política del país. Eso que yo llamo la dictadura de la ley es mucho más grave que la dictadura de hecho, porque en ésta, al menos, conocemos los medios para luchar contra ella. Por ello nuestro bloque se va a oponer a todo cuanto implique una reforma del Código Penal por este procedimiento.

Nosotros, como todos los señores diputados, estamos al servicio de la defensa de la democracia; no creo que haya ninguno que en este momento, con sinceridad, en un análisis introvertido, pueda anhelar la dictadura para el país. Todos estamos al servicio de la democracia, pero ella debe ser protegida en la forma que establecen la Constitución y la ley.

Para terminar con mi exposición, diré que hay otro aspecto que me preocupa, y en ese sentido quiero dejar fijada nuestra opinión.

Hay siete dictámenes producidos por las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, uno de mayoría y seis de minoría.

Cuando esta Cámara consideró la ley sobre fijación de salario mínimo, vital y móvil, había pensamientos encontrados; llegó un momento en que la ley no pudo ser sancionada y, en última instancia, pasó al Poder Ejecutivo para que fijara el monto de ese salario.

Yo me pregunto y exteriorizo mi preocupación: si ninguno de estos siete dictámenes cuenta con número suficiente para lograr la sanción de la ley, no vaya a ocurrir que corramos el riesgo de que esta legislación represiva, que está en el ánimo de todos derogar, quede en vigencia porque no podemos conseguir la sanción de la ley.

Por eso, concretamente, haría una moción de orden en el sentido de que agotado el debate en general —después que hagan uso de la palabra todos los señores diputados que se encuentren anotados—, la Honorable Cámara pase a un pequeño cuarto intermedio para ver si unificamos los criterios y podemos sancionar la ley que derogue toda la legislación represiva del país.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — La Presidencia entiende que el señor diputado posterga

su moción de orden para cuando se agote la lista de oradores.

Sr. Cheble. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Tiene la palabra el señor diputado Achiary.

Sr. Achiary. — Señor presidente: el tema suscitado por los decretos leyes dictados por el gobierno defacto del doctor Guido plantea cuestiones jurídicas y políticas de distinta naturaleza, pero revestidas todas ellas de fundamental importancia.

La primera de estas cuestiones tiene directa relación con los múltiples dictámenes de diversos sectores de la Cámara y es la razón determinante del problema, que puede resumirse en este interrogante: ¿por qué han de ser derogados todos los decretos leyes o al menos la mayoría de ellos? Se trata, pues, de una cuestión básica, desde que hace al fundamento esencial del pronunciamiento legislativo que debe dar este cuerpo.

Basándose en las opiniones ya emitidas se demuestra que existen posiciones diversas respecto de esta cuestión esencial. Así el proyecto del Poder Ejecutivo y la mayoría de los despachos de los distintos sectores parecen aceptar lo que podríamos llamar la tesis de la invalidez por incompetencia. De acuerdo con esta tesis, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, las normas penales deben tener un origen legislativo *strictu sensu*, vale decir, deben emanar del Congreso. De modo entonces que los decretos leyes que contienen normas represivas, dictados por los gobiernos defacto, serían inconstitucionales y, por consecuencia, absolutamente nulos.

Esta tesis es aceptada por el señor diputado Rouzaut, que va todavía más allá, a juicio nuestro, al proponer que en lugar de derogarse los decretos leyes represivos se declare su invalidez. Nosotros entendemos que la declaración de invalidez de una norma legislativa es una función no legislativa precisamente sino jurisdiccional, porque surge del principio elemental de la división de los poderes, que recoge, por ejemplo, el artículo 14 de la ley 48.

Una segunda tesis es la que sostiene el distinguido tratadista y profesor de derecho penal doctor Ricardo Núñez, que no niega expresamente a los gobiernos defacto la facultad de dictar normas represivas, pero dice, sí, por ejemplo, que vuelto el país al régimen de jure la Constitución rige en plenitud y, por consiguiente, los habitantes del país tienen derecho a que se aplique el principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* y, además, que el Estado constitucional actual no tiene por qué hacer concesiones a la situación defacto.

La tercera tesis es la que parece aceptar el despacho de la mayoría o al menos el diputado Bravo, que firma el informe. No se dan mayormente fundamentos teóricos, pero la sola circunstancia de que se proponga la derogación de todos los decretos leyes con excepción de uno,

el 4.805, parece demostrar que no se acepta ninguna de las dos tesis anteriores.

En la parte final de su informe el señor diputado Bravo parece hacer una concesión a la tesis del Poder Ejecutivo al sostener que si bien el decreto 4.034/57 está en vigencia y continuará en vigencia, no obstante contener normas represivas, ello no representa inconveniente porque ha sido ratificado por la ley 14.467. Entendemos que esta afirmación es errónea, porque la ley 14.467 no ratificó este decreto ni ningún otro decreto ley dictado por los gobiernos de los generales Lonardi y Aramburu: se limitó a declarar que estaban en vigencia sin ratificación del Congreso, en virtud del principio de la continuidad jurídica.

Sr. Bravo (C. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Achiary. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — La tesis que se sostuvo en el informe de la mayoría es la que se ajusta al criterio sustentado por la Cámara en los pronunciamientos que declararon la vigencia de los decretos leyes. Si están vigentes tienen aplicabilidad en el campo jurídico; y nosotros nos concretamos simplemente a derogarlos, por cuanto reconocer la validez o invalidez de los mismos es facultad privativa del Poder Judicial. Lo mismo ocurrirá cuando se los declare inconstitucionales. Entonces, si tiene vigencia, si tiene aplicación en el campo de la realidad jurídica del país, para que no tengan aplicación se derogan por el Poder Legislativo.

Sr. Achiary. — Estamos de acuerdo.

Sr. Bravo (C. A.). — Entendí que el señor diputado estaba señalando que yo habría dado otra interpretación.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Achiary. — Nosotros entendemos que la posición más correcta es la siguiente. Aquí se trata de un problema de competencia legislativa: si el gobierno defacto — sea del doctor Guido, del general Aramburu o del general Lonardi — ha ejercido facultades legislativas, y ha podido hacerlo desde que asumió las potestades que corresponden al Congreso Nacional, creemos que no cabe hacer distinguos en cuanto a las materias. Pensamos que no se puede reconocer facultades en materia civil y comercial, y negarlas en materia penal: o se tiene competencia o no se la tiene.

Sostener, por ejemplo, que un gobierno defacto no puede dictar normas represivas porque el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso equivale a afirmar que un gobierno defacto no puede legislar sobre

minería ni sobre materia civil, comercial o del trabajo, porque también esto es facultad privativa del Congreso de la Nación de acuerdo con el artículo 67, inciso 11, de la Constitución.

Además, hay otra cuestión: si el principio *nullum crimen* vale para los delitos, vale también para las faltas y las contravenciones. En este aspecto la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país es uniforme. En el caso Raúl Oscar Mouviel se discutió la constitucionalidad de un decreto — que fue ratificado por ley — que autorizaba a la Policía Federal a crear penas por faltas. Llevado el asunto a la Corte, el entonces procurador general de la Nación, doctor Sebastián Soler, sostuvo que dentro de nuestro régimen constitucional, con arreglo al artículo 18 de la Carta Magna, corresponde privativamente al Congreso establecer las condiciones en que una falta se produce, así como la sanción pertinente; y la Corte Suprema, con el voto de los doctores Orgaz, Argañaraz, Galli, Herrera y Villegas Basavilbasso, declaró que la facultad para emitir penas o contravenciones no previstas por la ley viola el principio *nullum crimen* y, además, el artículo 67, inciso 11, de la Constitución.

La consecuencia de todo esto es obvia. Si se acepta el criterio del Poder Ejecutivo, todos los decretos leyes dictados por el gobierno defacto del doctor Guido — y de todos los demás gobiernos defacto — deben ser derogados si no son expresamente ratificados por el Congreso, en cuanto instituyen penas por delitos o por contravenciones. Yo puedo mencionar ahora una serie de decretos, como el 6.704, el 6.698, el 1.063, el 6.676, el 6.640, etcétera, dictados todos en el año 1963, que deberían derogarse, por lo menos en las partes en que crean penas para delitos o faltas. Ahora bien: el despacho de la mayoría, entonces, incurre en una contradicción al proponer la derogación de todos los demás decretos represivos y no la del decreto 4.805, puesto que si los demás son inconstitucionales, tan inconstitucional como ellos sería el 4.805/63.

Nosotros pensamos que el temperamento a adoptar debe ser otro. Creemos que en esta materia no hay violación del artículo 18 de la Constitución Nacional y que el gobierno defacto, al asumir las potestades del Congreso de la Nación, no ha tenido ninguna incompetencia legislativa y, en consecuencia, ha podido legislar sobre todas las materias, sin distinción alguna.

Yo considero absurdo, por ejemplo, reconocer facultades a un gobierno defacto para legislar sobre divorcio, materia en que está en juego la base de la organización social del país, como lo hizo el gobierno de la revolución de 1955, o legislar sobre partidos políticos, que hacen a la organización política del país, como lo han hecho los gobiernos de Aramburu y de Guido; y no reconocerle a un gobierno defacto la facultad de sancionar con una pena leve una infracción también leve.

Voy a terminar esta parte de mi exposición con un ejemplo que consideramos decisivo. Me refiero al caso Manuel Ortiz. Este ciudadano fue procesado en 1956 por violación al decreto ley 4.161, siendo condenado a un mes de prisión. La defensa se basó en la misma argumentación que hoy esgrimen el Poder Ejecutivo y varios de los despachos. En esa oportunidad el juez doctor Horacio Malbrán y los miembros de la Cámara de la Capital doctores Berutti, Munilla Lacasa y Oderigo rechazaron el argumento de que el gobierno defacto carecía de facultades para legislar en materia penal. El asunto fue a la Corte, y el doctor Sebastián Soler, entonces procurador general de la Nación, dictaminó así: «Reconocidas las atribuciones legislativas de este último (se refiere al gobierno defacto), no sería posible establecer una distinción que condujera a admitir la potestad legisferante en ciertas materias y negarla en otras.» Vale decir que no aceptaba distingos de ninguna naturaleza, y la Corte Suprema aceptó su dictamen.

En síntesis, nuestra posición es que si los decretos leyes represivos han de ser derogados, no deben serlo porque sean inconstitucionales, o porque tengan un vicio que los invalida, sino sencillamente porque son malos o dañosos. Ese es el fundamento, a nuestro juicio, que debe movernos para derogar los decretos leyes represivos.

Hay una segunda cuestión de carácter jurídico importante, y voy a llamar la atención de la Honorable Cámara sobre el problema. El artículo 1º del despacho de la mayoría, y también del despacho que hemos suscrito —lo digo con franqueza, porque luego de una nueva meditación hemos comprobado que existe allí una grave inadvertencia—, establece en su parte final que quedan derogados los «demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales». Esto está dicho así, sin ninguna limitación de tiempo. Por ello creo que resulta obvio señalar los problemas, principalmente de inseguridad jurídica, que traería apareada la aprobación de la norma tal como está redactada en el despacho. Creemos que en relación a esa cláusula ha estado lejos del espíritu de los legisladores darle el alcance que puede tener.

Al principio de mi exposición recordé una cantidad de decretos leyes que quedarían sin efecto en virtud de esta disposición. Voy a citar dos casos más para señalar a los señores diputados la importancia que tiene modificar la redacción del artículo 1º.

El régimen de los juegos de azar en la Capital Federal está contenido en el decreto ley 6.618/57, que dispone una serie de normas represivas y configura a ciertos hechos como ilícitos, llegando a establecer penas de hasta tres años de prisión. Si sancionamos esta norma sin limitación de tiempo, ese decreto quedaría derogado, y, automáticamente, esa actividad socialmente tan dañosa como es el juego de azar

sería considerada como actividad lícita. De este modo estaríamos creando en el Parlamento una especie de paraíso transitorio para los quinieros.

Demos otro ejemplo más referente nada menos que al régimen de los partidos políticos. El actual estatuto establecido por el decreto ley 12.530 determina una serie de hechos ilícitos y las penas correspondientes, que en algunos casos son graves y fijan hasta tres años de prisión. Si se sancionara la norma que estoy criticando, quienes hubiesen violado en oportunidad de los últimos comicios este estatuto quedarían libres de castigo. He dejado para la discusión en particular el proponer en forma concreta la redacción de esta norma.

Voy a entrar ahora a uno de los temas políticos fundamentales de este debate, que hasta ahora, no sé por qué, ha sido eludido: el peronismo.

Conforme a la posición teórica de nuestro bloque, que ya he señalado, consideramos que los decretos leyes represivos del peronismo deben ser derogados, no porque tengan vicios de inconstitucionalidad o de invalidez, sino porque son malos, porque son dañinos. Creemos que dentro del derecho penal democrático no es posible aceptar la represión de ideologías o doctrinas. En la organización política en que vivimos, las ideas solamente deben combatirse con las ideas. Esta es la gran doctrina que aceptó el doctor Núñez en su informe, que también fue aceptada por la Corte en el caso Rosenblat, en que sostuvo que las ideologías, en cuanto tales, no son punibles y que sólo cabe castigar como delitos en la hipótesis de que las ideas se traduzcan en hechos o en actividades. Esta es la teoría más clara y concisa. Cuando las ideas dejan de ser tales y se exteriorizan en hechos, recién entonces el Estado debe asumir las formas represivas.

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de derogar los decretos leyes represivos. El Poder Ejecutivo dice en su mensaje que los decretos leyes represivos deben derogarse porque violan el artículo 18 de la Constitución y, además, porque castigan la mera opinión, lo que importa una violación del sistema republicano de gobierno. Y no dice nada más. Vale decir que elude el gran problema creado por el propio Poder Ejecutivo en el proyecto sobre estatuto de los partidos políticos. El artículo 19 de dicho proyecto establece que no puede tener personería, vale decir, se niega actuación política a los partidos que llama totalitarios.

Aquí reside la gran cuestión. Yo pregunto si el peronismo es o no totalitario. Debemos hacernos ineludiblemente esta pregunta y contestarla con toda franqueza, porque si admitimos que el peronismo es totalitario, nuestra posición ante el decreto 4.161 y sus correlativos debería ser más cauta, desde el momento que esos decretos contienen disposiciones restrictivas de activida-

des de tipo totalitario, y, por tanto, esas restricciones no serían tan censurables si el peronismo respondiera a esta concepción.

El decreto 2.713/63, que vamos a derogar, dice en uno de sus considerandos que es preciso reprimir ciertas actividades peronistas, puesto que bajo forma y apariencias legales se pretende reimplantar formas totalitarias. Es evidente que se trata de una afirmación grave. ¿Podemos entonces guardar silencio ante esta afirmación? ¿Podemos derogar esta disposición calladamente, sin dar respuesta a la pregunta que antes he formulado?

Para nosotros, la cuestión no ofrece dudas. Los decretos leyes represivos deben derogarse, no sólo porque avanzan ilícitamente sobre la expresión de las ideas, sino porque el peronismo no es totalitario. Lo del totalitarismo es una maniobra, de la envejecida oligarquía, que pretende encasillar a los sectores mayoritarios del país y crear falsas polarizaciones entre totalitarios y democráticos. Los democráticos serían la minoría ilustrada que gobernó con el fraude durante más de diez años, que jugó sistemáticamente al golpe, y que finalmente inventó la teoría de la dictadura democrática, esto es, la dictadura de los menos para enseñar despóticamente a la mayoría cuál es la «verdadera» democracia. La verdadera polarización es, en cambio, la que enfrenta a la oligarquía con los sectores mayoritarios, que quieren de una vez por todas un país moderno y poderoso que salga de este estancamiento.

Sr. Sandler. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Achiary. — Sí, señor diputado.

Sr. Sandler. — A los efectos de poder completar mejor la información para la exposición que luego me corresponderá hacer, quisiera que el señor diputado explicara qué entiende por totalitario.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Achiary.

Sr. Achiary. — Entiendo por totalitario todo aquello que viola la forma democrática y republicana que sanciona el sistema constitucional de nuestro país.

Sr. Caro. — ¿La monarquía es, entonces, totalitaria?

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Hay monarquías constitucionales.

Sr. Achiary. — Por el motivo que dejo expuesto, es decir, porque no consideramos al peronismo totalitario, es que nosotros vamos a apoyar la derogación del decreto ley 4.161 y sus correlativos.

Entro ahora al segundo problema político de este debate, que es el del comunismo. Aquí también tenemos que hablar con franqueza, no sólo ante nuestra conciencia, sino también ante el país.

Ya he dicho que el Poder Ejecutivo es muy lacónico en su mensaje. Se limita a decir que deben derogarse los decretos leyes porque son atentatorios del artículo 18 de la Constitución Nacional y porque son un castigo a la mera opinión. Vale decir que el Poder Ejecutivo no hace distinción en su mensaje entre peronismo y comunismo.

Nosotros entendemos que existen diferencias, y muy grandes, entre el peronismo y el comunismo. Consideramos al peronismo como una fuerza nacional de sentido progresista. El comunismo, en cambio, es una especie de agencia local de una vasta organización internacional, de la que recibe directivas, generalmente extrañas al interés nacional. Además, doctrinariamente, el comunismo, cualesquiera sean los disfraces literarios que asume, sigue un camino zigzagueante sobre la base de su doctrina, pero que fatalmente conduce a la dictadura del proletariado, vale decir que en el comunismo hay una proclividad hacia el totalitarismo.

Sin embargo, señor presidente, nuestro sector apoyará la derogación de las normas represivas del comunismo, y en este sentido aceptamos la doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos, tribunal que en el caso Dennis, en 1951, aplicó la llamada regla del peligro claro y presente, por el voto de Vinson, presidente de la Corte, regla que anteriormente había sido elaborada y expuesta por los jueces Oliver, Wendell, Holmes y Brandeis.

Esa regla significa que la libertad de opinión y la libertad de actuar sobre la base de las propias opiniones debe restringirse cuando, analizadas con absoluta buena fe las circunstancias políticas y sociales de un país, surja evidentemente ese peligro claro y presente contra la estabilidad de las instituciones democráticas. Determinar si existe o no peligro claro y presente es función deferida al legislador y a los jueces que deben obrar, repito, con la mayor buena fe, para dictaminar si existe.

Vale la pena señalar una indicación complementaria del caso Dennis, hecha por el juez Learned Hand, quien sostuvo que los jueces deben preguntarse si la gravedad del peligro claro y presente es tal que justifique la invasión en el campo de la libertad de palabra.

En Estados Unidos, la Corte, presidida por el juez Vinson, fue muy severa en la represión del comunismo. Lo fue porque en ese entonces, entre los años 1947 y 1953, en que fue presidida por Vinson, comenzaba el agudizamiento de la guerra fría, se desarrollaba la guerra de Corea y estaban en pleno auge las escandalosas investigaciones del senador MacCarthy, es decir, que en ese momento había en Estados Unidos un peligro claro y presente. A partir de 1953, en que preside la Corte el juez Warren, se produce un aflojamiento en la represión del comunismo. Las causas las explica el profesor Tressolini en su obra *American Constitutional*

Law, página 439, cuando dice que las dramáticas causas referidas a los Alger Hiss y a los Rosenberg habían concluido; que no había ya guerra en Corea y que el pueblo norteamericano se sentía cansado de las continuas discusiones sobre la subversión, y que, sobre todo, el gradual fortalecimiento de las defensas del mundo occidental había permitido que el pueblo de los Estados Unidos y su legislación tuviesen una visión más razonable acerca del real peligro representado por los comunistas domésticos.

Vale decir que los jueces de los Estados Unidos se han movido con toda honradez frente a la presencia, cercana o lejana, del peligro claro y presente. Esa es la posición que nosotros adoptamos como correcta. Por no existir en la actualidad ese peligro claro y presente es que apoyamos la derogación, con la advertencia de que si reapareciera el peligro claro y presente justificaríamos y apoyaríamos el establecimiento de una norma represiva.

Estamos de acuerdo en que el Código Penal debe reformarse, pero consideramos que no es éste el momento oportuno para ello. La tarea de reforma exige un estudio sereno y detallado, por lo que estimamos que las reformas que ahora se proyectan se deben considerar con la reforma integral del Código Penal que será tratada, si no en sesiones extraordinarias, en el transcurso del próximo período parlamentario.

No puedo pasar por alto el artículo 39, inciso 3º del proyecto del Poder Ejecutivo incorporando como nuevo artículo del Código Penal al 213 bis, que introduce la represión del delito que podríamos llamar «delito del golpismo», pues paradójicamente el gobierno actual mantiene en importantes funciones públicas a reconocidos golpistas que hicieron una profesión de la actividad que ahora se quiere reprimir y que públicamente se reúnen para celebrar aniversarios de intentonas que, según dicen, triunfaron finalmente el 7 de julio de 1963.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Parecería una costumbre de rigor en esta Cámara que al iniciarse una exposición sobre temas de esta índole el orador comience su exposición con breves o extensas consideraciones de carácter político. Creo que a esta altura del debate, con los aportes que han hecho los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra y las convicciones políticas de cada uno de los legisladores, estaría eximido de ceñirme a lo que he señalado como práctica invariable en este recinto.

Pero no puedo sustraerme al tema, y, aunque sea en forma muy superficial, efectuaré algunas consideraciones de tipo político, sin el menor ánimo de encespar las mansas aguas de este lago en que estamos navegando. Y lo voy a hacer con ánimo eminentemente constructivo,

sin la menor intención personal que pudiera irritar a personas o a sectores de la Cámara.

Debo hacerlo necesariamente, porque el tema que consideramos es de vital importancia no sólo para el desenvolvimiento de un pujante movimiento político hasta el presente víctima de todas las injusticias y de todas las persecuciones, sino porque del tema y de su adecuada solución ha de surgir seguramente el camino de la paz y de la concordia que anhelamos sinceramente todos los argentinos.

El tema de este debate no es nuevo, y yo diría que toda la historia política argentina está signada por esta especie de fatalismo que hace que periódicamente los representantes del pueblo tengan que considerar un tema tan desagradable como el que hoy tratamos, porque la violencia parecería que fuera el signo fatal del accionar político argentino desde los albores mismos de la Independencia nacional.

Yo me referiré solamente al lapso de historia que he vivido. He visto violencia bajo todos los gobiernos y con todos los justificativos. Recuerdo que mi primera incursión por el campo de la política fue una manifestación de adhesión a la candidatura de Hipólito Yrigoyen, allá en mi Salta natal, disuelta violentamente, también en nombre de principios democráticos, por la policía conservadora de aquellos tiempos.

He vivido también los años azarosos que sucedieron a la revolución de 1930. He visto caer, casi a mis pies, al diputado Guevara, asesinado alevosamente en la docta Córdoba. Me he indignado, junto con la mayoría del país, cuando Enzo Bordabehere cayó asesinado en pleno recinto del Senado. Y sería injusto si no dijera que me he conturbado muchas veces cuando, durante la época del gobierno peronista, he visto también que se ejercitaban contra los conciudadanos algunas medidas injustas.

También hemos vivido —y ésta es historia reciente, conocida por todos— las amarguras que ha soportado nuestro movimiento a partir de 1955. La euforia revolucionaria, una falsa interpretación del fenómeno histórico del peronismo, hizo abrigar la esperanza de que la nueva mentalidad que había surgido en el pueblo argentino podía ser cambiada a placer de los que gobernaban mediante la aplicación de medidas de este tipo. Me atrevo a afirmar que en el país jamás ningún movimiento político ha sufrido tantas persecuciones, el odio y la saña inmisericorde de sus adversarios, ocasionales triunfadores en una contienda de hecho.

Yo no vengo, ni en nombre de mi sector ni en el mío personal, a cantar nuestras cuitas. Las heridas recibidas en el transcurso de estos diez años azarosos de lucha las he restañado completamente con la confianza que me ha dispensado reiteradamente el pueblo de mi provincia para que lo represente y para que venga a luchar al seno del Parlamento Argentino por la concordia y la unidad de nuestro pueblo.

Esta tarde venimos a abogar por la derogación definitiva de todo tipo de represión de las ideas. Queremos que se borre de la historia política y jurídica del país esto que se ha dado en llamar legislación represiva y que yo califico, simplemente, como el estatuto del miedo y del odio. A través de la que, indiscutiblemente, será una sabia sanción de la Honorable Cámara, los argentinos esperamos reencontrarnos definitivamente para laborar todos en conjunto, por encima de diferencias ocasionales, por la grandeza del país y la felicidad de su pueblo, que lo espera todo de nosotros con paciencia, con prudencia y con una fe inquebrantable en el porvenir de la República.

Por eso no he de hacerme eco de algunas alusiones un tanto mortificantes de algún colega que me ha precedido en el uso de la palabra. Aludo concretamente a mi distinguido amigo y ex condiscípulo, el señor diputado Schaposnik, con quien en alguna oportunidad remamos en las mismas aguas, luchando por los mismos ideales en los ya lejanos años de nuestra juventud universitaria. Yo lamento profundamente que mi distinguido amigo y colega haya padecido por defender sus ideas, pero a sus padecimientos le opongo los míos, y creo que ha faltado entendimiento para la comprensión de la terrible injusticia que ha significado en todas las épocas, en todos los tiempos y bajo cualquier justificativo este tipo de acción de gobierno, de sectores políticos, para la reconciliación futura de todos los argentinos.

Haría más las palabras del señor diputado Ghioldi expresando que no hablo por mí, porque no cuento en esta contienda. Hablo por las generaciones del futuro que avizoran una Argentina nueva en paz y en concordia, que sea capaz de asegurar las ideas de los nuevos tiempos, para lograr para el hombre argentino la justicia, la felicidad y la libertad, que seguramente no lograremos si nos perdemos en los devaneos de rencillas minúsculas sin tomar como patrón de nuestras acciones el porvenir del país y la felicidad del pueblo.

Hago una profunda profesión de fe democrática, de la democracia auténtica, de la única que debe preocuparnos, la que se agita en el seno de las mayorías populares. No de la democracia de las teorías o de las doctrinas más o menos seductoras. Me refiero a la democracia que posibilita al hombre vivir en libertad, al mismo tiempo que la seguridad de un destino promisor.

Así entendemos los peronistas la democracia, y eso nos ha costado muchos sinsabores, no solamente cuando nos correspondió la responsabilidad de gobernar, sino también cuando ahora nos toca la responsabilidad aún mayor de ser opositores. Queremos confrontar nuestros principios y nuestros postulados con las otras fuerzas políticas, en igualdad de oportunidad y en igualdad de situaciones. No queremos avasallar a las instituciones, como se dice frecuentemente.

Queremos que las instituciones estén al servicio del país y no el país al servicio de teorías. Queremos que las instituciones sean capaces de laborar por la felicidad integral del hombre argentino, y en cuanto ellas no sean capaces de cumplir este objetivo, propugnar su modificación o su suplantación por otras mejores.

Sr. Di Leo. — Es lo que deberían haber hecho antes.

Sr. Caro. — Lo vamos a hacer siempre, señor diputado, y si desea hacer uso de la palabra le concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Caro. — Me extrañaba que no interrumpiera, justamente, el señor diputado.

Concretándome al tema de la reforma de la legislación represiva, estimo de rigor puntualizar que todos los sectores de la opinión pública, salvo los minúsculos grupos en donde pareciera que han encontrado su último reducto el odio y la intolerancia, han propugnado la derogación de este tipo de legislación. Y le cabe esa responsabilidad al partido gobernante, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que como punto primero de su plataforma prometió al pueblo esta sanción juntamente con la de un estatuto de los partidos políticos que posibilite la acción de todos los sectores de la opinión pública argentina en la vida política.

De manera que desde el punto de vista político creo que el problema de la derogación o no derogación ha sido ampliamente superado por la sensibilidad de todas las fuerzas políticas actuantes en el país, y no es del caso plantear el problema desde el punto de vista de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta legislación.

Es evidente que no hay para qué abundar en citas doctrinarias ni acudir a la opinión de tratadistas para que surja con toda evidencia que este tipo de legislación es inconstitucional por dos clases de motivos. En primer término, por la fuente de que emana, un Poder Ejecutivo defacto que asume defacto y por la fuerza las facultades legislativas, reservadas por la Constitución Nacional solamente al Congreso. En segundo, desde el punto de vista sustancial, por ser violatoria del sistema de garantías individuales consagrado en el artículo 18 y concordantes de la Constitución Nacional. Pero me inclino por el criterio pragmático del señor diputado Achiary, al decir que aun cuando todo estuviera conforme a la Constitución Nacional, tendría que ser derogado por ser contrario a la salud moral de la República y a la tranquilidad del pueblo del país.

Sentada, entonces, la necesidad y la oportunidad de la derogación de esta legislación represiva, se plantea el problema jurídico de cuál debe ser el alcance de la sanción de la Honorable Cámara. Sobre el primer tema, es decir, sobre

la necesidad de la derogación, la unanimidad de las comisiones a ese respecto está reflejada en los distintos dictámenes de mayoría y de minoría que se han elaborado; vale decir que en el seno de las comisiones —y creo que en el seno de la Honorable Cámara— no hay, salvo alguna expresión aislada, opinión en contra de la derogación de los decretos llamados represivos.

La discrepancia se estableció, en primer término, dentro de las comisiones, cuando al estudiar el proyecto de ley y el mensaje del Poder Ejecutivo, junto con la norma simplemente derogatoria se introducen modificaciones al Código Penal vigente. Sostuve en el seno de la comisión —y lo sotingo ahora aquí— que éstas son dos situaciones jurídica y técnicamente distintas y que merecen un tratamiento también distinto, porque es evidente que es de buena técnica legislativa que el aspecto derogatorio sea totalmente desvinculado de cualquier otro que pudiera confundir las situaciones.

Es decir, que el dictamen de minoría que he suscrito se aviene solamente a la derogación de todos los decretos represivos. Y aquí debo formular una aclaración. No hemos incluido en la derogación la ley 13.234 por una simple razón de procedimiento y para ser consecuentes con una posición personal planteada oportunamente ante la Honorable Cámara.

Existe a estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales un proyecto del señor diputado Palacios por el cual se propugna la derogación de esa ley. Para ser consecuentes, como decía, con la postura fijada por mí ante la Honorable Cámara, he de esperar, para dar mi voto favorable a la derogación de esa ley, el despacho respectivo de la comisión, porque es nuestro propósito terminar con este tipo de legislación, haya sido dictada por quien quiera y cualesquiera sean los intereses políticos que la inspiraron.

En consecuencia, vamos a votar por la negativa las modificaciones propuestas al Código Penal en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que ha acogido, aunque con modificaciones, el despacho de la mayoría. Y lo vamos a hacer por dos razones: en primer lugar, por una razón, diríamos, de tipo técnico-formal, es decir de separar en dos instancias legislativas el tratamiento de dos cuestiones que evidentemente son distintas; en segundo lugar, por una razón de fondo, pues entendemos que toda reforma al Código Penal debe ser el producto de un estudio específico, sin vinculación con ningún otro problema que tangencialmente pudiera afectarla.

Se me ocurre —y tengo motivos para ello, pues a mi alcance dispongo de los respectivos textos legales— que si aprobamos el despacho propugnado por la mayoría, no se habrá logrado en plenitud el propósito de la Honorable Cámara, ni habremos satisfecho el anhelo popular de una derogación total, lisa y llana, de to-

do tipo de legislación represiva, porque la inclusión en el proyecto del Poder Ejecutivo del llamado artículo 213 bis, a mi modo de ver, hace revivir algunas de las disposiciones que queremos derogar. Pruebas al canto, señor presidente.

Por ejemplo, el inciso 3º del artículo 18 del decreto ley 788/63, que derogamos, incrimina al que organizare, constituyere o dirigiere una asociación, grupo o entidad que tuviera como objeto visible u oculto alcanzar algunas de las finalidades mencionadas en el inciso 1º y al que formare parte de la misma conociendo sus propósitos.

Además, el inciso 1º del artículo 20 dice: «Al que promoviere discordias o antagonismos entre los distintos grupos, institutos, organismos públicos, civiles o militares, poniendo en peligro la paz interior»; y el inciso 2º del mismo artículo: «Al que indujere a algún miembro de las fuerzas armadas o de seguridad a cometer actos de indisciplina o desobediencia a sus superiores jerárquicos, a los poderes públicos nacionales o provinciales.»

La redacción del artículo 213 bis, según el proyecto del Poder Ejecutivo, guarda estrecho parentesco ideológico con las cláusulas que acabo de leer. Por ejemplo, el inciso 1º dice: «Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieran por finalidad el ejercicio de violencias», etcétera. Es muy parecido y sería muy fácil asimilarlo, con una interpretación un tanto liberal del texto legal, a la disposición del decreto ley 788, que acabo de leer.

Además, el inciso 2º del artículo 213 bis del despacho, dice: «El que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales.» Y el inciso 3º dice: «Los que pública o privadamente instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar.»

Sin entrar en la valoración jurídica de estas disposiciones, entiendo que de sancionarse el artículo 213 bis del despacho que estamos discutiendo, no se habría operado en plenitud la derogación lisa y llana de la legislación represiva.

Existen, además, otras razones que motivan nuestra oposición a la inclusión del peligroso artículo 213 bis. El moderno derecho penal está basado en dos principios fundamentales. No se pena por lo que es un sujeto sino por lo que hace; y no hay pena sin culpabilidad. Esos dos principios están afirmados en la Constitución Nacional e informan, desde luego, toda la teoría del derecho penal democrático: son el principio de la tipicidad y el principio de las responsabilidades por las acciones.

Como consecuencia de ello sólo son punibles las acciones que realizan las conductas descri-

tas en el tipo legal correspondiente. Es decir, que no es posible castigar a un sujeto por una acción que se asemeje a otra descrita en el Código Penal. Este régimen está además garantizado por la prohibición de la interpretación analógica en el ámbito penal. De ello se deduce que las acciones prohibitorias —y éste ha sido el modelo que han seguido los códigos democráticos— no son punibles salvo casos especiales, como el del artículo 210 del Código Penal.

Por otra parte, el legislador ha creado la figura de la tentativa, que permite castigar a los sujetos que comienzan a ejecutar un delito pero no lo consuman. La figura que se crea por el proyecto mencionado plantea la existencia de una serie de problemas y, en especial, el del conflicto de dos normas para delitos similares.

Esto es muy importante para preservar la seguridad jurídica. Advierta la Honorable Cámara que la redacción del inciso 1º del artículo 213 bis del despacho mayoritario de la comisión implica la incriminación de los mismos hechos —afirmo que son los mismos— contenidos en el artículo 210 del Código Penal, que se refiere a la asociación ilícita. En efecto, el despacho mayoritario sanciona a: «Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.» Y el artículo 210 del código establece: «Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.»

La circunstancia que señalo nos fue explicada por el doctor Núñez en la comisión, al propugnar una sanción de este tipo. Con el permiso de la Presidencia y de la Honorable Cámara me voy a permitir leer la parte pertinente de la exposición del doctor Núñez, quien emitió su opinión en esta materia ante una pregunta que le formulara el diputado que habla. En efecto, luego de leerle el texto del artículo 213 bis —que acabo de citar hace un momento en su totalidad—, le pregunté si ese texto no era el mismo que el del artículo 210 del Código Penal, y entonces el doctor Núñez me contestó: «¿Usted ha visto cómo actúan Tacuara y las patotas? Lesionan a empellones. ¿Ha visto cuando se acerca un grupo sin armas y ataca a empellones, con insultos, etcétera? Esto no es agresión.»

Creo que estamos, entonces, ante una disposición sumamente peligrosa. De acuerdo con la opinión emitida por el doctor Núñez pareciera que lo que se quiere reprimir con una disposición de esta naturaleza no es ya al grupo de personas que se asocia específicamente para cometer delitos previstos en el Código Penal. Este artículo va mucho más allá: llega, incluso, a incriminar la guaranguería y la mala educación. Yo me pregunto si la Cámara está dispuesta a que el empujón o la falta de cortesía en la vía

pública sean erigidos en delitos, y a que una asociación —un club de fútbol, por ejemplo— donde se practica la guaranguería pueda estar incurso dentro de las disposiciones del artículo 213 bis.

Yo no entiendo —y la cuestión no fue muy bien aclarada por el doctor Núñez— en qué se diferencia el proyecto del artículo 210 vigente del Código Penal.

El inciso 1º del artículo 213 bis del despacho establece: «Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210 (esto es lo que está mal, porque todas estas asociaciones para cometer delitos están comprendidas en ese artículo del Código Penal), tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.» Me pregunto cuáles son los tipos de acciones que aquí se quiere incriminar y que no están comprendidos en el artículo 210 del Código Penal.

¿Cuáles son esas «violencias» de que habla el artículo? Podríamos decir que todo el Código Penal es represivo de violencias, puesto que se ejerce violencia cuando se comete un homicidio, cuando se infieren lesiones, cuando se viola, cuando se roba, cuando se comete el delito de usurpación o cuando se delinque por medio de explosiones u otros estragos, como indica el Código Penal. Una asociación para estos fines específicos estaría evidentemente comprendida en las disposiciones del artículo 210.

Por estos motivos estimo que atenta contra la seguridad jurídica la coexistencia de dos normas penales que regulan la misma situación jurídica. La colisión se plantearía inmediatamente, y no sé cómo resolverían los jueces estos casos.

Podría presumirse la existencia de un criterio diferencial, y eso es lo que me inquieta. Podría ser que el artículo 210 rigiese para la delincuencia común, en tanto que a través de la sanción del artículo 213 bis se quisiera crear una delincuencia específicamente política. De ser así habríamos caído nuevamente en el mantenimiento de la legislación represiva que estamos dispuestos a derogar.

Estos son los motivos por los cuales nos oponemos, por razones de oportunidad, a meter la mano en el Código Penal, para expresarme con las palabras del profesor Soler, quien hizo en la comisión un cálido elogio del código que nos rige. Yo también, como él, estimo que la reforma del Código Penal debe abordarse con seriedad y en la oportunidad política debida. A este último respecto quiero formular en el seno de la Honorable Cámara una consideración que ya formulé en la comisión.

La reforma del Código Penal es una necesidad sentida. Se la ha estudiado en profundidad y se ha recabado la opinión de las más altas autoridades jurídicas del país y de instituciones

vinculadas a los problemas anejos a la legislación penal. Pero considero que esa reforma no puede abordarse ahora en virtud de razones de oportunidad política. La reforma integral del Código Penal no debe abordarse hasta tanto este Parlamento no sea la representación auténtica de la voluntad del pueblo de la Nación.

No estoy haciendo ningún argumento que tenga una intención política. No puede escapar a los señores diputados, ni a la opinión pública, ni a los profesores de derecho, que este Parlamento, por motivos que no quiero o no debo analizar en este momento, no es la auténtica expresión de la voluntad popular, y que todo lo que haga a la reforma de fondo en el campo político, económico y social debe ser el producto de la voluntad del pueblo como única manera de afianzar en sus raíces mismas las instituciones democráticas que lo rigen. Yo creo que ha de llegar, si el Poder Ejecutivo, el partido gobernante y el Parlamento cumplen con las promesas solemnes que han formulado al país de normalizar definitivamente la vida política, permitiendo a todos los sectores de la opinión pública manifestar su voluntad en comicios libres y sin proscripciones.

Por eso y no por un prurito de oposición sistemática —¡Dios me libre y libre a nuestro sector de las oposiciones sistemáticas!—, que hemos padecido, que hemos tenido que afrontar y que no queremos caer en el triste papel de ejercitarla, hemos venido desde un primer momento a colaborar con lealtad en la obra de reconstrucción que necesita el país.

Sr. Bravo (C. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Caro. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Deseo formular al señor diputado una pregunta, claro está sin el ánimo de querer provocar un debate polémico, que, con toda serenidad, ha procurado eludir.

Mi pregunta no se refiere al proceso electoral, sino al pueblo. ¿Cree el señor diputado que la voluntad manifestada por el pueblo argentino en los comicios del 7 de julio no fue auténtica?

Sr. Caro. — Fue auténtica dentro de toda la relatividad que tienen estas cosas.

Sr. Bravo (C. A.). — Me refiero al pronunciamiento del pueblo.

Sr. Caro. — Yo creo que los peronistas, con excepción de pequeños núcleos entre los cuales me honro en contarme, no han tenido acceso libre a las urnas en el sentido realmente político de la palabra, es decir, con facultad para decidir por sus propios candidatos. ¿No es así, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Con la venia de la Presidencia, voy a contestar al señor diputado.

Sr. Presidente (Morg Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Creo que el señor diputado Caro no me ha interpretado. No me he referido al aspecto formal del proceso electoral, sino al pronunciamiento y al sentimiento del pueblo argentino. Yo creo que ese pronunciamiento fue auténtico porque fue voluntad del pueblo orientarse en la forma en que lo hizo, y si fue auténtico, la Cámara tiene la representatividad suficiente para poder considerar las modificaciones del Código Penal en cualquier momento.

Sr. Caro. — El pronunciamiento fue auténtico en cuanto no fue el producto de coacciones ejercitadas en el comicio, como en épocas anteriores, es decir, no se cambiaron las urnas, ni se hizo, evidentemente, el voto en cadena.

No fue auténtico en cuanto un gran sector no pudo oficializar sus listas de candidatos.

Sr. Bravo (C. A.). — Esos son los aspectos formales del pronunciamiento.

Sr. Caro. — No fue auténtico en cuanto se obligó a que en la última elección hubiese alrededor de 2 millones de votos en blanco. De manera que todo esto le resta, no digo legitimidad —no hago problema de legitimidad—, sino una representatividad plena a este Parlamento. Y quisiera que esos dos millones de votos que no pudieron manifestarse estuvieran representados en la próxima renovación parlamentaria. Entonces se habrá logrado una verdadera autenticidad en la representación del pueblo en el Parlamento Argentino.

Desde luego que esto no es imputable al partido gobernante, ni a nosotros, sino a las desdichadas circunstancias de un proceso que viene desde 1955, e injusto sería cargar al doctor Guido y al doctor Frondizi con esa culpa, pues es un secreto a voces que estos dos gobernantes tuvieron que sufrir presiones de todo tipo.

Esa imputación deberían merecerla, con más justicia, quienes inspiraron este tipo de política y quienes se apoyaron en la fuerza para mantenerla. No hago con esto la defensa de Guido, ni de Frondizi.

Creo que me he extendido de más en lo que yo pensaba que iba a ser una breve incursión por encima del proyecto, y me voy a reservar para la discusión en particular ahondar más en el análisis de algunas de estas disposiciones.

Llamo a la reflexión a la mayoría de la comisión para que agotemos una vez más las tentativas de llegar a una solución conciliatoria. La inclusión del artículo 213 bis desnaturaliza esencialmente los propósitos de la derogación de la legislación represiva, porque la sustituye por otra que es técnicamente más imperfecta y políticamente más inconveniente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ortiz Hernández.

Sr. Ortiz Hernández. — Señor presidente: el señor diputado Schaposnik dijo que el debate estaba prematuramente agotado. Yo no diría eso; diría, más bien, que languidece. Me parece

que es como una vela que se va apagando, como una luz que agoniza. Es evidente que un tema de tanta importancia como éste no tiene un marco que le haga honor.

Yo no me voy a referir a los aspectos penales de la legislación represiva, porque ya otros oradores, entre ellos el señor diputado por Buenos Aires doctor Bravo, se han expresado con amplitud, claridad y precisión. He de ceñir mi exposición, que quizá sea un tanto árida, exclusivamente a la cuestión constitucional.

Por ello digo que en cumplimiento del compromiso contraído con el pueblo antes de ser gobierno, el actual Poder Ejecutivo remitió en su oportunidad el mensaje y proyecto que llevaba insita la derogación de lo que se ha dado en llamar legislación represiva. Es que este Poder Ejecutivo, hijo de pueblo y sangre de pueblo, no podía sustraerse a los llamados de sus conciudadanos y de su partido, porque hay algo dentro de dicha legislación que repugna a los más caros y puros sentimientos democráticos y republicanos.

El gobierno, en cumplimiento de lo prometido, va paso a paso, con pausa pero sin descanso, con tranquilidad pero con seguridad, con parsimonia pero con responsabilidad, cumpliendo los compromisos a que se obligara con la República. Podrán los eternos descontentos criticar, porque ése es su oficio; podrán los eternos insatisfechos sentirse incomprendidos y pretender que se dé curso a su ideas y pensamientos, pero no lo conseguirán, porque atrás, respaldando a sus grandes gobernantes, está el pueblo, un pueblo vigilante y atento para aplaudir lo que deba aplaudir y retacear lo que deba retacearse.

Un mentís rotundo a los agoreros nos lo dio la magnífica exposición y luego la venta de los productos de la Rural de Palermo. Más de 600 millones de pesos hablan con elocuencia de la confianza del país en sus gobernantes y en su futuro. Por ello, podemos decir con toda tranquilidad que el mañana es nuestro.

Estoy casi seguro, señor presidente, que el Poder Ejecutivo debió inspirarse en las magistrales páginas de Joaquín V. González, que en su conocida obra *Manual de la Constitución Argentina* nos habla del tema al que más adelante me he de referir.

Quiero en este momento y en esta hora rendir mi cálido homenaje de admiración y respeto a ese magnífico riojano, de quien se ha dicho —y dicho bien— que fue paradigma de los argentinos, extraordinaria manifestación de cultura y ejemplo vibrante y sonoro de las voces ancestrales de la tierra y de la raza. La figura amplísima de Joaquín V. González tiene, empero, un perfil bien definido: el constitucional. Si, como se ha dicho, Alberdi, con su presencia de ausente, es el padre de la Constitución, Joaquín V. González es su comentador

más eminente, acaso el evangelista de su texto y de su doctrina. Fue, evidentemente, un filósofo de las instituciones republicanas y democráticas. De la Constitución dijo: «que fue uno de los instrumentos de gobierno más completos, más orgánicos, más jurídicos, sin ser, por eso, estrecho ni inmóvil, que hayan consumado los constituyentes de cualquier país y época». De la democracia, dijo que, «más que una forma de gobierno, es modo de ser de la comunidad, estilo de vida, modo esencial de la sociedad humana».

Jurisconsulto, educador, poeta, historiador, patriota, llegó a la jurisprudencia por los caminos esclarecidos de la poesía y vio en la justicia como ideal la suprema expresión de armonía que otorga la belleza.

Entrando en materia y siguiendo al autor citado, en la página 180 de su conocido tratado nos dice: «La Constitución ha reunido en su artículo 18 las materias que sirven de fundamento a la ley penal y a los procedimientos en caso de acusación contra cualquier persona. Tienden todas éstas a garantizar la vida, la libertad y la propiedad contra la arbitrariedad o crueldad de los jueces o de los legisladores, asegurando a toda persona el ser juzgado según leyes justas y jueces creados por ellas. Igualmente ha querido la Constitución poner en manos del hombre mismo los medios para su defensa contra los abusos de la autoridad, que puede degenerar en despótica, ya sea por parte del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. La historia ha hecho ver que todas las precauciones en defensa de la libertad son convenientes, porque lo que sólo puede ocurrir bajo la exclusiva voluntad del rey en una monarquía, también puede suceder, bajo la presión excitante y apasionada en algunas épocas de la historia, en una república. Y cuando recorremos la de la nuestra, recordando los períodos tristísimos de la desorganización nacional, en que legislaturas y jueces hubo que perdieron toda idea de la ley y de la justicia para obedecer o complacer a un tirano o a un jefe militar, debemos bendecir la obra de los constituyentes que pusieron límites precisos a los poderes del gobierno.»

Debemos decir también, después de las magníficas páginas de González, que el poder del Estado debe siempre justificar su legitimidad. El proceso con que se impone la legitimidad del poder crea también el sistema jurídico, que se insufla a través de la ideología de la clase social triunfante y que se autotitula gobernante. El Estado de derecho y democrático debe también justificar la legitimidad de su poder. Con todas las burlas recibidas por brillantes doctrinarios de sistemas totalitarios, el Estado de derecho y democrático sigue aún representando la más bella aventura de los pueblos. Este Estado es el que legitima su poder autoritario por la voluntad representativa de todos aquellos que a su vez, serán destinatarios de las normas que limiten sus voluntades y restringen sus dere-

chos. Todas las normas, para este sistema, son válidas porque las han establecido órganos y procedimientos creados por la representación directa o indirecta de los mismos destinatarios, que en su faz activa se llama ciudadanía. Cuando en este sistema se produce la norma, sea pequeña o grande, buena o mala, su válida existencia está toda sumergida en ese fondo de orden jurídico que legitima el poder que la ha creado y convive como una parte no como una unidad.

Una norma, cualquiera que ella sea, si no tiene la justificación vocativa de legitimidad del poder que la lanza al mundo de la existencia jurídica no puede invocar su validez. Será un hecho, un objeto, pero no una norma válida.

En nuestro país la Ley Fundamental es la que justifica la legitimidad del poder estatal, que como consecuencia ejecutoria de ella se establece. El poder para producir normas debe tener esta justificación primaria de su legitimidad, es decir, la razón suficiente de su existencia en el sistema normativo que dispone la Ley Fundamental.

«Kelsen ha denominado a esta clase de normas "la Constitución". En nuestro país, la ley de las leyes, porque ordena cuál es el poder que debe establecer las normas, como también cómo deben producirse. Aunque la figura no es muy elegante, puede decirse que establece cuál es la fábrica que debe producir la norma, pero también las máquinas y el procedimiento para producirlas. Las normas son válidas porque es legítimo todo el sistema productor.» (Friedrich, *Teoría y realidad de la organización constitucional democrática*, página 145, México, 1946.)

Nuestra Constitución desconoce la legitimidad del poder creador impuesto siglos atrás por Dios, por la Iglesia, por una familia dinástica, por un déspota, etcétera, para fundamentarla en la voluntad de la representación a través de la Constituyente y de la legislación en ejecución de la norma constitucional legitimada por la voluntad de aquella —artículos 21, 28 y 31 de la Constitución Nacional—.

Toda norma es válida porque su existencia nace de la Constitución. Toda norma válida es constitucional, no hay ninguna norma válida que no sea constitucional, que no sea hija fiel del sistema que legitima su nacimiento, porque en el Estado de derecho no existe la bastardía jurídica.

Sin embargo, factores extraños, que viven una vida distinta al mundo del derecho, concurren para crear acontecimientos que quieren vulnerar el sistema unitario. Esos hechos cuando se introducen en el orden que crea la legitimidad del poder que valida las normas, crean entonces instituciones y elementos espurios, que como tales son repulsados por todo el sistema. El gobierno defacto destácase como uno de esos procesos que se introducen destruyendo la unidad del sistema de la legitimidad.

Las generaciones argentinas que pertenecer a las décadas del presente siglo, a los últimos treinta y cuatro años, hemos tenido la dolorosa oportunidad de haber desarrollado nuestra existencia bajo cuatro gobiernos defacto. Las razones justificantes de este fenómeno de bastardía repugnante para el sistema democrático han sido distintas, pero el fenómeno ha sido idéntico. No está en nuestra intención justificar o no los movimientos que los produjeron; además, es historia del pasado que debemos tratar de olvidar, mientras que los problemas que han dejado como saldo son del presente.

Surge de todo lo expuesto que el Poder Ejecutivo, en el sistema de gobierno adoptado por la Constitución, no puede ejercer funciones judiciales ni legislativas, pues eso es de la esencia de nuestras instituciones republicanas. Sus facultades están fijadas en el artículo 86 de la Constitución. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia inmediata posterior a los movimientos militares de 1930 y 1943, al determinar las facultades de los gobiernos defacto y establecer que «el gobierno de hecho tiene todas las facultades que al Poder Ejecutivo constitucional le otorga la Constitución Nacional (Corte Suprema, «Fallos», tomo 201, página 266) perfiló con nitidez en virtud de esta asimilación el carácter y el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo de jure, en ausencia del Congreso, pues no otras debían ser las que correspondían al ejercicio del poder surgido de los pronunciamientos militares mencionados.

No obstante tratarse de acortar la actuación de un ejecutivo defacto, realmente se elaboró en dicha jurisprudencia el repertorio de las facultades excepcionales del Poder Ejecutivo constitucional, lo que torna pertinente hacer referencia a esas decisiones sistematizadas por Segundo V. Linares Quintana, en su obra *Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado*, tomo IV, página 457: «Resulta que el Poder Ejecutivo de hecho puede excepcionalmente ejercer limitadas atribuciones legislativas por medio de la promulgación de decretos leyes, siempre que concurren las circunstancias siguientes: a) necesidad del orden vital para el funcionamiento del Estado; b) urgencia, o sea apremio que no admite dilación, so pena de llevar al caos y a la anarquía el funcionamiento del Estado; c) respeto de los derechos y garantías que la Constitución consagra en amparo de la libertad individual.»

Se agregó, por imperativo de las circunstancias, dada la naturaleza del gobierno que se instalaba y su origen, «las medidas encaminadas al cumplimiento de los fines de la revolución», ostensiblemente extraños y contrapuestos al caso de un Ejecutivo resultante de la aplicación de la ley de acefalía, expresión cabal de la continuación jurídica del gobierno de la Nación. Un gobierno de este último tenor no puede tener

otro fin específico en la emergencia, además de los otros fines anteriormente enumerados, que el de los aprestos electorales para el restablecimiento pleno de los poderes del Estado (artículo 39 de la ley 252).

Es dentro de este concepto que la Corte Suprema de la Nación, al fallar en la causa Carlos Anders y otros el 22 de marzo de 1946 (tomo 204, página 345) expresó, entre sus argumentos: «Una de las garantías más preciosas de la libertad, consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, es la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. No se necesita mayor esfuerzo para ver que esa garantía resultaría anulada si un gobierno defacto, sin representación popular, tuviera la facultad de establecer delitos y penas por decretos o agravar las penas establecidas derogando, ampliando o modificando el Código Penal vigente, dictado por el Congreso Nacional en uso de atribuciones expresas dadas por la Constitución (artículo 67, inciso 11). Reconocer esta facultad al Poder Ejecutivo defacto importaría también desconocer la más trascendental conquista política de la civilización occidental, obtenida por los pueblos tras larga y penosa lucha contra el despotismo: el sistema representativo de gobierno, basado en la soberanía popular y en la separación, correlación y armonía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y retrogradar nuestras sabias instituciones a la época nefasta en que imperaba como norma legal o válida la voluntad del príncipe.»

La Corte Suprema declaró entonces que el decreto 536, del 15 de enero de 1945, sobre represión de delitos contra la seguridad del Estado, era contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional; decreto que luego derogó el gobierno de la revolución de 1955 por decreto ley 4.551, del 5 de diciembre de 1955. Al sentenciar en los autos Alfredo R. Castro el 22 de marzo de 1946 (Corte Suprema, «Fallos», tomo 204, página 359) y admitir que el gobierno defacto podía dictar en parte el decreto 1.580, de junio de 1943, por considerarlo de urgencia y necesidad imprescindible, agregaba: «... el caso de las penas es distinto. La garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, conserva todo su vigor. Ella requiere la existencia de una ley sancionada por el poder constitucional que tiene la facultad de dictarla, ley que defina la infracción y establezca la pena.»

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Ortiz Hernández.—El gobierno surgido de los acontecimientos revolucionarios del mes de septiembre de 1955, en cambio, se atribuyó desde el primer instante las facultades legisla-

tivas que la Constitución Nacional acuerda al Congreso de la Nación (artículo 1º, decreto ley 42/55) y las ejerció reiteradamente. ¿No es correcto, en consecuencia, envolver dentro de los conceptos enunciados por la Corte Suprema en «Fallos» (tomo 238, página 123) a todo gobierno como facultado para establecer la legislación que considere conveniente, tanto en las situaciones ordinarias como en las de emergencia? El alto tribunal en esta ocasión no se refirió como regular, sino al gobierno constitucionalmente formado por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y como de naturaleza revolucionaria al que sobrevino a los hechos de septiembre de 1955, con el que coexistió, distinto, sin duda alguna, dentro del expreso razonamiento del fallo (tomo 243, página 265), de los derivados del golpe de Estado de los años 1930 y 1943, los cuales sólo asumieron el Poder Ejecutivo. La diferencia señalada por el alto tribunal de que procedió al inmediato ejercicio de la facultad de dictar leyes fue la lógica consecuencia de las mutaciones profundas que trajo consigo en el ámbito jurídico, pues el gobierno de la revolución de septiembre de 1955 fundamentalmente se diversificó porque no juró la Constitución de 1949, en ese momento vigente, y reemplazó la de 1853, con las reformas de los años 1860, 1866 y 1898 solamente, en tanto y cuanto no se opusieran a los fines de la revolución enunciados en las directivas básicas y a las necesidades de la organización y conservación del gobierno provisional.

Y el punto de partida fue el discurso programa leído al pueblo de la República el 23 de septiembre de 1955 por el presidente provisional de la Nación, general Eduardo Lonardi, cuando dijo: «El programa de mi acción provisional —que no tendrá más duración que la impuesta por las circunstancias— puedo resumirlo en dos palabras: imperio del derecho. Si las leyes que existen son justas, el camino está marcado y poco cuesta seguirlo; si son injustas, las enmendaremos en la medida requerida por esos dos polos de la acción humana.»

El gobierno provisional obró no como poder que sometió sus actos al orden jurídico, en el que irrumpió jurando respetar y hacer respetar la Constitución entonces vigente, sino que simultáneamente creó su propio *status*, pues no otra cosa significó la derogación de las reformas de 1949 y la restauración de la Constitución de 1853, en tanto y en cuanto no se opusiera a las directivas del gobierno provisional. Sólo así se explica que la Corte Suprema haya expresado que la doctrina de los gobiernos defacto de los años 1930 y 1943, que no tuvieron más facultades excepcionales, faltando el Congreso, que las de un Poder Ejecutivo de jure, a los que equiparó, sea inaplicable a la institucionalización de la revolución de 1955.

Casi seis meses después de haber prestado juramento el doctor José María Guido como ti-

tular del Poder Ejecutivo de jure dictó el decreto 9.747, del 17 de septiembre de 1962, en virtud de la disolución del Parlamento dispuesta por decreto 9.204, del 6 de septiembre del mismo año, arrogándose atribuciones normalmente reservadas al Congreso de la Nación, es decir, la facultad amplia de dictar decretos con fuerza de ley. Esta resolución, no por ser general, cambia las cosas y salva el escollo constitucional que veda al Poder Ejecutivo expedir normas de carácter punitivo reservadas por nuestra Carta Magna al Congreso de la Nación, según la fórmula establecida en el capítulo V, que nos habla de la formación y sanción de las leyes. La ley previa (artículo 18 de la Constitución Nacional) no es una garantía que apunta solamente a la necesidad de que la norma preceda en el tiempo a la conducta reglada como punible, sino también a una norma que sustancialmente se caracterice por ser expresión, como ya lo hemos manifestado, de la soberanía del pueblo manifestada por el órgano representativo autorizado por la Constitución. Y sólo el Congreso puede dictar el Código Penal de la Nación (artículo 67, inciso 11).

El examen se ciñe a la distribución de facultades y con arreglo al principio republicano de la división de los poderes, ya que el Poder Ejecutivo no puede suplantar al Congreso para crear delitos y penas. Jurado el acatamiento a la Constitución, sus disposiciones son la suprema fuente rectora de la vida jurídica del país para los que ejercen el delicado y comprometido oficio de gobernarlo con arreglo a la Ley Fundamental. Esta es, pues, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una de las más trascendentales conquistas políticas de la civilización occidental, aparte de que «la vieja y gloriosa tradición institucional —española e inglesa— consagra ese impedimento de delitos y penas sin ley aun en los tiempos de gobiernos monárquicos conceptuados de origen divino».

Los decretos leyes cuya derogación el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo y la mayoría de los sectores que integran esta Honorable Cámara preconizan, establecen en términos generales, la abrogación de la legislación que prohíbe la actividad peronista, que reprime el comunismo y las actividades de los llamados Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista, así como también la disposición que determina la autorización especial para viajar a España.

Nos queda la íntima satisfacción, como integrantes del bloque oficialista, de que, durante el lapso que llevamos en el gobierno y por los órganos encargados de su aplicación, no se han tomado medidas restrictivas de la libertad y de la igualdad entre los ciudadanos argentinos. Se ha ceñido estrictamente a lo que marca la Constitución y la ley.

Para terminar, quiero formular un deseo y una invocación. Como tantas veces se ha dicho en este recinto con motivo del tratamiento de los decretos leyes, deseo que éstos sean los últimos que un gobierno constitucional deba considerar. Además, así como cuando se trató la intervención a Jujuy se dijo que la misma sería la última intervención que se dispusiera, también deseo que esta oportunidad sea la última en que el Congreso de la Nación deba abocarse al estudio y consiguiente abrogación de decretos leyes de carácter represivo y que de una vez por todas reinen en la República la paz, la tranquilidad y el claro concepto de convivencia.

Recuerdo en este instante —y va con ello la invocación— palabras, siempre actuales, que pronunciara el señor ministro del Interior, con motivo de ampliarse la convocatoria del Honorable Congreso a sesiones extraordinarias. Dijo entonces: «Esta es la hora de hacer. No es la hora de los enfrentamientos estériles. La violencia que destruye y el abuso económico que malogra todo esfuerzo no tienen cabida en esta instancia de lo nacional.

»Venimos a reparar, con humildad pero con decisión. El país debe sentirse ante un advenimiento renovador y revolucionario. Deben superarse las estructuras mentales del descreimiento y la desconfianza. Una democracia orgánica y social será su resultante y erradicaremos la desocupación y la falta de viviendas, el oprobio y la miseria.

»Argentina será Argentina en el concierto de las naciones del mundo, la de oportunidades iguales para todos y a la que todos deben ofrecer sus esfuerzos. Nadie habrá de faltar allí: el hombre y la mujer común, protagonistas anónimos de la construcción laboriosa de cada día; el obrero, el campesino, el maestro, el científico, el militar, el estudiante, el empresario, el pueblo todo. Vamos así a gobernar muchos años.» Así será. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Iglesias.

Sr. Iglesias. — Señor presidente: he escuchado atentamente discursos bien desarrollados, desmenuzando prácticamente casi todas las leyes represivas.

Por eso he llegado a la lógica conclusión de que no debo repetir conceptos concordantes; en cambio, puedo hacer una crítica generalizada de las mismas, que signifique nada más que un pequeño y modesto aporte a todo lo dicho por otros señores diputados.

Voy a procurar ser lo más breve posible en este interesante debate, que ha tenido la virtud de provocar gran expectativa, sobre todo en la clase trabajadora, y empezaré diciendo que, según el diccionario de la lengua castellana, represión significa contener, refrenar, sofocar. Pero también nos dice acertadamente que esta pa-

labra tiene estrecha vinculación con el orden público y que la represión del delito pertenece a los tribunales, aunque en nuestra patria —y esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo— se han llevado a cabo violentas acciones persecutorias harto conocidas, sin haber intervenido para nada la justicia. En cambio, fueron cumplidas esas diligencias en numerosos casos y con total olvido de la ley por policías bravas e incontroladas; y en otros casos distintos, por gobiernos arbitrarios e intolerantes que sufrían de cerrada amnesia cuando se les recordaban elementales preceptos constitucionales o las altisonantes promesas hechas muy fácilmente en el llano cuando eran simplemente candidatos en vísperas electorales.

Quiero destacar en primer término que por vocación y temperamento, y debido también a sinceras y profundas convicciones doctrinarias, jamás olvidadas o negadas, puedo manifestar en este recinto parlamentario que soy enemigo acérrimo de cualquier régimen totalitario, sea de izquierda o de derecha, llámase el mismo comunista, fascista, falangista o nasserista, pues entiendo, y estoy perfectamente convencido de ello, que las apreciables ventajas que nos ofrece una democracia integral, sin deformaciones, sin mezquina politiquería, aun reconociendo errores, imputables en la mayoría de los casos a los hombres y no al sistema, es el ideal venturoso, supremo y magnífico que contribuye, sin duda alguna, a disfrutar de una duradera y efectiva felicidad comunitaria, ya que virtualiza, eleva y nutre en plenitud de libertad la vida normativa de los pueblos, afianza con justicia el derecho igualitario, crea bienestar y enaltece y dignifica sin discriminaciones la personalidad humana.

Las facultades de excepción, utilizadas abusivamente y acompañadas en muchos casos en línea paralela con violenta ostentación de fuerza, son, de acuerdo a mi saber y entender, completamente regresivas, constituyen una vergonzosa rémora de funestos precedentes y no pueden ser en ningún momento carta de triunfo de ningún Poder Ejecutivo de la Tierra que cuente con efectivo y sincero respaldo popular, pero concretado el mismo con la verdad y siempre con la verdad, y no buscando jamás recursos demagógicos de fácil compenetración y convencimiento, pero que en ningún caso vienen a ser honestos, eficaces y constructivos.

Concretando, diré, sin retaceos, que el sólido prestigio de un mandatario moderno debe fundarse únicamente en su destacada eficiencia, laboriosidad y conducta, que, estoy seguro, ha de reconocer en todo momento y con justicia la voluntad mayoritaria de la opinión pública, que en estos casos nunca se equivoca. Siguiendo ese recto camino, sin desmayos ni claudicaciones, compartiendo alegrías y tristezas con el soberano y evitando mareos innecesarios, a ningún gober-

nante sensiblemente democrático puede interesarle decretar o hacer sancionar leyes de carácter reaccionario, o acomplejarle demasiado las expresiones adversas de la oposición, que en algunos casos —reconozco— pueden herir susceptibilidades por ser tendenciosas, caprichosas u obstruccionistas. En cambio, creo, sin temor a equivocarme, que debe escuchar muy atentamente, sacar lógicas conclusiones y hasta agradecer íntimamente las observaciones oportunas, responsables y clarificadoras hechas a plena luz y con absoluta franqueza, originadas en casi todos los casos en el necesario entorchocar de las ideas, ya sea en esta caja de resonancia llamada Parlamento o alto tribunal, ya sea por intermedio de la prensa oral, escrita o televisada, o bien en simples reuniones, asambleas y conferencias políticas, culturales o gremiales organizadas por bien inspirados dirigentes de la civilidad.

Nuestro glorioso general don José de San Martín, llamado muy bien el Santo de la Espada y Libertador de medio continente, dijo en una oportunidad, con su característica y proverbial autoridad moral: «Mi mejor amigo es el que critica mis errores y desaprueba mis desaciertos.» Estos valiosísimos conceptos, siempre de rigurosa actualidad, que apuntan directamente y en primer término hacia los eternos mistificadores y adulones palaciegos de ayer, de hoy y de siempre, deberían imprimirse y colocarse luego en cuadrito de honor, en lugares visibles y destacados en los despachos oficiales y hasta privados de toda la República.

Nuestro país, que según el decir de muchos se ha puesto para siempre los pantalones largos, no puede seguir viviendo entonces esta incierta y aparente normalidad institucional, con sus hermosos y bien dibujados esquemas color de rosa que nos muestran engañosamente algunos aspectos de tranquilidad social, aunque sin argumentos convincentes. Pues la ciudadanía vive desde hace mucho tiempo preocupada bajo la constante amenaza de esta nueva espada de Damocles, representada en nuestra patria por conocidas leyes represivas, que puedo afirmar con toda franqueza son armas netamente totalitarias, bien disimuladas, pero que pueden ser aplicadas con todo rigor y funestos resultados por cualquier gobierno y en cualquier momento frente al descontento y las airadas protestas populares. Demostramos fehacientemente con esa legislación, al mundo civilizado que nos contempla, que no queremos o no sabemos vivir en libertad, que no nos interesa la palabra «legalidad», o bien que no le tenemos suficiente confianza, ni creemos para nada en los articulados del Código Penal, ni en nuestra Carta Magna, que nos brinda generosamente, a raudales, derechos y deberes para todas las clases sociales. Puesto en rudo y sincero lenguaje criollo, nos señala y nos dice, terminantemente, aunque con otras palabras, que «nai-

des es más que naides» en la tierra maravillosa de San Martín, Sarmiento, Belgrano, Alberdi, Echeverría y Rivadavia.

Como una interesante lección de bien practicado civismo de épocas pasadas, que tenemos la obligación de imitar e, incluso, superar, de acuerdo con los muchos años transcurridos, me voy a permitir comentar y reproducir un escrito un poco olvidado, que tiene valor histórico y se vincula estrechamente con lo que está debatiendo la Honorable Cámara.

Hay en sus claras definiciones un contraste abierto con las ideas personalistas de muchos aspirantes a mandones que todavía piensan, con mentalidad semitroglodita, que la fuerza bruta y las persecuciones son medidas efectivas y salvadoras para mantenerse en el gobierno con tranquilidad, o sea la ley de la selva.

Aprovechando esta feliz circunstancia me voy a permitir entonces dar lectura a un decreto del gobernador Rodríguez, de Buenos Aires, suscrito en el año 1821, y cuyo texto decía literalmente lo siguiente: «Siendo la seguridad individual una de las bases más firmes de la felicidad pública, uno de los primeros deberes de las autoridades constituidas es custodiarla y garantirla eficazmente. Al efecto y a fin de evitar abusos de trascendencia, el gobierno ha acordado y decretado lo siguiente: 1º Desde la fecha de este decreto ningún individuo que pertenezca a la jurisdicción ordinaria podrá bajo ningún pretexto por orden de ninguna autoridad civil o militar, ser detenido en calidad de arrestado o preso en cuarteles de tropa, vivac, o cuerpos de guardia o cárcel militar. 2º El juez militar o juez civil que contraviniera el artículo anterior será personalmente responsable ante el gobierno por la acción y a las partes, o por el gravísimo daño inferido. 3º Todo auxilio militar en caso de aprehensión in fraganti inducirá la obligación expresa de poner al detenido de inmediato bajo el juez. 4º El juez y el comisario de policía no podrán arrestar a las personas en virtud de sus facultades sino tan sólo el tiempo limitado y necesario que demanden las indagaciones correspondientes que sean tan sólo de su resorte y dando conocimiento de inmediato al juez competente y a cuya disposición deben ponerlo.»

Con esta cita recordatoria quiero tan sólo demostrar a mis pares el celo y el gran espíritu de justicia que animaba ya en ese entonces a esos patriotas esclarecidos. Ese decreto gubernativo fue inspirado, redactado y refrendado nada menos que por el gran Bernardino Rivadavia, demostrando así una vez más su razonado criterio y férrea voluntad por respetar y hacer respetar sin cortapisas las que él llamaba frecuentemente «sagradas libertades públicas». Este eminente estadista podía predicar en esa forma tan singular porque sentía en el fondo de su alma el deseo infinito de terminar para siempre con las absurdas pretensiones de los

intocables del poder que sienten honda satisfacción cuando atropellan o vulneran sin escrúpulos los derechos y garantías inalienables de las personas, cualquiera que sea su condición social.

A nosotros, en pleno año 1964, aunque sea distinta la situación del país, el progreso arrollador y dimensional de esta época de asombrosas transformaciones, y habiendo transcurrido además casi un siglo y medio de existencia, nos dice elocuentemente que estamos obligados a vivir un clima por cierto actualizado, y dispuestos también a vencer, mirando siempre de frente y sin desmayos todas las dificultades de previsibles consecuencias presentes y futuras.

Por eso, los mandatos de nuestros mayores, como los que he mencionado precedentemente en esta exposición, nos enseñan y nos advierten al mismo tiempo, con esos hermosos e inolvidables ejemplos, que debemos avanzar todos los días del año, y si fuera posible en curso acelerado, a fin de recuperar el precioso tiempo perdido, pues no debemos olvidar jamás nuestra condición, bien reconocida universalmente, de nación libre, culta y civilizada, que debe ser motivo e influir poderosamente en nuestros espíritus para que nos decidamos a extender, sin titubeos, el correspondiente certificado de defunción a la leyes represivas, que, a mi juicio, son inconstitucionales y, sobre todo, antipopulares, justificando ampliamente entonces la oportuna y saludable reacción de hombres y mujeres de la Argentina al decidirse a luchar sinceramente y sin politiquería en defensa abierta de plausibles principios conceptuales y filosóficos de no violencia y de humana redención social, que, por otra parte, todos compartimos.

En una reunión de alto nivel intelectual le preguntaron a un viejo filósofo griego cuál era, de acuerdo con su experiencia y conocimiento, la nación más libre del mundo. Pregunta difícil, por cierto. Después de unos segundos de expectante meditación, el sabio respondió con seguridad de esta manera: considero que puede ser aquella donde la injuria manifiesta o la falta de garantías a un solo individuo es apreciada de inmediato como una terrible ofensa. como una bofetada recibida por toda la sociedad. Esta aleccionadora y hermosa definición, exenta, por cierto, de mezquinos egoísmos y de fácil interpretación, traduce sentenciosamente sencillas pero lógicas conclusiones, y nos dice, en forma harto elocuente, cuán necesarios son el respeto y la fraterna solidaridad entre los humanos mortales de este doliente mundo terrenal, donde nos olvidamos con mucha facilidad de cosas que no debemos nunca olvidar, como aquellas tan elementales de que la «unión hace la fuerza» y la de «amaos los unos a los otros».

Volviendo al debate en sí y actualizando los inobjectables conceptos vertidos por el mencionado filósofo, diré, sin reticencias y con absoluta seguridad, que si las leyes de represión son

realmente malas o pésimas, mereciendo por esa causa el repudio sin reservas de la mayoría del pueblo argentino —de eso estoy bien seguro—, también deben ser compartidas esas valiosas opiniones con espontaneidad y valentía por el resto de la ciudadanía libre, democrática y pacifista de todo el país, sin distinción de clases, religión, raza o ideología política.

Vivamos entonces disfrutando intensamente de las excelsas virtudes e inapreciables ventajas que nos ofrece nuestro régimen republicano, representativo y federal. Desechemos abiertamente todo lo que significa vivir sujetos a prejuicios, ataduras y convencionalismos de antigua data, reñidos con principios ideológicos de noble origen democrático. Hablemos al pueblo sin ocultamientos de ninguna especie, para que con nuestra acertada conducción y con su propio esfuerzo encuentre pronto la terapéutica efectiva que alivie, o cure definitivamente, sus prolongados males.

Por eso entiendo que ésta no es hora propiciatoria, ni conveniente, para vagas declamaciones o amables tertulias políticas, donde casi siempre se conversa y se critica, aunque las soluciones definitivas brillen por su ausencia. Esta no es hora tampoco de reiteradas y costosas solicitudes, extemporáneas aclaraciones y pequeños escandaletos que, por cierto, nada resuelven y que sólo sirven, en la mayoría de los casos, para llevar desorientación y acentuar más el descreimiento y la desazón en vastos e importantes sectores de la opinión pública nacional. Empecemos de nuevo, y, si fuera necesario, apelando a recursos heroicos, pero empecemos bien, es decir, poniendo en todo voluntad, cerebro y corazón, como decía en sus breves arengas don Hipólito Yrigoyen.

En estos momentos, por cierto tan difíciles y cruciales para el país, podría ser una solución de gran eficacia concretar urgentísimas y prácticas prioridades, muchas de ellas ya registradas en numerosos e interesantes proyectos de ley que no pueden continuar descansando placidamente en los nichos de las respectivas comisiones, o figurar solamente impresos en las páginas del Diario de Sesiones de esta Honorable Cámara, sino que esas felices iniciativas deben despacharse rápidamente, sin prolongadas discusiones, ya que van a beneficiar directamente y en primer término a las clases humildes y muy necesitadas de nuestra patria, cuyos problemas, bastante angustiosos y complicados, están obligados a resolver sin egoísmos todos los poderes que forman el Estado.

Esta es la única forma de salir del pozo, no del paso, y también puede ser la tan esperada tabla de salvación de solidez democrática que están pidiendo clamorosamente y a viva voz los habitantes de toda la República.

Así, señor presidente, con manifiesta energía y categóricas resoluciones, con abierta fran-

queza y reiterados ejemplos de moral, austeridad, y, sobre todo, de trabajo, es como vamos a terminar, sin utilizar la violencia, con los falsos y utópicos predicadores de fantásticos paraísos terrenales y con los demagogos profesionales que afloran como hongos, sobre todo cuando existe evidente malestar social. Son como esos pájaros llamados chimangos —valga la comparación—, muy comunes en el campo argentino, que revolotean y se arrojan en picada sobre la tierra cuando descubren desde el aire a algún animal abandonado.

Estas simples apreciaciones, por cierto muy personales, pero que, equivocadas o no, las siento muy íntimamente, deseo hacerlas extensivas también a los que sueñan todavía con ponerle vallas al pensamiento humano, buscando afanosamente un sable ejecutor con mucha fiebre de poder y voces de mando que lo acompañen en el coro, con el mezquino y deleznable propósito de provocar acciones perturbadoras contra el orden constitucional, fomentar el hambre, la desocupación y la miseria, y encarcelar después, ante dignos y justificados gestos de natural rebeldía, a intelectuales, estudiantes, empleados y obreros, actualizando así incontroladamente, con esos arbitrarios y oscuros procedimientos, que duele y repugna recordarlos, el infierno dantesco de Stalin, Hitler y Mussolini.

Debido a la preferente consideración y respeto que merece en general la ciudadanía de mi patria, que vive pendiente, muchas veces, de las oportunas y felices iniciativas y resoluciones que le brinda este Parlamento de la proporcionalidad, y creyendo, en alguna medida, interpretar sus legítimas aspiraciones, me voy a permitir formular una amable invitación a todos mis pares, para que, sin formularnos mutuos cargos y reproches, sin hablar para nada del *mea culpa*, sin cuestionar pequeñas diferencias, más de forma que de fondo —y que por otra parte nada construyen—, con gran responsabilidad conductora, olvidando el pasado inmediato —con algunos aciertos y muchos errores—, decidamos resueltamente, con espíritu de superación, dar término a las dificultades, sufrimientos y necesidades que tanto preocupan a la mayoría de los hogares argentinos, asegurando así, con prácticas y efectivas resoluciones la soñada paz social y el ansiado bienestar económico, cuyo triunfo definitivo, estoy seguro, no servirá para consagrar el nombre de una persona o de una agrupación política, sino que ha de premiar moramente el esfuerzo mancomunado de todos y para todos.

La legislación y decretos represivos, condenados a muerte y sin apelación por el alto tribunal del pueblo, son motivo de hondas divergencias sociales y contribuyen, en parte, al aumento progresivo del malestar comunitario, conspirando al mismo tiempo contra la estabili-

dad jurídica de nuestras instituciones, pues impiden por la fuerza el libre acceso de grandes e importantes sectores del quehacer nacional, que tienen sentimientos, que piensan, razonan, y son de carne y hueso como todos nosotros, y cuyos reclamos, por cierto muy concretos, tienen adecuada sustentación y base granítica, ya que reclaman solamente la eliminación de leyes draconianas que no tienen razón de ser ni vigencia actual y que, a mi juicio personal, habrá que cremarlas muy pronto en Plaza de Mayo, en acto público, frente a la estatua de la Libertad, como se hizo hace muchos años con vergonzosos instrumentos de tortura, demostrando así, en forma sencilla, simbólica y ritual, que son realmente sinceros y humanos nuestros profundos deseos de terminar con odios, rencores, puños en alto y viejos revanchismos, por los siglos de los siglos, amén.

Podría afirmar con propiedad y raciocinio que anhelamos fervorosamente una pacífica, franca y leal convivencia, pero sin renunciar jamás —y esto es muy importante— a nuestros inmovibles postulados democráticos y republicanos, que todos los partidos argentinos, reconocidos o por reconocerse, tendrán que aceptar sin subterfugios, cumpliendo al pie de la letra con el estatuto político que muy pronto votará esta Cámara y también con nuestra sabia Constitución Nacional, no aceptando de ninguna manera —ya que, por otra parte, no correspondería— el control remoto de interferencias foráneas, ni calcos totalitarios de ninguna especie. Es decir que queremos juego limpio, sin odiosas excepciones para nadie y que, bien unidos, nos pongamos de acuerdo, sobre todo en las cosas trascendentes e importantes, levantando en alto, sin temores, la única bandera, la azul y blanca de Belgrano, y sosteniendo también con devoción sacerdotal un común denominador que no admite discusiones, demoras ni pretextos: el progreso moral, material y espiritual de nuestra querida patria.

Nuestro dilatado y rico territorio nacional, que todos sabemos que disfruta ventajosamente del gran privilegio que le brinda su extraordinaria conformación y prodigiosa naturaleza, ha sido favorecido por la mano de Dios con todos los climas y atesora en sus poderosas entrañas infinitas riquezas, explotadas y sin explotar, lo mismo que sus fértiles llanuras, bosques, montañas, sierras, mares, lagos y caudalosos ríos. Estos son motivos que nos obligan a pensar en la necesidad imperiosa de llevar a cabo obras de extraordinarias proyecciones, que signifiquen concretamente inagotables fuentes de trabajo fecundo y de incesante progreso para nuestro país.

Pero debemos antes, señor presidente, terminar de una vez por todas con las leyes represivas, y con esa aberración perniciosa e irritante llamada conformismo, con esa quietud desalen-

tadora que podría muy bien llamarse modorra soñolienta, aceptada con resignación franciscana por muchas personas con mentalidad fatalista, que no comprenden o no quieren comprender, aunque el razonamiento sea fácil y viejo como el mundo, que para cosechar los benditos frutos de la madre tierra primero hay que arar hondo y, después, sembrar y transpirar abundantemente en largas y agotadoras jornadas. No hay otra forma; no hay otra alternativa.

Tampoco podemos esperar todo del cielo, ni de la siempre comprometedora, voraz e interesada ayuda extranjera, para superar esta gravísima crisis que tiene evidentemente profundas raíces y que llevará a la Nación, si no despertamos a tiempo, a un peligroso y oscuro callejón sin salida.

Ningún gobierno, por otra parte, que sea prácticamente minoritario puede pretender, de ninguna manera, conducir exitosamente la nave de la República hacia puerto seguro si no cuenta para ello con el franco y decidido apoyo de otras fuerzas de raigambre democrática, dispuestas a trabajar con patriotismo y honestidad de procederes, por y para el país, como lo han hecho también —y esto no es, por cierto, ningún descubrimiento—, después de haber finalizado la última y horrenda guerra mundial, los ciudadanos y ciudadanas de algunas potencias del viejo continente, cumpliendo, bien unidos en el sacrificio, exigentes y duras planificaciones, sin respetar horarios, pero logrando, finalmente, con admirable y bendita tozudez, todos los objetivos que les señalaran las circunstancias, o sea, una hermosa y resonante victoria.

En la misma forma, ya que no nos llevan ventaja alguna —¡qué nos van a llevar!—, podemos hacerlo también todos nosotros, ya que nos sobran coraje, fe y determinación para llevar a cabo con absoluta confianza el gran milagro argentino de transformación nacional. Por ello me atrevo hoy a manifestar rotundamente desde esta banca parlamentaria, cerrando mi modesto pensamiento, que las leyes y decretos represivos representan, desgraciadamente, un invisible e interminable muro de contención, que lesiona y hasta desalienta algunas veces a los que luchan desinteresadamente, siguiendo el curso glorioso de nuestra historia, por una Argentina poderosa y grande, por una Argentina mejor.

Esas leyes de torcidas finalidades son el producto exclusivo del miedo en cadena, no siempre justificado. Han servido solamente hasta el presente para combatir negativos efectos que yo los he de calificar abiertamente y sin la reserva de cortinas de humo, pues hay que convenir que algunos factores de poder, con el reloj por cierto atrasado, se han olvidado de eliminar de una vez por todas, y bistorí en mano, las causas originales de esta tremenda distorsión social, de este acentuado disloque econó-

mico, de esta actualizada torre de Babel, donde hablando distintos idiomas queremos entendernos y encontrar las soluciones salvadoras o, mejor dicho, pretendemos sin ningún resultado a la vista establecer amables coincidencias sin deponer cerrados sectarismos que son una lamentable contribución en favor del total desencuentro y también factor de intranquilidad y división casi permanente de la familia argentina.

El pueblo trabajador de la República espera ansiosamente de este Parlamento nacional, por encima de todo lo manifestado, nada más que claras y firmes decisiones que signifiquen a la postre constructivos y realistas motivos de felicidad social. Y ya que sigue también paso a paso nuestra labor legislativa con el oído atento y el ojo avizor, pues por algo somos sus auténticos y directos representantes, entiendo que esta vez no puede ni debe ser defraudado. ¡Así, sea! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Señor presidente: el señor miembro informante del dictamen de la mayoría y los demás señores diputados que han hablado sobre el tema en debate coinciden en que los llamados decretos leyes represivos violan los artículos 18 y 67, inciso 11, de la Constitución Nacional.

Cuando el artículo 18 de la Constitución se refiere a la ley que debe existir antes del hecho del proceso, se refiere a la ley en sentido formal, es decir, la ley del Poder Legislativo, porque es un axioma de la ciencia política que no puede hablarse de garantías de la libertad si no existe el reparto de la autoridad entre los órganos del poder, que se frenan entre sí; teoría del reparto de autoridad que desarrolla Werner Goldschmidt en su obra *La Justicia*. Estos decretos represivos tampoco pueden invocarse porque emanan de un gobierno defacto, ya que no se concibe la revolución como derecho, si no es para garantizar la libertad del hombre; principio que la Corte Suprema nacional desarrolla con exactitud por primera vez en su acordada que registra el tomo 158, página 290, cuando expresa: «Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y que ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder.»

Porque, como dijera Luis V. Varela en su *Historia constitucional de la República Argentina*, en el tomo II, página 146, cuando analiza aquella decisión del Triunvirato creadora de comisiones judiciales especiales posteriores al hecho: «Y no se pretenda que el estado de una revolución hecha en nombre de la libertad

y buscando independizar estos países del poder de la España por haber encontrado ominosa su dominación durante tres siglos, basta para justificar medidas de una arbitrariedad semejante, que sólo pudieron dictarse en nombre de esa omnipotencia sin trabas que ejercía el Triunvirato.»

Es que la revolución como derecho no se justifica sino para mantener la libertad, asegurarla y protegerla.

Y así, si todos estamos de acuerdo en que esos decretos leyes represivos violan la Constitución de la Nación; si aquí hemos escuchado a los señores diputados decir que esos decretos leyes no tuvieron validez desde el mismo momento en que fueron dictados, nos cabe ahora a cada uno de nosotros buscar la norma jurídica redactada de tal manera que ese concepto que tenemos todos los diputados se traduzca con exactitud. Por eso pensé que mejor que expresar que esas normas quedan derogadas —se pueden derogar las normas que tienen validez constitucional— es dejar bien establecido que ellas no tuvieron validez desde su origen. Por eso, en el dictamen de minoría que suscribo, digo que se declaran sin validez los decretos leyes en cuanto ellos crean tipos de delitos y fijan penas, porque esos decretos leyes los dictó un sólo hombre; y cuando estas normas que afectan la libertad las dicta un solo hombre, queda restringida o suprimida la libertad, que es condición humana.

Si esos decretos leyes no tuvieron validez, tampoco la tuvo aquella disposición, contenida en aquéllos, que derogaba leyes anteriores de tipo penal. Así se justifica el artículo 29, que hace una declaración expresando que han estado en vigencia las disposiciones jurídicas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63.

He oído decir en este recinto que el Congreso no puede hacer el cotejo constitucional; que la ley no puede declarar la invalidez de otra ley anterior, y que esto es del resorte del Poder Judicial. El Poder Judicial, al declarar inconstitucional una norma, no la invalida; sólo no la aplica. Si invalidara la norma, entonces sí se produciría la confusión de poderes. Estaría el Poder Judicial anulando por inválida o por inconstitucional una norma del Poder Legislativo. Tanto es así, que no la invalida —sino que deja de aplicarla—, aplicando una norma jerárquicamente superior, que es la Constitución, que esa norma continúa con vida jurídica y que los actos jurídicos pueden seguir realizándose en virtud de ella, aunque en un caso particular el Poder Judicial la haya declarado inconstitucional.

La ley sí puede declarar sin validez una norma jurídica anterior. El legislador que hizo la norma la puede aclarar por leyes posteriores aclaratorias. También las invalida; y en este caso, por una razón especialísima, porque evidentemente éste es un caso excepcional, la de-

clara sin validez para refirmar que no tuvo validez desde un principio. El artículo 31 de la Constitución, al apartarse del texto análogo de la Constitución de los Estados Unidos, nos da a entender que en la República todas las autoridades —no solamente el juez— hacen el cotejo de la Constitución.

Yo fijo la atención sobre la segunda parte del artículo 31: «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales.» La Constitución de los Estados Unidos se refiere a los jueces de los Estados, pero nuestros convencionales en un breve debate cambiaron la palabra «jueces» por «autoridades», para que no hubiera dudas. En consecuencia, todas las autoridades de la Nación o de las provincias están en la obligación primera de hacer el cotejo constitucional para que la primacía de la Constitución se mantenga sobre cualquier otra norma de la Nación o de las provincias.

Pero es que también acá ocurre algo excepcional. Estamos todavía sufriendo las consecuencias de un gobierno defacto. Hoy estamos en presencia de decretos leyes represivos y, como dijimos en la oportunidad de informar sobre el anterior proyecto de ley que declaraba en general vigentes los decretos leyes, vamos en pos del orden jurídico. Creo que con la terminología que ha usado el dictamen de la minoría que suscribo, no solamente garantizamos la libertad sino que también vamos en pos del orden jurídico.

Yo quisiera que no hubiese más discusión sobre este problema: los decretos leyes no han existido como válidos en ningún momento. Esos decretos leyes derogaron normas penales. Pero por el dictamen de la mayoría se ponen en vigencia las normas penales de ahora en más. Entonces, yo me pregunto: ¿qué pasa con los hechos producidos hasta ahora? Es un interrogante que me formulo y no sé qué soluciones jurídicas habrá; pero si tengo la seguridad que de quedar el artículo 29 del dictamen de la mayoría como está —«Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas...»—, habrá dificultades judiciales, habrá verdaderos semilleros de pleitos y discusiones, que es lo que queremos evitar porque vamos en pos del orden jurídico.

Voy a ser brevísimo, y daré fin a mi exposición, porque lo único que quería era fundamentar la redacción de estos dos artículos del dictamen de minoría; en lo demás estoy de acuerdo con el dictamen de mayoría y con los conceptos de todos los señores diputados que han hablado. Ya lo dije al comienzo: vamos buscando la

redacción que encierre en la norma el concepto que queremos. Esta exposición mía no es nada más que una explosión de mi espíritu. No quisiera tampoco que mi dictamen se pusiera a votación, porque me basta con lo que he oído acá en el recinto. Todos estamos de acuerdo en que los decretos son inconstitucionales desde su comienzo. He querido defender desde mi banca del pueblo la libertad. He enseñado toda mi vida que el hombre debe tener conciencia de su libertad en la convivencia; consciente de ella, debe defenderla con todos los medios de que disponga. Primero, los jurídicos, y si éstos fracasan, con cualquier otro, porque la libertad debe quedar en su plenitud. Que los gobiernos de jure o defacto se detengan ante la libertad del hombre, porque ella es una condición humana sin la cual el hombre se convierte en cosa; condición humana anterior a la propia norma constitucional, que no la crea sino que simplemente la reconoce y la garantiza. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Sarulle.

Sr. Sarulle. — Señor presidente: el Congreso Nacional ha comenzado a tratar el mensaje 2.801 del Poder Ejecutivo por el que se solicita la derogación de las normas penales que son contrarias a los principios constitucionales, y a la sanción de otras que configuran la máxima urgencia en materia de legislación penal de fondo.

El proyecto contempla la sanción de normas que no hayan sido establecidas por ley por el Honorable Congreso, porque sólo mediante una ley sancionada de acuerdo con los artículos 18, 67, inciso 11, y 68 a 73 de la Constitución Nacional pueden establecerse preceptos que, determinando delitos y penas, restrinjan la libertad individual.

Estima el mensaje que al reafirmar el principio de que no hay delito ni pena sin ley previa, el Poder Ejecutivo responde a la decisión de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución en todos sus ámbitos, señalando así mismo que quiere especialmente que todos los preceptos que castigan la mera opinión sean derogados porque no son compatibles con el régimen republicano de nuestra Constitución, que asegura la libertad de pensamiento; y manifestando con claridad que se debe reforzar el título de los delitos contra el orden público del Código Penal para asegurar la defensa de la sociedad, la autenticidad en la formación del gobierno representativo y la honestidad de los agentes de la administración pública.

A nueve años de la revolución de 1955 se llega a la supresión de una legislación que no ha de ocupar un lugar muy honroso en la jurisprudencia política argentina. Podríamos afirmar, en rigor de verdad, que la legislación represiva constituye uno de los capítulos más oscuros de

nuestra vida política. Es evidente que ha sido dictada por la pasión; que ha faltado la etapa reflexiva, la reflexión que hace y pone justicia.

No me ocuparé del evento de la inconstitucionalidad, ni de la falta de juridicidad de estas normas que atentan contra la libertad de pensamiento y el derecho de opinión.

Mi bloque —en cuyo nombre hablo— quiere insistir, por mi intermedio, en un aspecto sustancial del problema de la legislación represiva. Este problema es la artera maniobra consumada para destruir la economía nacional, anular las mejoras sociales y englobar a dos concepciones políticas, total y diametralmente opuestas, como son el comunismo y el peronismo.

En momentos en que este gobierno, en una feliz etapa del reencuentro argentino, envía el mensaje derogando la legislación represiva, nosotros manifestamos nuestra devoción a la República y a sus instituciones; pero debemos señalar, con absoluta claridad, que el comunismo y el peronismo son dos cosas totalmente opuestas. Eso sí, debemos preguntarnos qué oscuros maquiavelismos o qué oscuros designios han llevado a colocar en la bolsa común de las procripciones a estas dos fuerzas completamente distintas, el peronismo ha combatido con toda decisión al comunismo, no sacándolo de la legalidad sino de la realidad, por acción de una política que en los campos sociales y económicos y en los propios campos políticos buscaba grandes objetivos nacionales.

No entro, como he dicho en oportunidad de la interpelación al señor ministro del Interior, a analizar aspectos negativos del pasado. Quiero ser total y absolutamente objetivo en la emergencia. Los justificativos de la revolución del 55 se expresaron fundamentalmente en términos éticos y políticos. Se invocó la violación de las libertades fundamentales, la arbitrariedad, el despotismo tiránico; y fueron banderas revolucionarias del 55 el imperio del derecho, el asegurar las garantías individuales de la Constitución y el posibilitar la unión de todos los argentinos bajo el lema de «ni vencedores ni vencidos». Pero la situación económica no fue considerada en disputa.

Poco tiempo después comienzan a enunciarse problemas como el detenimiento de la inflación, recuperar para YPF lo que nosotros, según decían habíamos entregado a la California Argentina y el mantenimiento y aumento de las conquistas de las clases trabajadoras. Pero desde ese mismo instante las promesas ético-políticas son desplazadas por hechos tales como las prisiones y las persecuciones políticas en general.

Luego viene el plan Prebisch, donde se dice que el país padece su peor crisis. No se daban las razones de esa afirmación. Anticipábase —eso sí— una serie de medidas que luego irían a ser concretadas en un programa. Las medidas de ese informe fueron, en lo fundamental, las siguientes: redistribución de los ingresos nacio-

nales en favor del sector agropecuario; elevación del precio básico de las cosechas; devaluación del peso; mercado libre de cambios; liberación de precios de los artículos de consumo; congelamiento de salarios; utilización del crédito y del capital extranjero; liberación de la economía del intervencionismo del Estado, e incorporación a organismos internacionales tales como el Fondo Monetario y el GATT.

En suma, a partir de entonces se realizó una política económica totalmente distinta de la que se había sustentado desde 1945 a 1955. Se otorgó en la emergencia un mayor énfasis a la necesidad de apelar a los créditos y capitales extranjeros y a los efectos de la liberación de esa economía comienza un plan de estabilización monetaria y de desarrollo económico; y partiendo de esas tesis, en general ya enunciadas, se particularizan las causas específicas que provocaron esa situación.

Así se dice que ella obedece a la dilapidación de las reservas de oro y divisas; al emisionismo incontrolado que desató una inflación incontenible; a la descapitalización general provocada por la escasez del ahorro nacional y la deficiente orientación de las inversiones; a la antieconómica distribución de la renta nacional provocada por los aumentos masivos de salarios no acompañados por aumentos de productividad; al despilfarro de las finanzas públicas operado en el mismo período, y al intervencionismo estatal y la imposición de los controles del Estado.

Para nosotros, las causas son total y diametralmente distintas en muchos aspectos. Podría sintetizarlas afirmando que la liquidación de gran parte de las reservas de oro y divisas existentes en 1955, la contracción de una enorme deuda pública externa sin resultados en el mejoramiento de la economía nacional, la sustitución de una estructura económica equilibrada con un conjunto articulado de medidas dirigidas a redistribuir la renta nacional en favor de minorías privilegiadas; devaluación del peso, que fomentó la transferencia de ingresos nacionales a los consumidores extranjeros y desató, sólo entonces, sí, la pavorosa inflación; reemplazo de un plan que se conformaba a las necesidades del país por una desesperada anarquía; anárquica apelación a organismos internacionales de crédito y a las inversiones extranjeras; el despilfarro en los gastos públicos; la generalización del contrabando, fomentado por medidas tales como la liberación aduanera más allá del paralelo 42; los negocios efectuados con motivo de la devaluación de la moneda; los convenios petroleros; el negociado con la CADE, etcétera; y, sobre todo, la subordinación de la política financiera y nacional a las directivas del Fondo Monetario Internacional.

Es evidente que cualquiera que haya profundizado un tanto el estudio de la historia habrá observado que todos los países con vocación de destino universal han orientado siempre sus

pasos de acuerdo con doctrinas previamente adoptadas, o que iban generándose en torno a la acción. Han habido, así, grupos e individuos que, para mantener la continuidad entre la unidad de concepción y la unidad de acción, creaban sus doctrinas, y abundan en la historia muchos ejemplos para demostrarlo. Evidentemente, muchos de los seguidores de esas doctrinas —por ejemplo, Marx y sus continuadores— habrán cometido errores, como efectivamente los cometieron, pero se ajustaron a un molde ideológico y con él siguieron.

Nosotros entramos a participar en la vida nacional gracias a un movimiento revolucionario realizado por las fuerzas armadas el 4 de junio de 1943 y afirmado por el pueblo el 17 de octubre de 1945; y nosotros tuvimos e hicimos una doctrina. Esa doctrina procuraba, en lo fundamental, alcanzar la felicidad del pueblo mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando también los valores materiales con los del espíritu, y los derechos del individuo con los de la sociedad, de manera tal de crear la solidaridad doctrinaria de todos los argentinos con relación a la forma más efectiva de enfrentar los problemas de orden político, económico y social.

Nosotros creemos, con Perón, que nuestra doctrina es el fundamento más seguro para alcanzar una auténtica unidad nacional, que no es sino la coincidencia fundamental de todos, en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la Nación. Creemos que nuestra doctrina tiene la suficiente amplitud y flexibilidad como para que puedan comprenderla todos los argentinos, cualquiera sea su posición o su partido político. Pero que todos entiendan y comprendan una sola y gran verdad: que la patria es también una integración de puntos de vista en lo fundamental, que pueden ser antagónicos, diferentes y hasta inconciliables en lo accesorio, pero no en el substracto fundamental.

Insistimos —y seguiremos insistiendo— en que el justicialismo tiene un contenido eminentemente nacional en cuanto trata, mediante la aplicación de principios fundamentados en el bien común y en la justicia, de constituir una sociedad de hombres libres, que busca con su acción la grandeza del país, mediante el esfuerzo armónico y ordenado de todos, y la felicidad de sus habitantes por obra de la solidaridad humana. Por ello, señor presidente, llegados al poder el 24 de febrero de 1946, la tarea esencial que nosotros cumplimos fue la de la recuperación nacional.

Se nos había dicho que en cualquier parte del mundo quien maneja la importación y la exportación maneja la política interna; quien maneja el sistema financiero y con ello el crédito y los valores del país, también maneja en gran parte todas las finanzas nacionales, y que quien realiza el transporte de ultramar fija y

ha fijado los precios. Por ello, para afianzar el bienestar y la prosperidad del pueblo argentino debimos suprimir la economía capitalista de explotación, reemplazándola por una economía social, en la que no hay explotadores ni explotados y en la que cada uno recibe la justa retribución de su capacidad y de su esfuerzo, estando el capital al servicio de la economía y no nuestra economía al servicio del capitalismo extranjero.

Por eso planificamos, procurando que la planificación no asumiera la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas, ya que regulábamos la acción del Estado. Nosotros sabíamos que en América del Norte, en la caótica situación del año 1930, Roosevelt, con su *New Deal* frenó el gran proceso que devastaba la economía del país del Norte.

Por todo ello nos preguntamos, y seguiremos preguntándonos, si esta legislación represiva no habrá sido acaso lucubrada para romper o destruir las defensas económicas de la Nación. Y me pregunto ahora si no se habrá confundido el peronismo con el país, y para destruir el peronismo se haya herido en forma vital al propio desarrollo nacional.

Nosotros estábamos realizando una etapa política de la vida argentina con grandes objetivos nacionales y acompañados por la auténtica mayoría del pueblo argentino. En ese momento, el mismo pueblo era el encargado de defender la independencia económica, pues evitada la lucha de clases, la armonía entre el capital productor y el trabajo creaba valores y aumentaba la riqueza disponible, no enriqueciendo a unos pocos, sino distribuyendo esa riqueza entre los más, para contribuir al bienestar social. Al humanizar el capital se señalaba que este factor podía explotar a la máquina, a la tierra, pero jamás debía explotar al hombre; que la propiedad privada debe cumplir una función social; que la tierra no es un bien de renta, sino un instrumento de trabajo, y que el capital debe estar al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Nosotros no somos enemigos del capital, ni tampoco lo somos del capital foráneo; pero si somos y siempre lo seremos del capital nacional o extranjero cuando no sea productor, sino explotador y se convierta en lo interno en plutocracia o en oligarquía, tratando de disputar al Estado el gobierno de la Nación, y en lo internacional convirtiéndose en una auténtica violación de la soberanía nacional.

Sr. Amura. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sarrulle. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Con el permiso de la Presidencia, deseo preguntar al señor diputado Sarrulle si cuando el peronismo estuvo en el gobierno no

aplicó un tipo de legislación represiva que se aplicó a aquellos que ideológicamente no pensaban como el gobierno de ese momento.

Sr. Sarrulle. — En su oportunidad le voy a contestar.

Sr. Busacca. — Ahora, señor diputado.

Sr. Sarrulle. — ¿Ahora? No tengo ningún inconveniente.

El peronismo vivió y fue un proceso revolucionario que no encontró al país preparado para recibirlo. Nosotros fuimos considerados, señor diputado, no como adversarios —no merecíamos en ese tiempo la consideración que merecemos, por ejemplo, en este momento— sino como enemigos.

Sr. Amura. — ¿Fueron ustedes los que no consideraron como adversarios a los adversarios, o fue a la inversa?

Sr. Sarrulle. — El peronismo tiene cinco millones...

Sr. Amura. — Aparte de los cinco millones, tenían el poder.

Sr. Iglesias. — Rebaje un poco la cifra, señor diputado.

Sr. Gutiérrez. — Los Cardozo tenían la picana.

Sr. Sarrulle. — Después de 1955 han habido muchas picanas, pero sobre este punto no voy a contestar al señor diputado, pues ya he dicho que no deseo volver a los aspectos negativos del pasado. En oportunidad de la interpelación al señor ministro del Interior afirmé que al pasado hay que volver inevitable e inexorablemente, pero no a los aspectos negativos, repito, del pasado. El pasado se actualiza en el presente. El presente no existe. Lo que existe es el futuro. El pasado se actualiza en el presente para proyectarse en el futuro.

Sr. Amura. — El señor diputado ha hecho el elogio del pasado...

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia solicita a los señores diputados que no dialoguen.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Ritacco.

Sr. Ritacco. — El señor diputado Sarrulle dice que no quiere volver al pasado y que a él le preocupa el futuro del país, pero desde hace bastantes minutos está haciendo un análisis de los últimos veinte años de la política argentina, y lo está haciendo subjetivamente, como si él hubiese vivido en la China durante los diez años del gobierno de Perón. Habla como si durante la dictadura de Perón no hubiesen sucedido hechos de los cuales hoy se avergüenzan los argentinos, como por ejemplo, injusticias, arbitrariedades, persecuciones, quema de iglesias, torturas y muchos otros hechos vergonzosos que el señor diputado Sarrulle parece haber olvidado totalmente.

Sr. Sarrulle. — Voy a contestar al señor diputado.

Estoy haciendo una enunciación de nuestra doctrina política y he comenzado mi exposición manifestando que esa legislación represiva obedece no sólo al hecho de querer castigarnos por haber realizado una obra que, para nosotros, ha engrandecido a la Nación. Yo podría contestar al señor diputado Ritacco diciéndole que a los ejemplos que él pueda dar otros tantos puedo yo oponer; como por ejemplo, los fusilamientos, los procesos de desnazificación, etcétera. Pero eso importaría caer en lo que no quiero caer. Cuando me afirmo en mi ideología política, quien se sienta herido que la supere.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sarrulle. — Sí, señor diputado.

Sr. Llaver. — He escuchado al señor diputado una afirmación cuyo esclarecimiento me interesa fundamentalmente. Ha dicho que la doctrina justicialista es una doctrina puesta al servicio de la libertad.

Como supongo que la actual doctrina justicialista es la misma doctrina nacional peronista y ésta, a partir de 1949 ó 1950, ha sido una doctrina liberticida, me interesaría saber si la actual doctrina justicialista entronca en su integralidad con aquélla.

Sr. Catalán. — Es una pregunta capciosa. (Risas.)

Sr. Ritacco. — ¡Claro! (Risas.)

Sr. Sarrulle. — Es una doctrina política, es una filosofía y una praxis de lo argentino en lo económico, en lo político y en lo social. Si usted me preguntara si muchas de las cosas que enunciábamos en 1949 pueden tener vigencia en 1964, estaría con usted.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Villanueva. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Sarrulle. — Voy a permitir una última interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Villanueva.

Sr. Villanueva. — En relación con el diálogo que se ha suscitado, quiero realizar un pequeño aporte tendiente a esclarecerlo. No se debe —así me parece, y pongo este criterio a consideración de la Cámara— enjuiciar una doctrina en razón de presuntas o reales desviaciones parciales que pudo tener. Los hechos políticos están entroncados en la historia, y no aparecen previamente escritos en los libros. Los hechos políticos son la resultante de una concatenación de fuerzas que se dan en el tiempo y en el espacio y, por consiguiente, no siguen ni pueden seguir rígidamente, bajo ningún gobierno, el esquema previo que les dio origen.

Todos tenemos un criterio formado, más o menos ajustado, respecto a la realidad del pasado argentino, el reciente y el mediato. Todos sabemos que hombres de gobierno que, por lo demás, en sus aspectos generales han sido fecundos y constructivos para el quehacer argentino, fueron empujados por los acontecimientos a cometer o a tolerar hechos lesivos de principios humanos o políticos elementales en una comunidad determinada. El presidente Yrigoyen, por quien me anima un profundo respeto en razón de su vocación patriótica y su sentimiento argentinista, fue precisamente victimado por hechos de ese tipo, que en alguna medida lo desprestigiaron. Durante su gobierno, tuvo que ser protagonista de la semana trágica en los talleres Vassena y de la matanza del Sur de la Patagonia. Sin embargo, no podría decir con justicia y ecuanimidad que fue un tirano, ni siquiera un dictador. Los hechos políticos, que se tejen en una urdimbre compleja...

Sr. Zarriello. — El señor diputado no conoce la historia argentina y no le conviene entrar en ese aspecto. ¿Me permite una interrupción?

Sr. Villanueva. — Estoy usando de una interrupción que se me ha concedido. El señor diputado debería solicitarla luego al señor diputado Sarrulle.

El radicalismo, a partir de 1916, por diferentes motivos, aplicó una política de intervenciones federales. Quiero hacer presente que en alguna medida, dadas las circunstancias en que ello tuvo lugar, personalmente puedo estar de acuerdo con muchas de ellas. Sin embargo, han sido permanente y persistentemente censuradas.

Entonces, frente a la pregunta que se le hace a mi estimado colega de bloque, he de concluir diciendo que evidentemente las doctrinas no se pueden enjuiciar rígidamente en función de tales o cuales desviaciones. Estimamos que el balance de la acción de un gobierno es el resultado de sopesar todos los aspectos positivos y negativos que tuvo, en su doctrina y en sus hechos.

Ahí está el dilema que en definitiva la historia argentina tendrá que esclarecer.

Sr. Ritacco. — Determinará que el balance ha sido ampliamente negativo.

Sr. Amura. — Algún día el señor diputado tendrá que explicar cuál es la doctrina.

Sr. Zarriello. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado Sarrulle?

Sr. Sarrulle. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Zarriello.

Sr. Zarriello. — Parecía que este debate, de carácter técnico, no iba a tener ninguna derivación de tipo político. Pero, aunque quizá sin pretenderlo, el señor diputado Sarrulle lo ha llevado a eso.

Escuchaba esta tarde la primera voz que se levantó de la bancada justicialista y la verdad es que, dentro de la emotividad y de la sencillez con que trataba el problema, aun con una

gran versación, el diputado del justicialismo que hacía uso de la palabra transmitía la emoción que experimentaba cuando expresaba a fuer de sincero, que era un hombre auténtico de la democracia.

Evidentemente que esta incursión política del señor diputado ha llevado a un compañero de su bancada a mencionar a Hipólito Yrigoyen, y yo quiero dejar sentado, con claridad meridiana, que desde 1890 el país venía sufriendo alternativas que angustiaban al pueblo de la República, y es justamente en 1916, cuando Yrigoyen asume la primera magistratura de la Nación que se alcanza una transformación social sin derramar una sola gota de sangre, sin encarcelar ni perseguir a ningún argentino, sin coartar la libertad de prensa mediante la clausura de diarios.

El señor diputado, cuando hablaba de Hipólito Yrigoyen, demostró que, evidentemente, no conoce o no recuerda la historia política del país. Perdóneme, señor diputado; esto no quiere decir que no la haya estudiado. Lo cierto es que Juan Domingo Perón basaba su política en 1945 pretendiendo demostrar a todo el país que nosotros, los radicales, habíamos abandonado la doctrina y la política de Yrigoyen, lo cual no era cierto, y que él la asumía, aspirando obtener provecho de esa manera, agregado, por supuesto, del apoyo de los recursos a su alcance que tenía en el Poder Ejecutivo de entonces.

De cualquier manera, yo exhorto al señor diputado Sarrulle a que entre a discutir exclusivamente el problema de la derogación de las leyes represivas, porque en caso contrario, como lo ha dicho el señor diputado Llaver, tendríamos que empezar por establecer desde qué período de la historia argentina en los últimos años, se han dictado esas leyes y decretos de carácter represivo, respecto de los cuales el radicalismo nada tiene que ver y ha sostenido permanentemente, y así consta en su plataforma, que los derogaría, que es lo que estamos haciendo en estos instantes para llegar a la total pacificación del país.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Villanueva. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, porque he sido aludido?

Sr. Sarrulle. — Le concedo la interrupción al señor diputado con la anuencia de la Presidencia, pero desearía luego continuar mi exposición hasta concluirla.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Villanueva.

Sr. Villanueva. — Desde luego, en lo que respecta a las afirmaciones sobre ignorancia o sapiencia en materia de historia política creo que no habiendo un tribunal superior absolutamente ecuaníme o imparcial es una cuestión de opinión de los señores diputados, de modo que, por mi parte, no voy a formular un juicio equi-

valente sobre los conocimientos y opiniones del señor diputado.

Los aspectos positivos que el señor diputado atribuye al presidente Yrigoyen creo que son exactos y los comparto plenamente; pero, a fuer de sincero, y sin que esto empañe la figura política de Yrigoyen, habremos de reconocer que, por diferentes motivos su gobierno cometió algunos hechos que pueden ser eventualmente censurados. Lo que dije hace un momento respecto de la semana trágica de 1919 y de los hechos de la Patagonia, no son fantasías pues figuran en todos los periódicos de la época. Para mí Yrigoyen no fue el autor y el instigador, sino que tuvo que afrontar situaciones concretas que se presentaron, pero que de alguna manera empañaron su efectiva y patriótica acción de gobierno.

Sr. Musitani. — ¿Sabe usted quién dirigía las tropas?

Sr. Villanueva. — No tiene importancia, señor diputado.

En otro orden de cosas convengo con el señor diputado en que Perón cuando fue candidato presidencial de alguna manera levantó las banderas de Yrigoyen y las del nacionalismo económico.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Sarrulle. — Es evidente que nosotros tenemos que enunciar determinadas partes de nuestra doctrina política, social y económica. La legislación represiva que estamos debatiendo se refiere muy en especial y en particular a nuestro movimiento, y creo que no escapará al elevado criterio del señor diputado Zarriello esa circunstancia. Estamos más castigados y más perseguidos por esa legislación represiva que el propio comunismo.

Vuelvo a reafirmar que el justicialismo no está dirigido contra el capitalismo sino contra el imperialismo. Su paso revolucionario por el gobierno, su praxis revolucionaria, lo señala no como una revolución socialista, sino como una tercera forma de los procesos revolucionarios que se han generado en muchos países de Asia y Africa en virtud del problema del subdesarrollo.

Importa, pues, que se entienda con absoluta claridad que el justicialismo es una forma política de democracia social que completa una etapa de la revolución nacional contra las perimidas estructuras liberales. Es una fuerza profundamente democrática con la participación activa del pueblo y su vigencia actual prueba que sus principios doctrinarios han partido de las propias necesidades del país y de su desarrollo sin caer en la entrega a los capitales extranjeros.

El peronismo abrió las puertas para que la democracia social fuera una realidad en la República, y así como en el siglo pasado todos los partidos políticos se inficionaron de liberalismo,

en nuestro tiempo —tengan la plena seguridad los señores diputados— todos los partidos políticos tendrán que preconizar en su plataforma la doctrina social y la democracia social que nosotros hemos inaugurado en la República.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sarrulle. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — El señor diputado acaba de decir que el peronismo, antes de ser justicialismo, ha inaugurado la doctrina social en la República.

No creo que sea el momento oportuno para hacer un concurso de prioridades, pero señalo que, aunque en menor escala, también ha habido realizaciones con anterioridad a ese movimiento.

Repito que no debe hacerse un concurso de prioridades, sino dirigir los esfuerzos comunes con modestia y sencillez para hacer más fácil el entendimiento de los argentinos.

No quiero hacer otras reflexiones porque pecaría de lo mismo que señalo al señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sarrulle.

Sr. Sarrulle. — Yo me he referido a la época en que nuestro movimiento estaba en el gobierno, pero si mis manifestaciones retacean en parte o lesionan la acción cumplida por otros partidos en la República Argentina, no tengo ningún inconveniente en retirar mis expresiones.

Sr. Martínez Raymonda. — No es a un partido, sino que le conviene al país.

Sr. Sarrulle. — Al país le conviene y en función del país retiro esas expresiones.

Estamos con la derogación de los decretos leyes represivos, que, además de no satisfacer las exigencias formales y sustanciales que establece la Constitución Nacional, atentan contra las declaraciones y expresiones de las Naciones Unidas.

Los principios que limitan el poder del Estado y de la autoridad en defensa de la personalidad individual se llaman, en su expresión más general, derechos de la personalidad humana. Las desviaciones del poder político se han ido produciendo como consecuencia de la desviación impresa a un factor necesario en la vida social que es la autoridad. Sin ella no es posible la convivencia entre los hombres, si se quiere asegurar un mínimo de tranquilidad, de paz y de armonía. La autoridad exige del individuo la debida sumisión, y ella introduce un principio de orden, porque vivir bajo un régimen de autoridad no quiere decir carecer de libertad. No hay oposición entre uno y otra. Autoridad y libertad son valores que

se complementan, precisándose mutuamente. Es indispensable, para la realización adecuada de la libertad, la exigencia de la autoridad legítima, debidamente establecida. Análogamente, no es auténtico el ejercicio de la libertad si se traduce en un atentado contra la permanencia de la autoridad. La desvirtuación de ésta por una exagerada elevación de ella, conduce al absolutismo, en cualquiera de sus formas. La de aquélla hace caer en la anarquía, que es otra forma del absolutismo: el de los fuertes sobre los débiles, tomando el derecho de la violencia como norma suprema de conducta y razón única de la fuerza de su derecho.

Se sostiene, señor presidente, que los derechos del hombre son la clave de la dignidad humana. Las grandes revoluciones del siglo XVIII fueron como una explosión del descontento acumulado por los oprimidos; lástima que en nombre de la misma libertad y contra un poder para mayor sarcasmo llamado liberal, que había venido a liberarlos, tuvieron que levantarse sesenta o setenta años después en nombre del pueblo, o en nombre de grupos, a fin de combatir a ese liberalismo que, cargado de promesas y de palabras, estaba también plagado de injusticias y de desigualdades. Como siempre, en sus luchas acudió al poder, y al igual que en otros casos el hombre perdió su dignidad, pudiendo decirse que existe una relación inversamente proporcional entre el poder político y la persona humana. Cuando más extenso es el primero, menos profunda y menor contenido encierra la persona, y la libertad del hombre pasa a ser una simple función.

Hegel hará del Estado un dios, y la idea de libertad, para él, no tendrá verdadera realidad sino en el propio Estado. Pero al lado de Hegel están las derechas, los totalitarismos fascista y nacionalsocialista, y del otro lado el absolutismo marxista. En ellos, el hombre no es absolutamente nada; pasa a la condición de realidad instrumental, secundaria y accesorio, pierde su valor religioso, su intimidad familiar, desapareciendo los valores sobre los que se fundamenta toda una tradición cristiana y humana.

La personalidad humana cuenta con un sagrado conjunto de derechos, y cualquier manifestación del poder en contra de ellos es un paso hacia la despersonalización del hombre. El derecho a la vida y a la integridad corporal, el derecho al libre desarrollo de la vida intelectual y moral, la libertad de pensamiento y de conciencia son también fundamentos básicos de la personalidad. El derecho a la independencia, el derecho al trabajo, son y han sido avasallados por los poderes políticos. Por ello, señor presidente, las asambleas internacionales, como lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, han defendido esos mismos derechos para pasar a crear un nuevo derecho, que forma parte de la comunidad internacional.

De ahí que los decretos leyes represivos y discriminatorios deban ser derogados en homenaje a un futuro que todos anhelamos, no solamente porque se hallan en abierta colisión con las garantías de la Constitución Nacional y de los principios similares en el plano internacional, sino porque van contra la persona humana, despersonalizándola, deshumanizándola, y nadie tiene derecho, aunque esgrima el mejor principio, a atentar contra ella para destruirla o para aniquilarla.

Hemos combatido esta legislación represiva; más aun, la hemos sufrido en carne propia. No queremos para nadie la condición de paria en su propia tierra. Por eso vamos a coadyuvar a la tarea emprendida, como bien dijo el señor diputado Mario Roberto, por una generación de argentinos a los efectos de salir del estancamiento en que vivimos.

La derogación de la legislación represiva es el comienzo de un tiempo que nos animamos a calificar de promisorio. Si este camino se abandona, horas sombrías han de esperar el país. Aplaudimos y apoyamos esta decisión de reencauzar al país en la legalidad, y para que todos los habitantes sean iguales ante la ley, y lucharemos contra los eternos corifeos del desorden y de la anarquía. En la ley y con la ley todo es posible.

Compartimos todos los esfuerzos que deban hacerse y aspiramos a que sólo se diga que como peronistas ante la patria sólo hemos sabido cumplir con nuestros deberes de argentinos.

Para terminar, señor presidente, no resisto la tentación de leer una expresión de Adolfo Saldías: «La prédica de los odios constituye un verdadero peligro para el porvenir de las ideas, cuyo desenvolvimiento retarda, lanzando en senderos extraviados a la juventud en vez de iniciarla en la experiencia saludable de la libertad y en las lecciones moralizadoras que presentan los propios infortunios políticos. Si la República Argentina hubiese seguido estas corrientes —dice Saldías— su progreso social y político no estaría en el estado de embrión y las ideas que ochenta años ha fueron solemnemente proclamas a la faz de la tierra servirían hoy de norma a los hombres de los pueblos que reaccionan todavía contra ellas.»

Y mi última reflexión, señor presidente: hace ochenta años que esto fue escrito y yo me pregunto si no son demasiados años para que el futuro del país todavía se siga ensombreciendo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Lejarraga. — Señor presidente: estoy anotado después del señor diputado Sarrulle.

Sr. Presidente (Del Pero). — No, señor diputado. La anotación que tiene la Presidencia indica que el señor diputado Lejarraga está después del señor diputado Nougués. El orden sería: después del señor diputado Sarrulle, el di-

putado Sandler, quien concurrió a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, por cuya razón corresponde que hable en este momento.

Sr. Lejarraga. — Me doy por satisfecho, señor presidente.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Señor presidente: felizmente, la voz de la bancada justicialista ha venido a colocar en mejores carriles este debate, y me abre la oportunidad de referirme a aspectos que estimo íntimamente vinculados con los proyectos que tenemos a nuestra consideración, que de seguir el debate en la forma como se desarrollaba hasta ahora, podrían haber aparecido un poco alejados de la cuestión. Confieso que he recibido una impresión que no esperaba a lo largo de este debate.

Lo que se pretende de nosotros es, nada más ni nada menos, que la derogación de leyes represivas; casi diría, un acto de liberación. Si bien es cierto que no vamos a libertar concretamente a nadie, en el fondo entraña el otorgamiento de libertades aparente o realmente cercenadas.

Este majestuoso recinto va a ser escenario de un acto de liberación. Esto solo bastaría para conmover las conciencias e inflamar los corazones; vamos a otorgar libertades, vamos a autorizar conductas que ya ayer no más —y dejando de lado las cuestiones formales— estaban al margen de la ley.

Sin embargo —y lo dijo un legislador en este recinto—, el debate parece que languidece como una vela que se apaga. Creo que la imagen es más o menos cierta; en rigor es una vela que en ningún momento he visto encendida. Ha faltado llama, ha faltado vigor, ha faltado entusiasmo en el debate. Ha sido un debate esclarecedor desde algún punto de vista; se han esgrimido algunos argumentos más o menos lógicos; ha habido coincidencias en la mayoría de los despachos, salvo aspectos muy particulares y, sin embargo, a la Cámara le ha faltado, vuelvo a insistir, ese entusiasmo dionisiaco que debería poseer a los legisladores que están por otorgar libertades que en este momento no se podrían ejercer.

¡Qué diferencias con otras etapas históricas del nuestro y de otros países! Cada vez que en alguna circunstancia se han arrancado libertades legítimas para los hombres que no las gozaban, podía haber denuestos por parte de los perjudicados, pero había ardor, sabor de triunfo por parte de los beneficiarios y de los autores de la conquista. Así ocurrió con la liberación de los esclavos del Sur, en Norteamérica; así ocurrió —salvando las distancias— con nuestros hombres de Mayo; así ocurrió cuando liberamos al país de las garras del primer tirano, Juan Manuel de Rosas; sí ocurrió también con la revolución de septiembre de 1955, donde barrien-

do con la dictadura el país tuvo la sensación de la nueva libertad.

Sr. Pedrini. — Y de los fusilamientos.

Sr. Sandler. — Y de los fusilamientos.

Sr. Antón. — De los traidores.

Sr. Pedrini. — De los argentinos que querían un poco más de paz.

Sr. Antón. — De los traidores de la República y de la democracia.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Voy a hacer una advertencia para mí mismo, pero en voz alta. Descarto desde ya que mi disertación no procura en ningún momento encrespar ningún ánimo. Vaya esto dicho exclusivamente respecto de la bancada justicialista. Puede ser que por la pasión que ponga en el asunto emplee alguna palabra no del todo correcta.

Voy a aceptar toda resistencia, pero quiero anunciar que no es éste el temperamento que anima mi discurso.

Sr. Pedrini. — Ya estamos acostumbrados a los insultos.

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado Pedrini no está en el uso de la palabra, y la Presidencia le ruega se sirva no interrumpir al orador.

Sr. Sandler. — No tengo inconveniente en otorgar cuantas interrupciones deseen solicitar.

Yo veo y tomo la parsimonia de la Cámara para tratar este asunto, su falta de entusiasmo, como un síntoma de algo más hondo, que está encubriendo disimuladamente el problema que tenemos sobre la mesa. El propio proyecto del Poder Ejecutivo está dentro de esa tesitura, así como los proyectos de la comisión.

Resulta que vamos a instaurar lo más grande que tiene el hombre, vamos a restablecer sus libertades, y esas libertades vienen envueltas con artículos modificatorios del Código Penal relativos a los cheques sin fondos, es decir, en algo que realmente no es digno de la materia esencial que estamos tratando.

Parece que el asunto se tratara al acaso, como si la legislación represiva, que será constitucional o inconstitucional en su forma, hubiese sido fruto del capricho o de la tontería de quien en su hora tenía las riendas del poder. Estamos perdiendo la noción cabal. Esos decretos leyes, que son inconstitucionales en su forma, por lo cual nuestro bloque ha propiciado su derogación, son una página viva de la historia argentina; son la respuesta a un problema de la historia argentina, un problema que aún hoy estamos viviendo, pero no aquí en el recinto, sino allí, en la calle...

Sr. Sarrulle. — Es lo que interesa: la calle.

Sr. Sandler. — ...donde tenemos la conmoción social que se avecina, la reacción que existe, por razones que trataremos de puntualizar.

Hay un despacho que leí con mucha atención. Es el perteneciente a la democracia progresista,

que en uno de sus párrafos dice que espera que ésta sea la última etapa del proceso de recuento de todos los argentinos. Aparte de la nobleza y hermosura de esos anhelos, esas palabras revelan una profunda ingenuidad con respecto al problema que, salvo por la bancada justicialista, no se ha planteado en los debidos términos.

La falta de entusiasmo, repito, tiene un valor sintomático. Lo que ocurre es que todos sentimos la honda y vital contradicción que padecen todos los hombres democráticos. Porque los hombres de la dictadura, los hombres de las tiranías, los hombres de los totalitarismos sin adjetivos de ninguna especie, no tienen esas contradicciones.

Sr. Caro. — ¿Me permite el señor diputado una interrupción?

Sr. Sandler. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Indudablemente que en forma más o menos velada el señor diputado se está refiriendo al peronismo. Por ello pido al señor diputado que explique a la Cámara y al país cuál es su concepto de la democracia, y qué valor tiene, dentro de su concepción democrática, el sentido de la mayoría, porque me temo que el señor diputado sea un demócrata que merecería no estar en este parlamento sino en la corte de Luis XIV.

Sr. Sandler. — Tomo la pregunta en todos sus términos, porque es mi afán, precisamente, esclarecer este aspecto de la democracia.

Sr. Pedrini. — ¡Qué va a esclarecer el señor diputado, si defiende lo indefendible! No se puede esclarecer con odio.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Presidente (Del Pero). — Está en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Si el señor diputado Pedrini quiere preguntarme algo, no tendré ningún inconveniente en responderle.

Sr. Pedrini. — Tendría que preguntarle muchas cosas, señor diputado.

Sr. Sandler. — Le concedo, entonces, la interrupción.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

Sr. Pedrini. — Le quiero significar al señor diputado Sandler que de ninguna manera se puede edificar en este país en base a viejos resentimientos, al odio y a la sed de persecución y venganza que animan a algunos sectores de la vida nacional. No se puede pacificar así al pueblo argentino; y el representante de lo que, lejos de ser un partido político, tiene todos los vicios de una sociedad anónima —cuya única y ambiciosa finalidad fue llevar al poder a un general del ejército el 7 de julio, pensando sacar

jugosos dividendos de sus acciones y de la estafa al pueblo— no tiene autoridad para venir aquí y hablar en esta Cámara de democracia. De ninguna manera se pueden aceptar las barbaridades...

Sr. Antón. — Ustedes están aprovechándose de los dividendos del tráfuga.

—Hablan varios señores diputados a la vez y suena la campana.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sirvanse no interrumpir, los señores diputados. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Yo creí que el señor diputado Pedrini iba a decir algo.

Sr. Pedrini. — Dije muchas cosas, señor diputado.

Sr. Sandler. — De poco valor.

Sr. Pedrini. — Ustedes no son un partido político.

Sr. Antón. — ¿Y qué partido político son ustedes, que están aprovechándose de los bienes del difunto?

Sr. Sandler. — Decía que este titubeo, más espiritual y profundo que aparente, es propio de los sistemas democráticos. Los sistemas dictatoriales, tiránicos o totalitarios no tienen esta clase de dudas. Saben muy bien que su posición ideológica y lógica no es coparticipar en el poder; es destruir al adversario hasta sus últimas consecuencias.

La mano fuerte de los dictadores no titubea por razones de justicia. No respeta las libertades ajenas. Los dictadores son amos, y quienes los siguen, siervos. Sólo los hombres libres, no los siervos, tienen problemas, porque quieren la libertad para sí y para los otros.

Y aquí es donde se plantea profundamente el problema que señalo, que nos obliga a meditar sobre muchos conceptos que tenemos muy puestos en la boca, pero que no siempre reactualizamos.

El hombre de la democracia, el hombre de la libertad, es emplazado por cualquier persona de cualquier totalitarismo para que cumpla su consigna y otorgue las libertades que su sistema pregona. Pero esa otra persona quiere esas libertades, y lo dice de viva voz, para tan luego tenga las riedas del poder, quitarle la libertad a quienes se las dieron.

Este es un hecho que ocurre sistemáticamente, y los hombres de la democracia y de la libertad tenemos plena conciencia de ello. No podemos resistir nuestra llama interior; no podemos sofrenar el anhelo de repartir la libertad que amamos.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Caro. — ¡Qué bueno! El señor diputado es el dueño de la libertad.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sirvase el señor diputado Caro no interrumpir al orador.

Sr. Sarrulle. — Me parece que el concepto del señor diputado Sandler no es muy preciso, porque no es democrático.

Sr. Sandler. — Ya voy a llegar a eso.

Sr. Pedrini. — ¿Adónde va a llegar? El señor diputado está repartiendo...

Sr. Antón. — Les está repartiendo a ustedes.

Sr. Sandler. — Ya voy a llegar al problema, que a mí me preocupa tanto como a los señores diputados; sólo que lo voy a plantear cruda y tajantemente, como una autodisección, para que sepamos bien dónde estamos.

Vuelvo a insistir en que este tipo de problemas es propio de los hombres liberales; los hombres de la dictadura no los tienen. O, mejor dicho, los tienen quizá cuando están pidiendo la autoridad, pero no cuando la ejercen. Nosotros, los que hoy estampamos nuestra firma para derogar la legislación represiva, quizá no alcanzamos a comprender bien la realidad.

Sr. Pedrini. — Aramburu lo va a echar del partido.

Sr. Sandler. — No alcanzamos a comprender bien todo lo que esto implica, a la vez que levantamos esta proscripción, no podemos olvidar —y no por resentimiento— cuántos de nosotros estuvieron en las cárceles por defender la libertad; cuántos de nosotros vimos avasallar «La Vanguardia», «La Prensa», «El Intransigente» de Salta y muchos otros órganos de expresión del pensamiento, que no cito por lo extensa que resultaría la nómina.

Nosotros no podemos olvidar el espectáculo de este Parlamento adocenado por un dictador y de un mandamás en la Casa Rosada. Nosotros no podemos olvidar el endiosamiento de la esposa del dictador. No podemos olvidar que en las escuelas argentinas era libro de texto *La razón de mi vida*. Nosotros no podemos olvidar tanto avasallamiento de la dignidad argentina.

Estamos dispuestos a levantar la legislación represiva, pero tenemos mucho temor de que por esa puerta abierta pueda regresar la dictadura. ¡Y cómo no vamos a tener temor, señor presidente!...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Casas. — Le pido una interrupción amable al señor diputado.

Sr. Pedrini. — Yo estoy temiendo que el señor diputado me tire un coco. (Risas.)

Sr. Sandler. — No gaste palabras, señor diputado.

Le concedo la interrupción al señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Simplemente deseo hacer una observación a la exposición del señor diputado.

Creo que el señor diputado está profundamente equivocado en la forma como se ha expresado ante la Honorable Cámara. Su frase

«no podemos olvidar» significa que hay algo en el subconsciente que aflora a cada instante en la mentalidad del distinguido diputado Sandler y que trasunta un odio que surge de ese subjetivismo y ese subconsciente.

Quiero hacer notar al señor diputado que la expresión «no podemos olvidar» trae también al campo de mi conciencia otro «no podemos olvidar». Yo recuerdo aquellas bombas infames que masacraron al pueblo indefenso en la Plaza de Mayo.

Sr. Antón. — Llamado por ustedes.

Sr. Presidente (Del Pero). — Señor diputado Antón: sírvase no interrumpir al orador.

Sr. Casas. — El «no podemos olvidar» trae a mi memoria aquellos fusilamientos infames de junio de 1956, aquella persecución tremenda de Aramburu y Rojas, aquellas cárceles, aquellos hombres y mujeres perseguidos y que también eran argentinos.

Espero que esa frase acompañe al señor diputado esta noche en su sueño y que lo persiga, para que mañana venga purificado a esta Cámara, con un sentido argentinista, diciendo a la República: «he podido olvidar», para hacer la conciliación y la paz. Y creo firmemente que este bloque justicialista ha venido acá olvidando, para hacer la Argentina grande del mañana.

Por eso fustigo esa frase y creo que ella ha sido fruto de una equivocación, porque de lo contrario sería una infamia del señor diputado Sandler haber dicho ante la Honorable Cámara que no puede olvidar.

El camino de la pacificación argentina está en el olvido del pasado. Esto es lo que quería observar al señor diputado Sandler, a quien agradezco la interrupción concedida.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — No ha sido una equivocación. Ha sido la expresión real de lo que siento.

No me extraña que sean propensos a olvidar...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sírvanse no interrumpir al orador, señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — No me llama la atención que sean tan propensos al olvido, y no me refiero a esta bancada, sino a los que sostenían ciertas ideologías cuando el país fue sumido en una desgraciada situación por un olvido total del glorioso pasado que tiene, cuando los próceres eran no igualados, sino soterrados por los que estaban entonces en el poder.

Decía Estrada: «¡Pobres de los pueblos que olvidan su pasado!» Además, no soy yo quien lo recuerda; es el propio dictador que nos manda su recuerdo y son los propios argentinos que ven la acción en la calle como si aquí nada hubiese pasado. Precisamente yo hablo porque

este recuerdo no lo quisiera tener, como no quisiera tener ni de éste ni del otro ni el polvo de sus huesos. Pero yo no lo traigo; lo traen aquí quienes ven todavía un posible pacificador en quien ha sido un miserable para la República. Es un delincuente común, y de él no hablo más.

Sr. Sarrulle. — Hace bien.

Sr. Sandler. — Quiero decir que el problema es más hondo y voy a hacer otro reconocimiento.

Equivocamos el análisis de la situación quienes pensamos que la dictadura pasada haya llegado sin el aval popular; equivocamos la apreciación. Es cierto que pueden haber habido técnicas y maniobras —y reconocidas están—, pero nadie puede negar que las mayorías, si no absolutas, por lo menos relativas, nos impusieron cierto sistema de gobierno, nadie puede negar que las mayorías de este Parlamento, que eran mayorías —y esto hace a la esencia de la democracia—, también impusieron las leyes de las cuales tenemos que avergonzarnos. No tenemos que olvidar que también en determinados momentos fueron las mayorías de la Alemania nazi las que impusieron y mantuvieron a Hitler, como tampoco podemos olvidar que fueron mayorías las que hicieron la marcha sobre Roma.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado Sandler ha manifestado que no desea ser interrumpido.

Sr. Serú García. — Solamente quería preguntar al señor diputado si está haciendo la apología...

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia advierte nuevamente al señor diputado que el orador no desea ser interrumpido.

Sr. Sandler. — Resulta muy fácil al señor diputado Achiary aconsejar el levantamiento de la proscripción al comunismo; pero cuánta mala fe, no personal sino del pensamiento intelectual existe en esto, cuando nos dice: porque esto no extraña peligro. Es que todos estamos de acuerdo en que es muy cómodo respetar la voluntad de la mayoría cuando la mayoría no entraña peligro, pero éste no es el problema y yo lo pongo sobre la mesa. ¿Tiene la posibilidad la mayoría, en uso de las libertades, imponer la tiranía a todo un pueblo? ¿Le es posible a la mayoría, en uso del derecho de libertad, imponer la dictadura a todo un pueblo?

Sr. Sarrulle. — ¿Puede hacerlo la minoría?

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Sandler. — Estoy planteando problemas que hacen a la esencia de la política. No he querido venir aquí con frases hechas, sino que he querido traer mis pensamientos que serán correctos o no lo serán, pero que son planteados con toda su crudeza.

Recuerdo test sociales hechos en otros países, en donde se ha preguntado al ciudadano:

—«¿Usted tiene inconveniente en que participe el Partido Comunista en la política?» —«De ninguna manera.» —«¿Pero usted admitiría que el 51 por ciento de la población resolviera hacer de éste un país comunista?» —«De ninguna manera.» En esta ingenuidad de la respuesta está planteado el problema: ¿Cuál es el derecho de las mayorías? ¿Qué hay de sagrado y de eterno en la soberanía popular? Tomemos las cosas como son. ¿Tendría posibilidad una mayoría del 51 por ciento de la población, aquí y en cualquier país del mundo, de recomendar...

Sr. Caro. — ¿Y el 49 por ciento tiene esa posibilidad?

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Sandler. — Yo estoy hablando de una mayoría totalitaria y del comunismo, y no veo por qué se encrespa la bancada justicialista.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, para hacerle una pregunta?

Sr. Presidente (Del Pero). — El señor diputado ha expresado que no desea ser interrumpido.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Me preguntaba, señor presidente, si se recomendara como conveniente el incesto, qué diríamos los que no participamos de esta idea. Si la mayoría recomendara ese tipo de actitudes, ¿no pensaríamos que la voluntad soberana es sólo lícita cuando es razonable?

Sr. Serú García. — ¿Y cuál sería el tribunal de la razonabilidad?

Sr. Sandler. — La libertad.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Aquí se ha estado equivocando el planteo del problema. La democracia, que tan insistentemente se ha citado hoy en esta sesión, será, como dice Churchill, el menos malo de todos los sistemas de gobierno; quizá sea el mejor de ellos. Pero la democracia no viene a decir cómo se gobierna. La democracia es el método que los hombres han encontrado para decir «quién» debe gobernar. Pero ella no dice «cómo» se ha de gobernar.

Hay principios válidos, razonablemente aceptados, que no puede desnaturalizar la democracia, así estuviera respaldada por la mayoría absoluta, total, plena. ¿Es que acaso ignoramos que la ciencia política de este siglo XX —en el que con justa razón decía el señor diputado Muñiz que le ha gustado nacer, y a mí también me gusta, porque nos plantea problemas nuevos— ha descubierto que hay democracias liberales y democracias totalitarias? ¿Es que acaso no percibimos que también el pueblo puede ejer-

cer una dictadura, y que una dictadura de éste, como la de un tirano o de quien fuere, es siempre la pérdida de la libertad?

El problema de la razonabilidad, que preocupa a algunos de los señores diputados, encuentra su vía de solución si pensamos que antes de la democracia —método para determinar quién debe gobernar— está el problema de la libertad, que indica el modo en que se debe gobernar.

Sr. Sago. — Es decir que hay que buscar el fraude patriótico.

Sr. Sandler. — No se trata del fraude patriótico. Un fraude sería si no expusiera los argumentos con esta crudeza para encontrar un principio de solución.

Cuando los hombres toman el fusil para defender su libertad...

Sr. Pedrini. — Los soldados lo toman en este país; no los hombres.

Sr. Presidente (Del Pero). — Señor diputado Pedrini: ningún diputado puede interrumpir, a menos que cuente con el consentimiento del orador y con la venia de la Presidencia. Le ruego que se atenga a esta norma reglamentaria.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Esta impotencia del sistema democrático para dar garantías sobre la vigencia de la libertad es lo que en el día de hoy, que debería ser glorioso si fuera justo, nos llena de cierto sabor amargo la boca. Ingenua espera, señores diputados, si no se hace incapie en que por sobre el método político de elección debe privar siempre la libertad, porque mientras haya un argentino con voto, que tenga conciencia de esto, no habrá mayorías que puedan borrar esta convicción.

Antes que la democracia, está la libertad. La democracia nos da la posibilidad de sentirnos más libres que en otros regímenes, pero no es la efectiva libertad. La libertad es otra cosa. Desde este punto de vista, si creemos que vamos a obtener de la democracia lo que ella de por sí no puede dar, cometeremos un grave y tremendo error y todo este pedazo de la historia argentina que hemos llamado «legislación represiva», quiéranlo o no, se va a volver a reproducir. Seríamos muy pobres de espíritu si pensáramos que todo esto se ha hecho con ideas revanchistas, de partidos. ¿O es que ignoramos que todos los partidos políticos estaban aglutinados frente, no a otro partido político sino a una real y efectiva dictadura? Aquella era la lucha por la libertad; no por otra cosa. Se guardaron en casa las diferencias programáticas; se reservó para después la manera de combatir políticamente; pero antes que nada, había que luchar por la libertad. Este es el fondo del problema y la verdad de la cuestión. Mal que nos pese, se impone esta conclusión: la democracia no lesiona la libertad en la medida en que se

hayamos dado las condiciones previas dentro de la sociedad.

Yo no vengo a decir que por vía del Código Penal vamos a dar las condiciones previas. Este razonamiento me lleva indefectiblemente a pensar que todo el problema entronca en cuestiones económicas, políticas y sociales, pero lo que es difícil admitir como una verdad es que un pueblo de cien mil analfabetos, en un caso hipotético, acierte con el camino de la libertad, si es que es analfabeto y carece de las posibilidades económicas que debe tener.

La democracia es una flor que tiene sus raíces en el concepto liberal. Para que nazca, las condiciones previas deben estar dadas. Hay algunas que no podemos gobernar porque son de evolución natural, pero hay otras, como las condiciones culturales, que caben dentro de nuestras posibilidades. Entre estas condiciones culturales, indudablemente, figura el ordenamiento jurídico, como producto exterior del hombre, que sirve para condicionar la sociedad.

Quienes reclaman la derogación de las leyes represivas invocan, precisamente, la sabia Constitución que, dicho sea de paso, no ha sido elaborada por ninguna mayoría democrática. La Constitución asegura la libertad para todos los ciudadanos en su parte preliminar; y el respeto a la Constitución está entre las condiciones previas, para condicionar la sociedad. Es usando de esa libertad como los hombres nos organizamos en sociedad. Claro que todo esto era a mitad del siglo pasado, en que no había cámara de gas, ni se mataban seis millones de judíos, no se conocía el muro de Berlín ni una situación como la de Cuba ensangrentada. El mundo de las masas ha irrumpido y ello es una realidad social que tenemos que reconocer.

Han variado las situaciones. También en la República de Weimar se hizo un catálogo de libertades que desgraciadamente acabó en el cabo Adolfo Hitler. Esta es una realidad que no podemos ignorar los argentinos, a menos de ser de mala fe. Ya no tenemos necesidad de apelar a las experiencias extranjeras, pues en nuestro país hemos tenido una triste y lamentable experiencia.

En la Constitución Nacional se aseguran libertades que se invocan aquí no solamente por determinados grupos sino por quienes más las conculcaron. Me pregunto, entonces, si no habrá una falla en la reglamentación de esas libertades y en qué medida ellas pueden ser usadas abusivamente para ir contra la libertad. Dentro del panorama de las condiciones previas que la Constitución debe asegurar para que la democracia impere con libertad se ubica el problema de la ley represiva. No es un odre nuevo el que inventamos aquí; se trata de un viejo odre donde hay que echar el vino nuevo.

Pensamos que esas libertades deben ser respetadas pero en el justo quicio de la razonabi-

lidad, es decir, que quien abuse de ellas para atentar contra la libertad y el sistema democrático representativo que asegura la Constitución debe perder su libertad. ¿En defensa de qué? En defensa de esos valores que están enclavados en la Constitución. Y a menos que reneguemos de ella, como en cierta oportunidad se renegó de hecho y de derecho, hay que saber defenderla y luchar por su vigencia.

Se pretende derogar la legislación represiva sin reemplazarla por ninguna otra en un momento sumamente curioso. Hace pocos días el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto nos hablaba de una guerra infiltracionista. No hace días, sino años, que conocemos la guerra que existe entre el totalitarismo y la libertad, y quienes hayan visto de cerca este problema lo conocen perfectamente.

La derogación ocurre en un momento en que se está golpeando y batiendo el parche con un regreso que no sé por qué lucubración podrá repetirse en el país. Y en estos momentos, nosotros, a manera de pacificación, encontramos como solución adecuada abrir los cauces a esta manera de interpretar las libertades.

Me parece un tremendo error. Puede haber, y no lo descarto, un conjunto de razones tácticas en los enfoques de estos problemas, pero tengan presente los señores diputados que la astucia que triunfa es un éxito, pero la astucia cuando fracasa se llama traición. En este caso a los ideales liberales y democráticos que están enclavados en la Constitución Nacional.

No juguemos con fuego y tomemos las cosas como son. No es cuestión de reemplazar una legislación represiva, que estimo inconstitucional por sus vicios formales, con un anodino articulado que dice demasiado mucho y demasiado poco. Si hay buena fe y se cree que la dictadura, el totalitarismo y la tiranía no pueden cuajar en el país, debe existir la norma expresa que así lo prohíba con todo rigor, porque esto no es invento del diputado que habla. He citado la República de Weimar.

Ellos también tuvieron la experiencia del cabo Hitler. En la constitución de la República Federal, de 1958, en su artículo 24, se enumeran las tradicionales libertades que figuran en nuestra Constitución. Pero a párrafo seguido se dice que los hombres o las instituciones que abusando de esas libertades conspiren contra la libertad y la democracia, pierden la libertad. Esto está sentado en la ley fundamental; sentado con sangre, con seis millones de muertos, con una Europa sangrante y un mundo convulsionado. Es la dura experiencia aprendida de este violento siglo veinte.

Yo entiendo que olvidando aquí las raíces políticas partidistas que todos tenemos, y recordando más bien nuestra condición legislativa y la honda responsabilidad que nos cabe, debemos hacer el análisis de aquellas conductas sociales

que condicen con el sistema, y de aquellas conductas antisociales que se despliegan para voltear el sistema.

Creo que no es el momento para especulaciones. Quizá no tengamos toda la solución, pero no quisiera que se pensara como Goethe: «Yo no puedo hacer llover en todo el país; por lo tanto, riego mi jardín.» No nos dediquemos nosotros sólo a regar nuestro jardín, porque puede ser que en lugar de la ansiada lluvia lleguen males de los que no podamos salvarnos ni nosotros ni nuestro jardín.

Hago esta invocación general, y dejo para el debate en particular los argumentos jurídicos. Esto va al puro análisis político del problema. Analicemos las cosas con mesura, pero también con coraje y con valentía; tomemos los problemas como son para que —diría, parafraseando el viejo dicho— no sea que después debamos llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — Señor presidente: la posición del bloque del socialismo argentino ha sido fijada en la tarde de ayer por el diputado Muñiz, pero algunos discursos que he escuchado y consideraciones que se han formulado me estimulan a hacer uso de la palabra. Espero que la Cámara escuche un pensamiento a distancia del comunismo; a distancia del peronismo; desde ya, a mucha distancia de UDELPA, y a distancia quizá de todos los partidos políticos aquí representados. Voy a expresar el pensamiento del Partido Socialista Argentino; desde ya, con especial y particular referencia al tema en debate.

Nosotros también celebramos que con el voto de todos los bloques de esta Cámara nos dispongamos a derogar la legislación represiva, que es anticonstitucional, y que ha sido la fuente de abusos, vejámenes y persecuciones, que violenta y afrenta el espíritu jurídico y moral de la República y que es una mancha en el escenario patrio que debemos borrar esta tarde. Creemos sinceramente que la derogación de esa legislación represiva va a ser una ponderable colaboración a los propósitos de la normalización constitucional y legal en que, quiero creer, todos estamos lealmente empeñados.

Por eso, cuando yo presenté una iniciativa que creo es la primera en esta Cámara, y que tengo para mí como una honra, de derogación de la legislación represiva, al fundarla decía estas palabras que quiero repetir: «Estimo que la derogación de esta legislación debe ser uno de los primeros pronunciamientos del Congreso, como una contribución al proceso de normalización institucional que la República necesita apresurar y afirmar resueltamente, asegurando la libertad de pensamiento a todos los habitantes y favoreciendo las condiciones legales propicias

para la libre, orgánica y responsable exteriorización de todas las expresiones y tendencias de la opinión y de la acción política argentinas en el escenario fecundo y dinámico de nuestra democracia.»

Hemos pensado en algún momento que la Cámara estaba en retardo en la sanción de esta derogación, pero felizmente ha llegado el esperado día. Solamente me animo a formular una observación al despacho de la mayoría de la comisión: ¿cómo es posible que se hayan mezclado en un despacho cuestiones tan distintas como son la derogación de la legislación represiva, con reformas del Código Penal, que están en esa tarea permanente de perfeccionamiento de nuestra legislación? ¿Cómo podemos decir nosotros a la República que en un mismo despacho, confundiendo o mezclando cosas que deben separarse, vamos a votar la derogación de la legislación represiva, que ya he calificado como inconstitucional y persecutoria, reclamada por todo el país como una necesidad y como una esperanza, con reformas del Código Penal, que van desde el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos hasta la legislación de cheques, cuya importancia en absoluto quiero desmerecer, pero que no tienen ninguna vinculación con el problema planteado a la República y a esta Cámara de la derogación de la legislación represiva?

Pero dejando a un lado esta observación, queremos pensar que la derogación de la legislación represiva en estas circunstancias en que la alcanzamos después de un período largo y doloroso de la vida argentina, y tras el esfuerzo que venimos cumpliendo para encarrilar al país en la Constitución y la ley, será una prenda común de la convivencia nacional, que permita abrir un camino realmente de conciliación, que en este sentido será compromiso de futuro, y sería entonces el caso de decir, repitiendo una expresión que tengo en mi memoria, pero que no recuerdo cuándo ha sido dicha, ni quién la dijo, que nos permita a los hombres de todas las opiniones, a todos los argentinos en suma, reconciliarnos en la legalidad democrática, ireconciliarnos en el común denominador de la libertad!

Queremos pensar también que con esta sanción vamos a cerrar un proceso y vamos a abrir uno nuevo de tolerancia y democracia, en que todos los pensamientos y todas las tendencias puedan expresarse libremente. Y digo que vamos a cerrar un proceso porque la legislación represiva está en el gobierno defacto de Guido y está antes que Guido, está en el gobierno de Frondizi y antes de Frondizi; está en el gobierno de Aramburu y antes de Aramburu; y está en el gobierno de Perón y antes de Perón. Es un proceso que arranca en el año 1930, para señalar una fecha hasta donde llega mi experiencia política y quiere llegar hoy mi examen, una

fecha clave en la política argentina, porque en aquel año de 1930 se quebró en el país la continuidad jurídica por un golpe militar, con todas las consecuencias y perturbaciones que desde entonces, y por cuenta en parte de aquel acontecimiento, ha experimentado y vivido el pueblo argentino.

Aquí ha sido muy frecuente oír la invocación de que enfrentemos el porvenir y no volvamos al pasado. Mientras se decía eso yo hacía este apunte: que me disponía yo también a enfrentar el porvenir, y que si en algún momento volvía al pasado, como lo he hecho con la referencia que acabo de formular, no sería para reavivar heridas, ni para las fáciles acusaciones, ni tampoco lo haríamos con soberbia de acusadores ni superioridades de perdón, sino para recibir y aprovechar la lección de los tiempos y acontecimientos, porque, ¿quién ha de negar que en el presente que vivimos no está un poco el pasado? ¿Quién ha de negar que el porvenir que queremos conquistar no está dado por esta voluntad y este esfuerzo de los días de hoy?

Como hablo en una asamblea de hombres políticos, bien podría decir, quizás repitiendo algún viejo concepto, y en la seguridad de que el concepto será compartido, que la historia es la política del pasado, y que la política es la historia del presente.

En una evocación de la legislación represiva, que tiene una larga y dolorosa historia, quedaron atrás las viejas leyes represivas, quedaría atrás la ley 7.029, de seguridad social, dictada en los días del Centenario, para mancharlo; ley violatoria de los derechos de reunión, de petición, de asociación de prensa que establecía penas gravísimas, inclusive la de muerte; ley dictada en una hora de resentimiento y de miedo de la vieja oligarquía, que recién pudimos derogar en 1921 con la reforma del Código Penal.

Quedaría también atrás la ley 4.144, la famosa 4.144, famosa por su mala fama, dictada a principios de siglo, que recién fue derogada en el año 1958. Cincuenta y seis años necesitó el país para derogar una ley inconstitucional y abusiva que dejó mucho dolor en el pueblo argentino. Sabe el país cuánto ha sufrido el Partido Socialista antes y después de esa época, por esa legislación represiva, y sabe también con que entereza la ha afrontado y resistido, altiva y dignamente.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Lejarraga. — Dejo ese pasado para llegar a 1930 y partir de entonces hasta nuestros días, pasando por el general Uriburu, el general Justo, el general Perón y el general Aramburu. Esta cita de generales no es mal intencionada, sino cronología histórica. Y pasando luego por los gobiernos de Frondizi y Guido. Durante todo ese lapso la legislación represiva ha estado pendiente sobre el pueblo argentino como una es-

pada de Damocles, que muchas veces ha caído sobre la carne inerme y dolorida del proletariado argentino.

No necesito recordar las intenciones de legislar también contra el comunismo y las ideas de izquierda social de los años 1933 y 1936, en que resplandeció el verbo tribunicio de aquellos grandes argentinos que desde sus bancas de senadores combatieron y anularon aquellos intentos: Lisandro de la Torre —recordado la otra tarde—, Mario Bravo, Eduardo Laurencena y Alfredo L. Palacios, que desde su primera diputación en 1904 se ha batido contra esta legislación, y que si no estuviera enfermo, esta tarde estaría aquí fulminando la regresión. Y llegamos así, avanzando rápidamente, a un decreto famoso en la historia de la represión argentina, el decreto 536, de 1943, y el proyecto de ley de defensa de la democracia, del presidente Frondizi. El decreto 536 que se declaró inconstitucional y fue derogado por la revolución de 1955. Ese decreto y el proyecto de defensa de la democracia del presidente Frondizi, que no llegó a sancionarse, son los dos antecedentes que constituyen como la matriz o molde en que había de vaciarse la legislación represiva que en las últimas dos décadas ha conocido y ha sufrido el pueblo argentino.

No resisto la tentación de leer el decreto de la revolución de 1955, por el cual se derogó el decreto 536. Lo haré, no para lisonja de la revolución, que en la materia se comportó como los que le antecedieron y siguieron, lo hago como antecedente, y desde que contiene en síntesis la doctrina de lo que en contraposición al derecho penal democrático se llama autoritario o totalitario. Ya veremos por lo demás la duplicidad en la materia, de este gobierno, duplicidad que se verá luego también en el gobierno de Frondizi, en que se predica la libertad y el respeto a las ideas mientras se elaboran las leyes y se acuñan los instrumentos de la persecución.

Dice así el decreto derogatorio del decreto 536 del año 1943: «Considerando que, so pretexto de establecer un ordenamiento de defensa de la Constitución y de alguno de los principios básicos consagrados en su capítulo de declaración de derechos y garantías, se dictó una reglamentación que los altera, degrada y aun los extingue en todo o en parte, que la redacción de su articulado constituye una muestra acabada del derecho penal autoritario, que incorpora a nuestro régimen jurídico la represión del delito de opinión, ya que no sólo se persigue la ejecución de actos materiales y objetivos que alteren el orden constitucional, sino la simple preconización o difusión de ideas o doctrinas amparadas por los mismos principios constitucionales que invoca proteger; que se establecen normas de carácter subjetivo que atentan contra los habitantes del país y las asociaciones, poniendo en manos del Estado un instrumento arbitrario y discrecional que destruye la garantía de la libertad individual; que en

esta forma concreta aparecen violados directamente los derechos inherentes a la personalidad, al pensamiento y a la asociación...»

Y hablaba de duplicidad, señor presidente, porque esa misma Revolución Libertadora nos dictaba luego en octubre de 1956 el decreto sobre Junta de Defensa de la Democracia, cuyo número no recuerdo ahora. Me refiero a aquel famoso decreto que so pretexto de controlarlas, perseguía a las organizaciones comunistas, inventaba la categoría de criptocomunistas, y establecía toda una variedad de matices en torno del comunismo.

Dejo todo esto, que ha quedado un poco atrás, y paso a referirme ahora a los decretos contra la opinión peronista y comunista, cuya derogación está considerando esta Cámara. Me permitiré una breve referencia sobre los mismos, empezando por el peronismo.

El primer decreto, el número 4.161, dictado por el gobierno de Aramburu, había sido derogado por la ley 14.444, por una ley nacional; pero luego el gobierno defacto, con las firmas de Guido y Adrogué, como ministro del Interior, lo restableció mediante el decreto 7.165, que fue ratificado con fuerza de ley por el decreto 1.296/63 con la firma de Guido y Martínez como ministro del Interior. Hubo todavía un decreto posterior, el 2.713, que fijó y amplió los alcances de los decretos anteriores.

La legislación contra el comunismo en este período, tiene su punto de partida —y esto es lo inaudito, porque ya no se trata de un gobierno defacto o usurpador— en el gobierno del presidente Frondizi, con el decreto 4.965/59, que valdría la pena leer, que fue ratificado por Guido por el decreto 8.161/62. En un posterior perfeccionamiento de esta legislación represiva se dicta el decreto ley 4.214 del 24 de mayo de 1963, que es reglamentado y complementado por los decretos 5.540 y 5.541.

Valdría la pena analizar y caracterizar esta legislación represiva. No lo han hecho los señores diputados que han hablado esta tarde y en la reunión de ayer.

Todos se han ocupado en exposiciones por cierto muy eruditas sobre fundamentos doctrinarios y antecedentes históricos de la libertad y del derecho de opinión, incursionando también sobre los conceptos del derecho penal democrático y del derecho penal totalitario o autocrático, hasta esta tarde en que se ha avanzado sobre el tema político directamente. Pero valdría la pena, digo, echar un vistazo a esta legislación, para ver hasta qué grado llegó el avasallamiento y desprecio de las normas constitucionales sobre los derechos individuales y las elementales garantías de cualquier enjuiciamiento y sanción criminal.

Tomo al azar el decreto 4.214/63, que en su texto y en los fundamentos establece el delito de opinión, delito que es penado severamente y que se completa con una serie de medidas,

prohibiciones y condenas accesorias, que prácticamente disponen la muerte civil del ciudadano alcanzado por ese decreto. Y dejo a un lado señor presidente toda la doctrina de nuestra Constitución sobre la legislación penal, que ya han agotado los anteriores oradores.

Después de establecer inicialmente que se declara ilegal, y, en consecuencia, se prohíbe la actuación en la República Argentina de toda asociación de personas u organizaciones que, bajo el nombre de partido comunista o cualquier otra denominación, proclame o admita los principios del comunismo internacional en cualquiera de sus formas, el decreto 4.214 agrega, en el artículo 3º, que quedan particularmente comprendidos en tal prohibición la difusión de la doctrina y propósitos del comunismo, así como los actos de proselitismo, adoctrinamiento, ayuda o requerimiento de ayuda para el sostenimiento y expansión del comunismo.

El artículo 4º, en su inciso 1º, y con una total falta de tipificación, establece el delito de opinión al disponer que se reputará comunista toda actividad que tienda a sustituir o reformar el sistema institucional de la Nación o el orden social existente, propugnando en su lugar la implantación de un régimen basado en la doctrina, la plataforma, los programas u objetivos de las internacionales comunistas o del comunismo en cualquiera de sus formas. Frente a esta disposición sería el caso de preguntarse dónde queda el artículo 30 de la Constitución Nacional, que admite la posibilidad de su reforma parcial o total.

El inciso 2º del mismo artículo 4º considera comunista a cualquier persona afiliada a un partido, asociación u organización comunista, nacional o extranjero, sea cual fuere su denominación.

El artículo 5º establece las prohibiciones más absurdas como el desempeño en el orden nacional, provincial o municipal, de funciones públicas electivas, administrativas o judiciales; el ejercicio de la docencia en establecimientos públicos o privados destinados a impartir enseñanza; el desempeño de funciones directivas o representativas en organizaciones educativas, culturales, artísticas, profesionales, patronales u obreras; ser beneficiario de becas otorgadas por instituciones oficiales o subsidiadas por el Estado.

Como se recordará este decreto 4.214 alarmó a las universidades argentinas, motivando pronunciamientos de la mayoría de ellas. Las universidades se sintieron en la obligación moral y espiritual de salir en defensa de la Constitución Nacional y de defender también sus atributos de organismos autónomos representativos de la cultura superior del país. Tengo sobre mi banca la declaración de la Universidad de Buenos Aires, cuya inserción en el Diario de Sesiones desde ya solicito.

El artículo 10 establece las condenas accesorias, en una nómina que va desde la inhabilitación para votar y de ser elegido hasta el comiso y la clausura de lugares que en concierto con las otras disposiciones y prohibiciones sancionan prácticamente como ya hemos expresado la muerte civil del individuo.

No es necesario agregar que no se establece la condena condicional ni la excarcelación, beneficios de que gozan hasta los delincuentes comunes.

Tras el decreto 4.214, apareció el decreto ley 5.541/63 cuyo artículo 1º, que declara comunistas a numerosas organizaciones, lo que importa una verdadera sentencia por decreto, sin defensa posible y sin oír al acusado, dice: «Decláranse comprendidas expresamente en las disposiciones del artículo 1º del decreto ley 4.214/63 a las siguientes organizaciones...», y sigue la enumeración de una treintena de organizaciones en una mezcla informe de partidos, de bibliotecas, de publicaciones, de organizaciones sociales, de compañías de teatro, de entidades públicas, con un párrafo final que expresa: «Ello, sin perjuicio de las que sean incluidas en el futuro por decreto.» Este mismo decreto autoriza allanamientos ilegales y establece que el proceso «se efectuará a puertas cerradas».

No voy a seguir con esta puntualización porque quiero aprovechar los momentos que me faltan, entrando en un orden general de consideraciones, como lo han hecho otros señores diputados. Pero sea dicho y repetido que el estudio de esta legislación y una caracterización de ella, nos llevan a esta conclusión que yo anticipaba de condenas por un lado y de muerte civil por otro. Sobre este punto sólo deseo agregar lo siguiente: Vamos a derogar la legislación represiva, pero cabe señalar que no toda la legislación represiva está contenida en estos decretos que vamos a derogar sino que figura en una multitud de decretos que tienen aplicación y que seguirán teniéndola mientras no nos decidamos a una revisión y examen total. Debemos pensar también en abolir los instrumentos y organismos de la persecución. Así por ejemplo, ¿quién hace la calificación de comunista por estos decretos? Dice el artículo 1º del decreto 5.540/63 que «la reputación de comunistas, a que se refiere el artículo 4º del decreto ley 4.214/63, con relación a lo dispuesto por el artículo 5º del mismo, deberá ser efectuada, en forma fundada, precisa y circunstanciada, por la Secretaría de Informaciones de Estado conforme a las funciones que le otorga a la misma el decreto ley 4.500/63».

Nosotros vamos a derogar la legislación represiva, pero tememos que queden subsistentes sin contemplación ni examen los organismos de la represión, como lo es en gran medida

el SIDE, que figura una y otra vez en los decretos de represión que vamos a derogar.

Leemos en el decreto 2.985/61, firmado por Frondizi y Vítolo, artículo 2º: «El SIDE será el organismo de la Nación encargado de planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos, y serán sus funciones las siguientes...» Y en el decreto 4.500, dictado por el gobierno defacto de Guido, complementario del anterior, se expresa: «La Secretaría de Informaciones del Estado es el organismo estatal que tiene por misión realizar actividades informativas y producir inteligencia en interés de la seguridad de la Nación para la conducción de los asuntos de Estado y para la acción contra el comunismo.» Y en la mención de sus tareas, dice: «Planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comunismo y otros extremismos, en concordancia con el plan de defensa nacional», etcétera.

Y está bien claro que cuando nosotros propugnamos la derogación de esta legislación represiva, afirmando una vieja posición y prosiguiendo una vieja lucha, lo hacemos invocando la libertad de pensamiento y el derecho de opinión, a distancia del comunismo y del peronismo como ya he expresado, de los que nos separan diferencias ideológicas y tácticas que no creo necesario reiterar hoy y aquí. «La opinión —dice Alfredo Palacios— es un concepto o parecer que en ningún caso constituye delito, pues las ideas no son punibles. Un Estado democrático no puede declarar fuera de la ley a los que preconizan ideas sociales o doctrinas filosóficas contrarias a la democracia. Las ideas no pueden combatirse sino con otras ideas.»

Por otra parte, señor presidente, nosotros no hemos dejado de plantearnos en ningún momento el problema de lo que se ha dado en llamar el problema de la defensa de la democracia. ¿Pero no es acaso una paradoja, si no fuera un sarcasmo que esta legislación persecutoria sea dictada invocando la democracia? Que además es dictada por gobiernos usurpadores de la voluntad popular. Se trata de una legislación que afrenta conceptos e instituciones de carácter democrático, que por su contenido y su técnica es de inspiración nazi, fascista, totalitarias si se prefiere, que coloca a los destinatarios, y a la población toda, que es el gran destinatario, a merced de la persecución gubernamental y policial.

No hemos dejado de plantearnos como decimos, el problema de la defensa de la democracia; pero debemos decirlo, no se puede defender la democracia recurriendo a procedimientos antidemocráticos, de acuerdo con un desdoblamiento, que no admitimos, de los fines por un lado y de los medios por otro. No es por la vía de la legislación represiva, ni siquiera por las vías del Código Penal, sino por vías democráticas auténticas, que están en la esencia y en la

dinámica misma de esta concepción, por donde debe hacerse la defensa de este sistema político y de este estilo de vida, que nosotros defendemos porque es el que mejor preserva los valores humanos, porque es el mejor instrumento y la mejor garantía, al mismo tiempo, de la libertad, de la paz, de la justicia y de la fraternidad humanas.

Estamos, sin embargo, muy lejos de pensar que la democracia, como parece ser el juicio de algunos se confunda con el conjunto de los intereses y privilegios actualmente dominantes, y que la defensa de la democracia sea la defensa de intereses particulares o de intereses de minorías. Menguada democracia sería ésta. Nuestro concepto ya ha sido expresado muchas veces. La democracia es un proceso y una marcha. Y por eso hablamos de una marcha hacia la democracia social. Asistimos a un proceso que podríamos denominar de ensanchamiento y profundización de la democracia, que el socialismo en todas partes, con la incorporación de los trabajadores a la política y con su programa de hondas transformaciones sociales, ha contribuido y contribuye poderosamente a desarrollar. Por un lado, se han incorporado y se siguen incorporando a la dinámica de la democracia nuevos y nutridos contingentes de hombres y mujeres que ya con su sola presencia en la arena política producen una fuerte conmoción y que además aspiran a influir en la marcha de la sociedad que integran, como aspiran a ocupar un sitio en el banquete de la vida, y para ello hay que ampliar la mesa, siendo posible que algunos tengan que reducir el espacio por demás excesivo que ocupan en la misma. Es lo que se denomina la sociedad de masas, que a algunos oligarcas y conservadores alarma, pero que no debemos ver sino como el fenómeno natural y legítimo de los pueblos que se libentan de opresiones económicas y políticas, de los pueblos que ascienden a metas más altas de la cultura política y de la conciencia social.

Por otro lado, el socialismo, que desde el inicio viene anunciando y alentando ese proceso de incorporación de las masas a la democracia, ha planteado la modificación a fondo de nuestra sociedad capitalista, y tras una crítica al sistema de explotación humana y de privilegio de esta sociedad, ha elaborado y echado los moldes de las nuevas bases sobre las que pueda edificarse el sistema de la cooperación social, de la solidaridad humana, de la justicia y de la libertad. Son cambios fundamentales de orientación y estructura, para abrir un cauce fecundo a las energías creadoras de esos nuevos contingentes que se incorporan a la vida democrática, y que resisten los que pretenden tenerlos sujetos y oprimidos en los moldes estrechos de la sociedad actual, como en la conocida imagen del lecho de Procusto, que, como

la cama era corta, le querían cortar los pies.

Es como he dicho la democracia social, que los socialistas argentinos recogiendo el mensaje del socialismo internacional, y, en la Argentina, el pensamiento de Esteban Echeverría, venimos propugnando concreta y orgánicamente, no en una declamación más, sino en un vasto esfuerzo de superación, desde fines del siglo pasado. En una quizás insuperable definición, decía Esteban Echeverría, palabra más, palabra menos, que la democracia es el régimen de la libertad en una sociedad sin clases, desarrollando el concepto de que es un proceso que con sus normas y espíritu justiciero e igualitario y de libertad, penetra en todos los escenarios de la vida de un pueblo, en su política, en su economía, en su cultura, en las expresiones más profundas de su acción colectiva.

Señor presidente: al enjuiciar la legislación represiva, más de una vez en las palabras que llevo dichas, nos hemos referido a la clase trabajadora. La hemos invocado y hemos puesto en ella el acento. No es que creamos que la clase trabajadora sea la única destinataria y la única víctima de la legislación represiva. No. La legislación represiva en las distintas épocas que he recordado, la ha vivido y sufrido todo el pueblo argentino, pero la verdad, sea también dicha, es que quien más ha sufrido la legislación represiva y quien ha contribuido con una cuota mayor de sangre, llanto y dolor ha sido, sin duda, la clase trabajadora. Sus hombres son los que han llenado en mayor cantidad las cárceles, las prisiones, las comisarias y a veces desgraciadamente hasta los cuarteles de nuestra Patria. Son los hombres de trabajo que con la pérdida de la libertad, la mayoría de las veces iban perdiendo el pan de sus hijos, el pan de sus humildes hogares.

En nuestro país y en el mundo la legislación represiva siempre ha surgido frente a manifestaciones de la conciencia social de los pueblos, ha seguido sus variaciones y ha estado dirigida a acallar las voces del pueblo trabajador, las inquietudes de la acción social o las palpitaciones de la justicia. Siempre se ha dirigido fundamentalmente contra el movimiento gremial y político de los trabajadores y contra el pensamiento revolucionario del socialismo.

La legislación represiva se dicta en horas de retroceso y en horas de regresión, generalmente en horas de ilegalidad. En este mismo momento si yo quisiera dar un nombre como un símbolo viviente y sufriente del pueblo trabajador, víctima de la persecución, levantaría el nombre del obrero Felipe Vallese. Ni una palabra más, señor presidente: basta este nombre para que todos comprendamos de una injusticia y de un dolor grande en la clase trabajadora argentina.

Voy a suprimir el análisis de otros aspectos que hubiera querido tratar en mi exposición, y daré término a mis palabras con un justo y

oportuno recuerdo histórico, que es al mismo tiempo una afirmación del presente y del porvenir, afirmación de lucha y esperanzas. Estamos en septiembre de 1964.

En este mes se van a cumplir los cien años de la fundación de la primera internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, bajo la inspiración e influencia de Carlos Marx, que ya en 1848 había publicado su histórico manifiesto convocando a los trabajadores. Obreros británicos, belgas, suizos, franceses, que viajaron a Londres en representación de sus organismos, y obreros exiliados de todas partes del mundo que se habían refugiado en esa ciudad arrojados por los vendavales políticos y las persecuciones que siguieron a las revoluciones de la mitad del siglo pasado, se reunieron en dicha ciudad, sellaron su fraternidad de hombres y trabajadores, unificaron sus tendencias revolucionarias, vincularon sus organismos y dieron nacimiento al movimiento obrero en su doble expresión nacional e internacional, en su doble expresión sindical y política, en su doble expresión de lucha por conquistas inmediatas para mejorar la situación humana y social de la clase trabajadora y de lucha más alta y mediata por la instauración de una nueva sociedad fundada sobre un nuevo concepto de la propiedad, de las relaciones sociales y de la justicia social. En aquellos días —1864— los gremios eran ilegales, y el movimiento político de los trabajadores daba sus primeros pasos. Pero surgían a la empresa de la nueva vida y de la lucha emancipadora invocando las circunstancias de su existencia material que necesitaban mejorar, e invocando los altos principios de la libertad, de la moral, del derecho y de la justicia.

Aquella primera asociación internacional de trabajadores, cuyo centenario el mundo del trabajo va a celebrar este año, fue perseguida por los gobiernos de Europa; pero se superaron las persecuciones y se cumplieron las jornadas, y el mundo del trabajo alcanzó la gran realidad que es hoy en todas partes, y los trabajadores han pasado a ser los primeros protagonistas de esta historia que en este siglo se está forjando.

Aquel movimiento, con sus ideales y su ideal, levantaba una bandera, que era la de la libertad de pensamiento. Y yo quiero hoy recordar, frente a las persecuciones que se realizaron contra aquella organización y unión de los trabajadores, palabras que han sido recordadas ya en el Parlamento argentino y lo fueron por Enrique Del Valle Iberlucea, en el Senado de la Nación, cuando este ilustre ciudadano siendo senador, en el año 1921, fue víctima de un inicuo proceso político, precisamente por aplicación de una de esas leyes represivas —la 7.029—, y desafiado por el Senado. Son palabras de Castelar dichas en España, asumiendo frente a la persecución la defensa de la Asociación Internacional de Trabajadores, cuyo centenario vamos a cele-

brar, y defendiendo la libertad de pensamiento y expresión, y a través de esta libertad, que es posiblemente la primera y más esencial libertad, todas las libertades del hombre y del ciudadano: «No tiene la soberanía nacional, no tiene todo el pueblo, no tienen todas las asambleas deliberantes, atribución alguna contra el pensamiento ni sobre el pensamiento. Eso justifica todos los crímenes cometidos contra el pensamiento en el mundo. La creencia de la nación invocaba el código que pedía el castigo y el verdugo que preparaba el veneno para el filósofo de la conciencia libre; el dios de la nación invocaba al pueblo, que pedía la cruz para el mártir de la libertad religiosa; el sentido común de las naciones invocaba al inquisidor que tenía a sus plantas al matemático sublime que, con el péndulo en la mano, había medido la carrera triunfal de nuestro planeta por los espacios infinitos. Después de todo, lo que hay de triste para el poder en todo esto es la inutilidad de tales persecuciones. Arrancad la lengua de Giordano Bruno, de Vanini o de Savonarola, y dádsela a los perros; palabra vibrada por aquella lengua, dejará en el aire el círculo fugaz que deja la guija caída en el lago, pero dejará en el espíritu humano un círculo de luz en el cual se engarce eternamente una nueva sociedad o una nueva ciencia.»

Termino, señor presidente. Si he invocado el pasado ha sido con un sentido de lección para los días que estamos viviendo, para las tareas que tenemos que realizar, para los compromisos que, pensando en el porvenir, debemos concertar. Yo quiero también decir mi palabra pensando en el porvenir de la Argentina, y deseando, como una urgencia de la hora actual, que este proceso de normalización institucional y legal en que estamos embarcados pueda cumplirse plenamente. En ese proceso va a estar firme, tesonera y consecuente la contribución del socialismo, que aprecia y estima la libertad política como instrumento fundamental de su lucha política y social, de su lucha emancipadora.

Creo haber dicho aquí, en otro momento, recordando palabras de un gran argentino, no recuerdo en este momento si de Echeverría o Juan Bautista Alberdi, que la edad de oro de la Argentina está en el porvenir. Y bien vale la pena recordar este pensamiento, y profesión de fe al mismo tiempo, del gran pensador, de validez en todos los tiempos, y sobre todo en estos días de incertidumbre en que parecen cerrarse caminos y no dejan de advertirse signos de desesperanza. Quizás debiera decirse mejor,

que hay quienes creen que se cierran caminos, pero no advierten que se abrirán nuevos caminos, y que hay también desesperanzados sin advertir que la esperanza para las grandes cosas, nunca ha dejado de renovarse en el pueblo argentino.

Esa edad de oro, para nosotros los socialistas estará más próxima o más lejana, pero la Argentina la alcanzará cuando el pueblo trabajador, que es la gran mayoría nacional, ascienda a los planos más altos de la conciencia social y de la gravitación política; cuando nuestra democracia de hoy, nada despreciable, por cierto, pero con las limitaciones de un sistema social de privilegio, pueda transformarse en una democracia social sobre los cimientos del trabajo, la cultura, la justicia y la libertad, en un proceso que viene gestándose sin duda en el pueblo argentino, pero que a nosotros, los socialistas, nos urge acelerar, clarificar y consolidar con el idealismo y la voluntad de nuestra acción y las inspiraciones de nuestro ideario.

Digo para terminar: no podrán dejar de asociarse, de fundirse íntimamente en el futuro argentino, la clase trabajadora y el socialismo. La clase trabajadora es la fuerza, el movimiento, el impulso; el socialismo es la idea, es el ideal que necesita encarnar en la clase trabajadora, como la clase trabajadora necesita la inspiración y la guía del socialismo para abrirle al país los caminos ciertos y seguros de su emancipación humana y social (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — En mi carácter de presidente de la Comisión de Labor Parlamentaria informo a la Honorable Cámara que, de acuerdo al plan de trabajo preparado por la misma, con el auspicio unánime de todos sus componentes, se pasará a cuarto intermedio hasta mañana a las 14, con el propósito de votar en general a las 17 el orden del día número 88 que está considerando la Honorable Cámara, con cierre de la lista de oradores anotados hasta este momento, que son los señores diputados Amura, Amalio David Ruiz, Contini, Pedrini, Nougués, Costantino, Godoy, Gutiérrez, Pérez Gallar, Antón, Ferreira, Ritacco y Roberto.

Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio, de conformidad con el artículo 153 del reglamento, hasta mañana a las 14.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 5.